

CUARTA SERIE

EXPLORADOR

COLOMBIA

2



LE MONDE
diplomatique

De la guerra a la paz

Nos importa el crecimiento de nuestro país.

En PAE, estamos presentes en las cuatro principales cuencas de la Argentina. Allí desarrollamos yacimientos de gas y petróleo convencional y no convencional.

En el último año:

- Invertimos 1.500 millones de dólares.
- Incrementamos la producción de hidrocarburos y el nivel de las reservas.
- Generamos trabajo para 13.000 personas.

Nos importa Argentina. Por eso, hacemos.

Pan American
ENERGY

www.pan-energy.com

COLOMBIA EXPLORADOR

LE MONDE
diplomatique

2
CUARTA SERIE

De la guerra a la paz

Edición

Carlos Alfieri

Diseño de colección

Javier Vera Ocampo

Diseño de portada

Javier Vera Ocampo

Diagramación

Ariana Jenik

Edición fotográfica

Carlos Alfieri

Ariana Jenik

Investigación estadística

Juan Martín Bustos

Corrección

Alfredo Cortés

**LE MONDE
DIPLOMATIQUE**

Director

José Natanson

Redacción

Carlos Alfieri (editor)

Pablo Stancanelli (editor)

Creusa Muñoz

Luciana Garbarino

Laura Oszust

Secretaría

Patricia Orfila

secretaria@eldiplo.org

Producción y circulación

Norberto Natale

Publicidad

Maia Sona

publicidad@eldiplo.org

**Redacción, administración,
publicidad y suscripciones:**

Paraguay 1535 (C1061ABC)

Tel.: 4872-1440 / 4872-1330

Le Monde diplomatique /

Explorador es una publicación de

Capital Intelectual S.A. Queda

prohibida la reproducción de

todos los artículos, en

cualquier formato o soporte,

salvo acuerdo previo con

Capital Intelectual S.A.

© Le Monde diplomatique

Impresión:

Forma Color Impresores S.R.L.,

Camarones 1768, C.P. 1416ECH

Ciudad de Buenos Aires

Distribución en Cap. Fed.

y Gran Buenos Aires:

Vaccaro Hnos. Representantes

editoriales S.A. Entre Ríos 919,

1º piso. Tel.: 4305-3854

C.A.B.A., Argentina

Distribución interior y exterior:

D.I.S.A. Distribuidora Interplazas

S.A. Pte. Luis Sáenz Peña 1836

Tel.: 4305-3160

C.A.B.A. Argentina

Le Monde diplomatique (París)

Fundador: Hubert Beuve-Méry

Presidente del directorio y

Director de la Redacción:

Serge Halimi

Jefe de Redacción:

Philippe Descamps

1-3 rue Stephen-Pichon,

70013 París

Tel.: (331) 53949621

Fax: (331) 53949626

secretariat@monde-diplomatique.fr

www.monde-diplomatique.fr

INTRODUCCIÓN

La paz tan deseada

por **Carlos Alfieri**

Después de muchos intentos frustrados, Colombia está a las puertas de un acuerdo de paz definitivo con la guerrilla. Pero la paz sólo podrá consolidarse si se producen las reformas económicas y sociales que pongan fin a las profundas desigualdades e injusticias reinantes.

La historia de todas las naciones latinoamericanas es pródiga en acontecimientos de extraordinaria violencia, en guerras civiles, en situaciones y episodios de una injusticia extrema, en sangrientas represiones a sectores populares, en masacres sin fin. Pero la de Colombia ofrece tal vez la más depurada condensación de ese trágico devenir, porque muestra todos sus rostros de manera diáfana y desnuda, y en dimensiones de una magnitud que cuenta con pocos precedentes.

Ojalá tanto horror se limitara a la etapa que los colombianos bautizaron específicamente como “La Violencia”, que generalmente se sitúa entre 1948, cuando el líder liberal de izquierda Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado por orden del régimen conservador, lo que generó un levantamiento popular –el Bogotazo– cuya represión causó en tres días 3.000 muertos sólo en la capital, y 1957, final de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Durante ese período –que algunos historiadores extienden hasta 1966–, los enfrentamientos entre liberales (que organizaron fuerzas guerrilleras) y conservadores asumieron ribetes de guerra civil y dejaron una estela de destrucción y crímenes cuyo saldo fueron alrededor de 300.000 muertos y más de dos millones de personas que debieron migrar para huir de las persecuciones. Pero en realidad, y sin caer en una hipérbole, casi toda la historia colombiana podría denominarse “La Violencia”, pues las más variadas manifestaciones de ella atravesaron constantemente la vida del país y tuvieron como destinatarias preferentes a las clases más humildes de la población. No se trata de un destino ontológicamente determinado, ni de un designio fatal cuyas razones escapan al raciocinio; por el contrario, la violencia hunde sus raíces en el dominio brutal de una minoría de personas, poseedora de la mayor parte de las tierras cultivables, de las riquezas, de los resortes del poder, de los mecanismos de producción simbólica, sobre una inmensa mayoría de desposeídos. La lucha por mantener intactos esos privilegios y por aniquilar hasta el más tímido intento de reformular ese estado de cosas explica el

sistemático ejercicio de la violencia por parte del *establishment* y también, claro está, el de las respuestas que ha engendrado.

Los bloques sociales en conflicto, actores de cien años de crueles e interminables guerras civiles, generaron a mediados del siglo XIX sus expresiones políticas: el Partido Conservador, que representaba a terratenientes, esclavistas, grandes comerciantes, burócratas de alto rango del Estado, la Iglesia y la cúpula de las Fuerzas Armadas, y el Partido Liberal, que en cierto sentido encarnaba una prolongación de los ideales de Simón Bolívar heredados de la Revolución Francesa, cuyas filas se nutrieron de medianos y pequeños comerciantes, artesanos, campesinos, indígenas y esclavos. Los conservadores eran los abanderados del mantenimiento a toda costa del orden económico-social existente, es decir, de sus privilegios, mientras que los liberales abogaban por la introducción de reformas democráticas, la abolición de la esclavitud, la igualdad ante la ley, la eliminación de la pena de muerte y la atenuación de los castigos, la instauración de un régimen de libertades que comprendía, entre otras, las de imprenta y palabra, la religiosa, la de enseñanza y la de industria y comercio.

Por supuesto, esquemáticamente descrita ésta fue la matriz originaria de ambas fuerzas, pero esto no se tradujo en una rígida diferenciación social de sus componentes: era común, por ejemplo, que terratenientes y caudillos conservadores arrastraran de su lado a la guerra a amplios sectores populares subordinados. A lo largo del tiempo se fueron registrando intercambios ideológicos y de intereses económicos entre ambas fuerzas, que culminarían políticamente en la creación en 1958 del Frente Nacional, que estableció una coalición entre conservadores y liberales que implicaba el reparto del gobierno durante los siguientes 16 años.

El paisaje histórico de Colombia experimentó cambios significativos a partir de mediados del siglo XX. En primer lugar, se aceleró un proceso de urbanización mediante el cual la población, antes claramente rural, hoy vive en un 75% en las ciudades. Las

antiguas guerrillas liberales dieron paso en la década de 1960 a formaciones de ideología marxista. Nace con pujanza una nueva industria, la del narcotráfico, que estructura poderosos carteles en los años 80 y alcanza un vigor económico asombroso, lo que le permite penetrar en diversos estamentos institucionales. Por su parte, el Plan Colombia deriva ingentes recursos financieros y militares de Estados Unidos al país sudamericano para combatir a las guerrillas y el tráfico de drogas; se organizan grupos paramilitares de extrema derecha para contribuir a la lucha contra los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que siembran el terror en las poblaciones sospechadas de dar apoyo a los insurgentes; una vez desmovilizados, parte de ellos se convierten en los nuevos empresarios de la droga.

Pese a los importantes avances del Ejército sobre la guerrilla, ambos contendientes saben que es improbable el triunfo definitivo de alguno de ellos. Varios gobiernos intentaron negociar un tratado de paz con las fuerzas rebeldes, pero sin éxito. Ha sido el actual presidente, Juan Manuel Santos, tras prolongadas y arduas conversaciones iniciadas en 2012 con los representantes de las FARC, quien se ha acercado como nadie a la inminente firma de un acuerdo de paz definitivo, mientras anunciaba a finales de marzo de 2016 el comienzo de negociaciones con la otra guerrilla, menos numerosa, del ELN. Todo parece indicar que la paz, esta vez sí, está al alcance de la mano. Pero esa paz sólo será sustentable si se promueven las impostergables reformas que terminen con la escandalosa desigualdad que hace de Colombia uno de los países socialmente más injustos del mundo. Algunos datos: apenas 2.313 terratenientes (el 0,06% de los propietarios) son dueños del 53,5% de la tierra disponible, y esas propiedades fueron conseguidas en parte a través del despojo de millones de campesinos obligados por la fuerza a abandonar sus tierras. Sólo 9.200 personas (sobre 49 millones de habitantes) poseen el 65% de los depósitos de ahorro en el sistema bancario. Casi el 60% de los trabajadores está en la informalidad; tan solo un 35% cuenta con un plan jubilatorio. ¿No constituye acaso esta tremenda inequidad social un estado de guerra latente, sin cuya superación será imposible afirmar el progreso, la justicia y las conquistas democráticas que Colombia exige? ■

SUMARIO

COLOMBIA

De la guerra a la paz

INTRODUCCIÓN

2| La paz tan deseada

Carlos Alfieri

1. UNA HISTORIA DE VIOLENCIA

Lo pasado

7| Un retrato del país de hace 50 años

Elena de La Souchère

8| El Bogotazo

Carlos Alfieri

11| "¿Morir? ¿Y qué?"

Hubert Prolongeau

17| El deseo de paz no nació ayer

Benoît Guillou

21| El horror y la esperanza

Ignacio Ramonet

23| Comunidades enfrentadas

Michel Agier y

Odile Hoffmann

27| El noviembre de la tragedia

Françoise Barthélémy

2. LA MAYOR APUESTA

Colombia hacia adentro

33| ¿Quién le teme a la verdad?

Maurice Lemoine

39| Ruinas nada más

Fernando Vallejo

41| Desequilibrio externo y desigualdad

Mauricio Cabrera Galvis

45| Avances, obstáculos, incertidumbres

Socorro Ramírez

49| Las fronteras de la sociedad

José Luis Novoa S.

50| Drogas y geopolítica

Carlos Alfieri

56| Déficit, deuda social

Carlos Alfieri

3. ABRIRSE AL MUNDO

Colombia hacia afuera

61| Un giro en la política exterior

Socorro Ramírez

65| Destinos que se entrelazan

Juan Gabriel Tokatlian

66| Disputa con Nicaragua

Carlos Alfieri

4. EL ESPLENDOR DE LA CREACIÓN

Lo vivido, lo pensado, lo imaginado

71| Pablo Escobar deviene héroe

Omar Rincón

77| Después de García Márquez

Luis Miguel Rivas

5. FUTUROS PODERES

Lo que vendrá

82| Demasiadas piedras en el camino

Socorro Ramírez



Bogotazo. 9 de abril de 1948. Tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, la multitud enfurecida se volcó a las calles de Bogotá y generó una insurrección de una magnitud nunca conocida.

1

Lo pasado

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA

Buena parte de los 200 años de vida independiente de Colombia estuvo traspasada de guerras civiles, masacres, asesinatos y las formas más brutales de injusticia que puedan imaginarse. La matriz de ese destino trágico se remonta a los tiempos de la colonia, cuando se echaron las bases de un reparto de tierras que aún hoy está entre los más desiguales del mundo. De esa estructura derivó la posesión de las mayores riquezas en manos de una reducida cantidad de personas y el establecimiento de un opresivo régimen oligárquico.



Destrozos. La ira popular fue incontenible durante el estallido del Bogotazo. Numerosos edificios representativos del poder, automóviles y medios de transporte fueron incendiados.



Propiedad de la tierra y raíces de la violencia

Un retrato del país de hace 50 años

por Elena de La Souchère*

En 1966 ascendía a la presidencia de Colombia el candidato del Partido Liberal, coaligado con los conservadores en el Frente Nacional, Carlos Lleras Restrepo. Este artículo, publicado aquel año, traza un cuadro sintético y certero del contexto geográfico, social e histórico del país que prefigura los acontecimientos posteriores.

Las raíces de la tragedia colombiana se encuentran en la configuración de ese país que los geógrafos latinoamericanos comparan de buena gana con un gran navío que navega entre dos mares de vegetación. De un lado, sobre la vertiente oriental de los Andes, la selva virgen de la Amazonia o la sabana tórrida y desértica que prolonga los llanos venezolanos. Y, sobre la otra vertiente, inclinada hacia el Pacífico, se encuentra la densa, la impenetrable selva ecuatorial. La población escapa a los excesos del clima semiecuatorial refugiándose en la montaña.

Si se exceptúa el litoral del Atlántico, toda la vida del país se concentra en la montaña: en las altas planicies de Cundinamarca –donde se alza Bogotá a 2.600 metros de altura– y en los altos valles del Cauca y Magdalena. Este país dos veces más grande que Francia cuenta con 627.000 kilómetros cuadrados de selvas ecuatoriales y estepas desérticas.

Pero la montaña, único espacio útil, no solamente consta de muchas extensiones estériles, también opone obstáculos casi infranqueables a las comunicaciones. Es así como la Cordillera Central aísla a Bogotá, cerebro del país, de los centros agrícolas del Valle del Cauca: Popayán, Cali, Antioquia, Medellín, ciudades orgullosas, enriquecidas hoy en día por el cultivo de café, y que, desde siempre, tuvieron tendencia a comportarse como pequeñas repúblicas independientes.

Un conservadurismo encerrado en sí mismo

Colombia es el país de las pequeñas colectividades aisladas, cerradas. En el siglo pasado [siglo XIX], es-

ta “compartimentación” se opuso al progreso del comercio y al auge de la burguesía mercantil. El propietario de las tierras, el terrateniente, seguía siendo el tipo dominante de la sociedad colombiana. Y ese peso aplastante de la tierra garantizó la victoria de los conservadores al término de la larga lucha que, en el siglo XIX, tanto en Colombia como en los demás países hispanoamericanos enfrentó a los liberales con los conservadores. Mientras que la mayoría de los grandes países del mundo latinoamericano –México, Argentina, Venezuela– se dotaban de instituciones liberales y federales, los conservadores colombianos, en 1886, le imponían a su país una Constitución unitaria que, además, vinculaba estrechamente la suerte del Estado con la de la Iglesia Católica.

La dominación casi ininterrumpida del Partido Conservador prolongó el *statu quo* social colombiano hasta la crisis económica mundial de 1930. En aquella época, el Partido Liberal, que había llegado al poder por tres lustros, no tuvo ni la fuerza ni, tal vez, la voluntad de operar una profunda transformación de las estructuras sociales. El regreso al poder de los conservadores en 1946 fue el comienzo de una intensa agitación tanto en el campo como en las ciudades, donde comenzaba a constituirse una clase obrera. Estas acciones reivindicativas obedecían a consignas lanzadas por el Partido Comunista y también, y sobre todo, por los líderes liberales del grupo de Jorge Eliécer Gaitán, quien intentaba embarcar a su partido en un nuevo camino.

Pero en abril de 1948, en el momento en que la →

UN ACONTECIMIENTO TRASCENDENTAL

El Bogotazo

por Carlos Alfieri

El 9 de abril de 1948, en pleno centro de Bogotá y poco después de la una de la tarde, el inmensamente popular caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán caía asesinado a balazos en la calle al salir de su despacho junto a otros camaradas. El autor de los disparos fue –aparentemente– un sicario al servicio del gobierno conservador llamado Juan Roa Sierra, aunque todavía hoy existen dudas al respecto, ya que algunos testigos hablan de por lo menos otro asesino y de otras circunstancias oscuras, como la presencia a la misma hora del crimen y en la acera de enfrente del director de la Policía Nacional, general Virgilio Barco (abuelo de quien sería cuatro décadas después Presidente de la República).

De inmediato, algunos transeúntes, vendedores ambulantes, lustrabotas que presenciaron la escena comenzaron a gritar espantados y a perseguir al presunto asesino, que huía revólver en mano, hasta que lo sacaron de una farmacia adonde lo había resguardado un policía y lo lincharon, arrastrando su cadáver hasta abandonarlo, desnudo, frente a las puertas de la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano. Había comenzado “el Bogotazo”, un estallido social espontáneo y de una magnitud sin precedentes que arrojó a las calles a multitudes populares enfurecidas por el asesinato de su líder más querido, último acto de la larga cadena de inequidades y violencia padecidas bajo el régimen oligárquico. Gaitán, odiado por el *establishment* y la embajada de Estados Unidos y jefe del ala más radical del Partido Liberal, promovía una reforma agraria profunda y medidas regulatorias del capital extranjero, entre otras iniciativas claramente progresistas.

La rabia de la muchedumbre era incontenible: fueron incendiadas las sedes de varios ministerios y embajadas, tranvías, la Jefatura de Policía, la Nunciatura Apostólica, los Tribunales, el Palacio de San Carlos, el Palacio Arzobispal, el diario conservador *El Siglo*, entre otros edificios y mansiones. El presidente conservador Mariano Ospina Pérez ordenó al Ejército aplastar el levantamiento popular sin miramientos, mientras que la policía de Bogotá se plegó a la insurrección y entregó armas a los ciudadanos. La capital de Colombia era un campo de batalla. Dos días después, el “orden” retornaba a sus calles devastadas; nunca se supo con exactitud la cifra de muertos que dejó el episodio, pero se estima que fueron alrededor de 3.000, además de miles y miles de heridos. Se iniciaba así el ciclo histórico denominado “la Violencia”, que en adelante multiplicaría las atrocidades por todo el territorio nacional.

→ Conferencia Panamericana acababa de comenzar sus tareas en Bogotá, Gaitán era asesinado en esa misma ciudad por pistoleros conservadores. Y su muerte iba a marcar el inicio de una guerra civil que se ha prolongado hasta nuestros días con alternativas de lucha armada y de tregua poco sólida. Esta orgía de violencia, de la que las ciudades están exentas y que sacude furiosamente al área rural, seguiría siendo inexplicable si no tuviéramos en cuenta la estructura muy particular de la sociedad agraria en Colombia.

Los campesinos, desplazados

El latifundio y el minifundio, la gran extensión y la parcela, coexisten o más bien se superponen en la ladera de las montañas. Por un lado, el 55% de los propietarios reúne el 3,5% de la superficie útil y, por el otro, el 3% de los propietarios monopoliza el 55% de la superficie. Y, en ese sector privilegiado, un núcleo súper privilegiado de 4.456 terratenientes (que representan el 0,54% del número total de propietarios) posee 7 millones de hectáreas, es decir, el 31,02% de la superficie útil. En esta última categoría figuran las tierras consideradas como excelentes, muy buenas o buenas: los forrajes y las plantaciones de caña de azúcar de los valles, las plantaciones cafeteras que se escalonan en las vertientes bajas y los buenos forrajes del altiplano (altas planicies).

Las grandes extensiones empujan al campesinado indio o mestizo a la alta montaña. Cerca de la mitad de la población (el 46%) vive a entre 1.000 y 2.000 metros de altura, y cerca de un cuarto (el 24%) por encima de los 2.000 metros.

El cultivo, practicado según métodos rudimentarios, en pendientes empinadas, casi verticales, previamente desmalezadas por el fuego, favorece la erosión y genera una rápida degradación de los terrenos. De esta manera, se estima que 213.000 hectáreas de tierras quedan inutilizables todos los años. Pronto expulsado por la aridez, el peón rural va a recomenzar más lejos su trabajo destructor. Errante y familiar, termina yendo a parar a los tugurios (villas miserias) de las grandes ciudades o a las guerrillas.

Trescientos mil muertos

Así, desde 1948 –once años antes de la llegada al poder de Fidel Castro en Cuba–, la miseria y los rencores acumulados iban a precipitar a la clase campesina colombiana en una revuelta a la que los terratenientes conservadores, dueños de los recursos del poder, le oponían la policía, el ejército y *los pájaros* (los sicarios reclutados para practicar la contraguerrilla). La violencia de cada una de las facciones despierta rencores generadores de otros crímenes. El ejército bombardea pueblos, fusila a campesinos, masacra a mujeres y niños. Por su parte, los guerrilleros incendian, violan y torturan en una especie de delirio orgiástico. Se comenta el caso de un campesino crucificado en Vega del Pauto, el 15 de abril de 1951, por haber alojado a un destacamento del ejército regular.

En 1953, después de cinco años de guerra civil, los oficiales generales, espantados por el salvajismo de la lucha, derrocan al gobierno conservador y llevan al poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien obtiene la rendición de la mayoría de los guerrilleros prometiendo una amnistía. Pero la tregua sólo durará un año (1953-1954). Como el dictador no decretó ninguna reforma, las causas del fenómeno de “la violencia” permanecen intactas [el período de la historia colombiana que va de 1948 a 1957 quedó bautizado como “la Violencia”]. Y nuevos incidentes, que enfrentan a los campesinos con las tropas, reavivan la guerra civil. Este segundo período de lucha se va a prolongar durante tres años (1954-1957). En total, estas dos etapas de lucha armada habrían causado –según las evaluaciones más moderadas– entre doscientas y trescientas mil víctimas mortales.

El pacto del Frente Nacional

La aristocracia conservadora y la burguesía liberal, igualmente irritadas por los métodos dictatoriales del general Rojas Pinilla, e igualmente atemorizadas por la perspectiva de una revuelta popular generalizada, terminan reconciliándose. A Rojas Pinilla, derrocado por un nuevo golpe de Estado, lo sucede una “junta” provisoria que prepara elecciones generales. El Partido Conservador y el Partido Liberal, de ahí en más vinculados por el pacto del Frente Nacional, hacen inscribir en la Constitución una enmienda válida por un período de dieciséis años (1958-1974). Según ese acuerdo, los dos partidos libran juntos las batallas electorales y se dividen los escaños parlamentarios en partes proporcionales a los votos obtenidos por cada una de las dos formaciones. En cambio, los puestos administrativos se distribuyen por mitades, y a un presidente liberal lo sucede un presidente conservador.

Este sistema le dio al país cuatro años de paz, los cuatro años de la presidencia del liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962). Durante este período, la votación de la ley de reforma agraria (1961) suscitó grandes esperanzas.

El despertar de la guerrilla

Pero, bajo la presidencia del conservador Guillermo León Valencia, portavoz de los terratenientes, la ley agraria durmió en los cajones de la administración. La dilación de las reformas reanimó a la guerrilla que, en su conjunto, se presenta actualmente con el mismo carácter de anarquía y confusión ideológica que en los años 1948-1957. Sin embargo, las guerrillas de inspiración marxista son más numerosas que en aquella época. Además, algunos grupos de guerrilleros comunistas nunca habían depuesto las armas y se habían retirado a regiones montañosas de un acceso particularmente difícil. En 1964 y 1965 las guerrillas comunistas o castristas de Marquetalia, El Pato, Guayabero y Riochiquito fueron atacadas por fuerzas regulares apoyadas por aviones estadounidenses.

Por lo demás, el escepticismo de la opinión pública



Represión. Dos francotiradores son detenidos por militares. La represión del Bogotazo fue brutal y dejó alrededor de 3.000 muertos y decenas de miles de heridos.

quedó probado por el elevado porcentaje de abstenciones constatado durante las últimas dos consultas electorales. (En 1964, alcanzó el 70%.) Las últimas elecciones legislativas, las del 19 de abril de 1966, seguramente fueron distorsionadas por el desorden que reinaba en numerosas circunscripciones campesinas y por la exclusión de los grupos de extrema izquierda (comunistas y castristas). Sin embargo, se puede constatar que el Partido Liberal conserva una amplia popularidad, mientras que el Partido Conservador sufre un verdadero derrumbe en beneficio de la A.N.A.P.O. Esta formación, de apariencia peronista, dirigida por el ex dictador Rojas Pinilla, defiende en realidad, bajo una etiqueta nacional y social, las viejas posiciones conservadoras.

Por esto, el presidente Lleras Restrepo va a verse obligado a mantener la lucha en dos frentes: a la izquierda contra los guerrilleros, a la derecha contra el neoperonismo de Rojas Pinilla. El líder liberal demostró, durante los debates que precedieron la votación de la ley agraria (abril de 1961), que la redistribución de la tierra constituía la primera condición de la pacificación. Él mismo afirmó que lo exiguo de las parcelas condenaba a los campesinos a “una vida de miseria prolongada, que tiende a agravarse constantemente”. Y llamó a “una era de justicia para los campesinos colombianos”. Pero el presidente de la última oportunidad ¿tendrá la voluntad, tendrá la posibilidad de aplicar su programa reformista? ■

*Periodista.

Traducción: Bárbara Poey Sowerby

Fidel, testigo

Un joven estudiante de Derecho cubano se encontraba en la capital de Colombia asistiendo al Congreso de las Juventudes Latinoamericanas cuando estalló el Bogotazo. Se trataba de Fidel Castro, en quien el histórico acontecimiento, sobre el que reflexionó en varias oportunidades, dejaría profundas huellas.

© Archivo fotográfico de Sady González. Biblioteca Luis Ángel Arango



“¿Morir? ¿Y qué?”

por Hubert Prolongeau*

Tras las esperanzas de paz de 1991, una serie de atentados en noviembre de 1992 marcaba el contundente regreso de la violencia a Colombia. Este texto, publicado originalmente en esas circunstancias, analiza con vivacidad los distintos frentes de conflicto –narcotráfico, guerrilla, grupos paramilitares, miseria, marginalidad– y la ausencia del Estado en una gran parte del país.

“Vuelve a empezar. Nunca vamos a salir de esto. Nunca...”. Incluso filtrada por el teléfono, la voz de César López, abogado bogotano, se oye abatida. El 8 de noviembre de 1992, Colombia se encontró de nuevo en estado de shock. Una decena de explosiones, veintiséis policías masacrados en Amazonia; quince bandidos asesinados en Cali en combates con el Ejército; otros cinco en Medellín; la mina de cobre más grande del país, destruida... Y el joven presidente César Gaviria Trujillo, el hombre de la negociación a cualquier precio, decide restablecer el Estado de Emergencia eliminado el 4 de julio de 1991.

En uno de esos arrebatos eufóricos en los que puede mover montañas tanto como enneguercerse, Colombia había creído entonces arrojar sus demonios a los fuegos del pasado. En algunos meses, el Gobierno había entablado negociaciones con la guerrilla; Pablo Escobar, el más célebre de sus traficantes de drogas, había aceptado dejarse encerrar en una prisión dorada, y el país se había dotado de una nueva Constitución (1). Finalmente, en la escena política, un antiguo movimiento de guerrilla, el M 19, parecía poder terminar por fin con el bipartidismo asfixiante de los liberales y de los conservadores.

La violencia volvió. ¿Y qué violencia! Veinte mil asesinatos por año, sesenta y seis por día (2); el homicidio es la primera causa de mortalidad de los hombres de entre quince y cuarenta y cinco años... Colombia sigue siendo el país más violento del mundo. La vida cotidiana está marcada por permanentes precauciones: cambiar de vereda cuando un

auto está ostensiblemente estacionado delante de un edificio público; alejarse cuando un altercado estalla en la calle; a pesar del calor, viajar siempre con las ventanillas cerradas y las puertas trabadas por dentro. “Vivimos en una paranoia necesaria”, explica una joven colombiana. Magnífica definición de las relaciones de un pueblo con sus fantasmas... Si la violencia está tan presente, es también porque está en las cabezas. Todos los colombianos admiten su presencia, y sienten que pueden padecerla tanto como usarla. Aunque Bogotá nunca fue Beirut, aunque esta violencia nunca haya tocado directamente a la gran mayoría de los colombianos, puede alcanzar a veces picos de cinismo: cuando hay niños que son secuestrados en los supermercados y devueltos a la salida a cambio de un carrito lleno; o cuando hay nenes (chicos de la calle) que son secuestrados y soltados tras haberles extraído un órgano que será vendido a clínicas privadas (3).

Grandes y pequeños carteles

A esta matriz violenta se sumó el tráfico de cocaína. Porque los miembros del cartel de Medellín exhibían su éxito con extremo descaro, porque sus jefes tenían una insaciable necesidad de reconocimiento social y porque las pocas personalidades valientes (el coronel de policía Jaime Ramírez, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el periodista Guillermo Cano, el líder político Luis Carlos Galán) dejaron sus vidas oponiéndose a él, este cartel adquirió una celebridad que durante mucho tiempo hizo creer que manejaba todo

el tráfico de droga. El muy mediático arresto de Pablo Escobar, el 19 de junio de 1991, logró hacer pensar, por un instante, que se había puesto fin al problema.

Aunque despertó entusiasmo en el plano local, esta detención fue recibida con reservas en el resto del mundo, donde no se sabía quién se rendía ante quién. Un año más tarde, por razones todavía misteriosas, Pablo Escobar se escapaba en una fuga rocambolesca. El tráfico no se vio demasiado perturbado. Según Interpol, a lo sumo se habría desplazado un poco. Hacia Venezuela, pero también hacia el interior de Colombia, donde el cartel de Cali, principal rival del de Medellín, se quedó con el primer lugar. Sus jefes, Gilberto Rodríguez Orejuela y José Santa-Cruz Londono, son más discretos que sus rivales. No se hicieron construir esas inmensas casonas estilo kitsch que la gente va a ver con curiosidad al lujoso barrio de El Poblado, los suburbios ricos de Medellín. Los de Cali no tienen ni la misma sed de revancha social ni las mismas ambiciones políticas. Pero matan igual. Porque no se trata de un cartel de “buenos” contra un cartel de “malos”. En 1992, los índices de criminalidad en Cali superaron a los de Bogotá y casi alcanzaron a los de Medellín. Una operación policial internacional, “Green Ice”, llevada a cabo en el mes de noviembre, permitió numerosos arrestos y demostró la existencia de nuevos y pequeños carteles, como el de Pereira, que estaban alcanzando una importancia insospechada. Se habría instalado un circuito de comercialización de heroína, más difícil de fabricar pero diez veces más cara que la cocaína. →

UNAS PERDURABLES, OTRAS EFÍMERAS

Las formaciones guerrilleras

• **FARC-EP** (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo)

Surgen a principios de los años 1950, cuando las guerrillas se instalan en las zonas campesinas de autodefensa (Huila, Caldas, Valle, Cauca). En el origen, este movimiento tenía dirigentes en desacuerdo con la línea oficial del Partido Liberal, que luego se acercaron al Partido Comunista (PC), al punto de parecer el brazo armado de este último. A fines de 1983, surgió una minúscula ala disidente de las FARC, el Frente Ricardo Franco, cuyas acciones terroristas, en especial aquellas dirigidas contra responsables del PC, suscitaron muchos interrogantes.

• **ELN** (Ejército de Liberación Nacional)

El ELN, de inspiración guevarista, toma como figura central, después de su muerte en el monte, al cura guerrillero Camilo Torres, asesinado en un choque con la Quinta Brigada del Ejército colombiano, el 15 de febrero de 1966, y al que Fidel Castro rindió un conmovido homenaje.

• **M-19** (Movimiento 19 de Abril)

En esa fecha, de 1970, es cuando germina la idea de su creación tras un fraude electoral que privó al general populista Gustavo Rojas Pinilla de su victoria en las elecciones presidenciales. El M-19 se constituye en 1974; su primera acción, impregnada de un simbolismo romántico, fue el robo de la espada y las espuelas del libertador Simón Bolívar. Sus miembros, en lo esencial pertenecientes a la burguesía urbana, reivindicaban una ideología no marxista, de tipo reformista-nacionalista, que poco a poco se fue radicalizando.

• **EPL** (Ejército Popular de Liberación)

Maoísta en su origen, se constituyó a mediados de la década de 1960 tras el cisma Moscú-Pekín, y se presentaba como el brazo armado del grupuscular Partido Comunista Marxista-Leninista. Se desmovilizó en 1991, aunque pequeñas facciones prosiguieron su actividad armada.

• **ADO** (Autodefensa Obrera)

De tendencia trotskista. De muy escasa popularidad, este grupo urbano nació al calor de la “gran protesta popular” (Paro Cívico) de 1977.

• **MAQL** (Movimiento Armado Quintín Lame)

Compuesto exclusivamente por indígenas para luchar por sus reivindicaciones, centralmente la recuperación de las tierras de las antiguas reservas (resguardos) instituidas por la Corona española.

→ La simpatía –o la complicidad– de toda la sociedad sigue acompañando a los traficantes. La droga no es un problema en Colombia. Al menos no lo es su consumo. Un estudio de la Universidad de Los Andes, realizado en 1987, afirma que la cocaína alcanza al 0,25 % de la población, particularmente al jet-set local, y el bazuco, derivado similar al crack, al 0,64%, principalmente a chicos de la calle por los que nadie se preocupa. “La droga es un problema de los estadounidenses. Son ellos los que ‘aspiran’, no nosotros. Que limpien su casa antes de venir a darnos lecciones”, afirma el cineasta Carlos Rendón. Y el país entero, con una ceguera a menudo sincera, se niega a ser marginado por la opinión pública extranjera.

Los traficantes no dudan en realizar algunas espectaculares operaciones de relaciones públicas: construcción de viviendas sociales, instalación de un sistema de iluminación para una cancha de fútbol de Medellín... También han sabido ganarse a la población pobre: “Le debo todo. Sin él, estaríamos en la calle”, declara, por ejemplo, Víctor Méndez, que vive con su madre y sus dos hermanas en una de las doscientas casas del barrio Pablo Escobar, construido por el traficante. “Si Pablito necesita esconderse, acá está en su casa”. Para Víctor Méndez, Escobar es un hombre exitoso, el único modelo social que le permite escapar del ambiente siniestro que lo rodea. En Medellín, la fortuna del traficante suele ser considerada como un notable ejemplo de ingenio.

Hijos del mito, los sicarios de los barrios precarios de Medellín constituyen también la cara más aterradora de la violencia colombiana. Tienen entre dieciséis y diecisiete años. Muchos no llegarán a los veinte. Y no les importa: “¿Morir? ¿Y qué? Lo que cuenta es vivir bien, no vivir mucho”, proclama uno de ellos. Para Laura Restrepo, periodista y escritora que se ocupa del problema de la violencia, inventaron una “cultura de la muerte” que va hasta la utilización de un lenguaje que sólo ellos comprenden. Los más talentosos entran al servicio del cartel y suelen ser utilizados en operaciones suicidas; los demás roban y se disputan con otras bandas una autoridad que no tendrán tiempo de aprovechar. Morir es una fiesta. El entierro de un jefe de banda sirve de pretexto para tres días de borrachera alrededor del ataúd. Su vida no tiene más valor que la de los demás.

Tienen dos divinidades: el dinero y su madre. Le dicen “la cucha”. “Lo haría todo por ella”, jura Raimondo, dieciséis años, mientras descuelga de la pared de su casa un viejo fusil. Y lo hizo todo. Se convirtió en jefe de su banda a fuerza de asesinatos y violaciones; organizó numerosos robos, y no se guardó nada para él, se lo dio todo a su madre. Abandonada por su marido, como la mayor parte de las mujeres de barrios pobres, cría a tres hijos y se prostituye.

En los barrios precarios de Medellín, que alberga a 1.600.000 personas, hay decenas de bandas, con frecuencia enfrentadas entre sí, y dispuestas a todo. El modelo se exporta: en Bogotá, en Cali, en

Barranquilla, los barrios se agitan. Los traficantes se procuran fácilmente a sus hombres en estas canteras de la miseria.

Las guerrillas y la paz

En el verano de 1991, la guerrilla parecía llegar a su fin. En algunos meses, los movimientos M-19, Quintín Lame (movimiento indígena), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) habían depuesto las armas.

Se habían producido cuatro encuentros, dos en Caracas, dos en México, entre una delegación del Gobierno y representantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, compuesta principalmente por dos grandes movimientos todavía en actividad: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que agrupaban alrededor de 8.000 hombres. Pero los puntos de acuerdo, principalmente la aplicación de un alto el fuego, fueron muy pocos, y el encuentro que debía producirse el 31 de octubre de 1992 nunca empezó. Al contrario, la violencia se duplicó.

“La guerrilla no quiere el poder”, explica el politólogo Javier Sanín. La ideología va desapareciendo en los campamentos. Sólo las FARC mantienen todavía un discurso teórico. Con el transcurso de los años, el “confort” mejoró. Llegaron las radios, siguieron las fotocopadoras. Se establecieron conexiones regulares con las ciudades. Se instalaron farmacias para luchar contra las fiebres que dejaban a los batallones en cama. La gente se toma más libertades. En las regiones en las que los guerrilleros se implantaron con más solidez, los lazos con la gente del pueblo son más cálidos. Algunos hasta viven en sus casas, se casan. Cuando se acaba de obtener una victoria, pueden permitirse matar un cerdo y bailar salsa.

La mitad de las zonas rurales de Colombia se encuentran ahora bajo el control de las FARC y del ELN. Estas organizaciones hacen todo, reemplazando completamente al Estado: se ocupan de la administración, aumentan los impuestos, manejan a la policía y la justicia. En varios departamentos (Huila, en el sur del país; Arauca, gran zona petrolera del norte) los gobernadores negocian directamente con los guerrilleros.

Un campamento de las FARC en 1992: los hombres juegan, lustran sus armas. De vez en cuando, una inspección les recuerda una disciplina que el movimiento se obstina en mantener. Se hacen ejercicios en horarios fijos; hay una jerarquía; se saluda a sus superiores. La mirada está vacía, cuando hay respuestas, son murmullos. Se llega a perder de vista el objetivo. Los guerrilleros están pagos, cobran el equivalente al salario mínimo prácticamente en todas partes. La resistencia armada se convirtió en un oficio. La guerrilla colombiana tiene más de treinta años, perduró en el tiempo. Es una fuerza social entre otras en un país con instituciones desgastadas.

El M-19, movimiento más joven, de origen burgués y urbano, adoptó un camino diferente al aceptar entrar



© Nick Jaussi/Demotix/Corbis/Latinstock

Protesta. Mayo 7, 2014. Efectivos policiales se despliegan en una región del sur del país para hacer frente a una protesta de campesinos que bloquean los caminos.

en el juego político. Legalizado en 1991, había hecho un sorprendente avance en las elecciones para la Asamblea Constituyente de ese mismo año, se llegó a pensar que encarnaba esa mítica tercera fuerza capaz de hacer tambalear al binomio liberal-conservador en el poder desde fines del siglo XIX. Las elecciones legislativas del 27 de octubre de 1991 redujeron su ambición: con el 10% de los votos, el M-19 no confirmó su progreso.

“Grupos de autodefensa”

A Antonio Isasmendi le gustan los hombres. Por la noche, va a buscar en las Torres del parque de Bogotá –grandes y lujosos inmuebles– la débil ración de ternura que le deja una sociedad en la que el marica es infrahumano. Pero aquella noche, su miedo no es sólo el de la clandestinidad: corre el rumor de que una organización llamada Muerte a los Homosexuales ha decidido “limpiar” las Torres del parque.

Aparecen como ataques de fiebre, alentados por el éxito de los grupos de autodefensa creados por los traficantes contra la guerrilla. Los grupos paramilitares se hacen y deshacen a voluntad, nacen del hartazgo y mueren tras un episodio sangriento. Su rol: “limpieza social”. Desahacerse de todo lo que molesta, de todos los improductivos, de todos los “desechos”. “Los desechables”, así llaman por diversión a estas miserables víctimas. Sus nombres son evocadores y atinados. Medellín alberga a la mayor cantidad de ellos, muchos se ocupan de diezmar a los jóvenes de los barrios precarios: Limpieza Integral, La Mano Negra, Alpha 83, Amor por Medellín. En Buga se encuentra Bandera Negra; en Cali, Kan Kil o Muerte a los Homosexuales; en Tulua, el Justiciero; en Cartagena, el Ejército Popular Unido; en Bogotá, los Vam-

Modernización

Tanto el Ejército como la Aviación y la Marina de Guerra de Colombia incrementaron su poderío y modernizaron sustancialmente sus armamentos y equipos, en parte con la financiación de Estados Unidos a través del llamado Plan Colombia, en el que Washington invirtió 10.000 millones de dólares.

Menos guerrilleros

Los efectivos de las organizaciones guerrilleras disminuyeron en la primera década del siglo por la acción exitosa del Ejército. Las FARC, que contaban en 2002 con 20.000 combatientes, en 2010 tenían 8.000, en tanto el ELN pasó de 4.000 hombres a 1.500.

→ puros y el Gatillo, y hasta en Popayán, antigua ciudad colonial donde el aburrimiento se respira hasta por debajo de las piedras, una misteriosa Falange. En 1988, el Gobierno había identificado a ciento treinta y siete grupos. La mayoría son locales pero algunos operan en todo el país. Indigentes, marginales, pobres, niños, homosexuales son asesinados durante sangrientos “safaris” en los que se dispara al montón.

El Ejército otorga una ayuda oficial a la creación de lo que discretamente llama “grupos de autodefensa”. Por otra parte, son completamente legales: hay decretos que datan de la década de 1960 que los autorizan bajo el pretexto de luchar contra las guerrillas. De este modo, logran controlar vastas zonas. Todo el mundo debe estar registrado y tener un documento de identidad especial; sólo se puede salir de la región con una autorización; los desplazamientos internos son muy controlados. Sorprendente casualidad: es en estas zonas estrictamente controladas donde los grupos paramilitares se desplazan con mayor facilidad.

Hubo que esperar hasta 1989, y la irrupción en los rangos de poder y de la burguesía de una violencia que hasta entonces sólo afectaba a los campesinos, a los marginales y a los indígenas, para que el accionar de la autodefensa provocara una reacción jurídica. Las milicias mataron cinco veces más ciudadanos que la guerrilla. Pero, en noviembre de 1992, el presidente Gaviria todavía las señalaba como una “solución posible” frente a los guerrilleros.

Ante estos tres factores de violencia (droga, guerrilla, milicias), el Estado no ofrece más que la carcasa vacía de sus instituciones desgastadas, a menudo gangrenadas por la corrupción. Numerosos jueces, senadores, sacerdotes, y hasta el director de la policía nacional fueron acusados de tejer lazos con los traficantes. Hay inmensos territorios que quedan fuera del control del Estado: cerca de un tercio del país escapa a todo tipo de administración y forma una de esas nuevas *terrae incognitae* descritas por Jean-Christophe Rufin en *L'Empire et les Nouveaux Barbares (El Imperio y los Nuevos Bárbaros)* (4). Cualquier poder paralelo puede implantarse allí y reinar por la fuerza.

En semejante contexto de violencia y de corrupción, ¿qué puede hacer la justicia? Hernán Rodríguez es juez penal en Bogotá. Se convirtió en juez por sus ideales: “Cuando empecé creí que había una esperanza”. La voz suena casi quebrada, definida por una lúcida y contenida desesperación. Hernán Rodríguez continúa por hábito. Ya casi no trata más que casos de derecho común y vive en un inmenso estrés. Todos los jueces penales han sido reagrupados cerca de los edificios de la policía. Esto no es suficiente: “Cada vez que un delincuente es condenado, me siento amenazado”. Un juez municipal gana 80.000 pesos, un juez de instrucción, 100.000 y un sustituto apenas el salario mínimo. Enfrente, la muerte. La corrupción se ha propagado. No hay alternativa: dejarse corromper o convertirse en un héroe muerto. Es la billetera o el ataúd. “Plata o plomo”.

Los jueces colombianos tienen que hacer todo. Son tan pocos (5.000, aproximadamente) y tan ineficaces que la mayoría de los delitos y el 90% de los homicidios quedan impunes. Para paliar al menos el problema de la negligencia que afectaba a la mayor parte de las investigaciones, la Constitución de 1991 creó un nuevo puesto, el de fiscal, una suerte de juez de instrucción que se encarga de supervisar la investigación de principio a fin.

¿“Mano tendida” o “guerra abierta”?

El malestar de las instituciones se extiende a las decisiones del Gobierno. Petrificado por su impotencia fuera de las grandes ciudades, el Estado nunca supo qué actitud adoptar ante los traficantes de drogas. Se aplicaron políticas completamente opuestas. La represión extrema de 1980 a 1982 con el presidente Turbay Ayala; luego, entre 1984 y 1986 con Belisario Betancur; finalmente, entre 1989 y 1990, Virgilio Barco llegará a desatar una “guerra abierta” (y poco eficaz) contra los traficantes. La “mano tendida” fue aplicada antes de 1980, luego entre 1982 y 1984, y desde 1990, cuando César Gaviria comenzó a sostener las negociaciones a cualquier precio, multiplicando los ofrecimientos a los narcotraficantes: anticonstitucionalidad del tratado de extradición con Estados Unidos, reducción de condena para quienes se entregaran, unificación de las penas en casos de delitos múltiples (muy frecuentes), reapertura de la ventanilla siniestra para blanquear oficialmente el dinero sucio cambiando dólares por pesos sin tener que justificar su procedencia.

La guerrilla, que vio a muchos de sus hombres indultados ser asesinados por el Ejército cuando volvían a la vida civil, fue tratada según los mismos términos. A la apertura preconizada desde 1990 responde hoy una vuelta a la represión: 20.000 soldados suplementarios fueron convocados en lo que se convirtió nuevamente en una batalla.

Macroeconomía sólida

Sin embargo, con una mano ensangrentada apretándole la garganta, Colombia encuentra el medio para no ahogarse. Se puede hablar de un “milagro económico”. No hubo una gran expansión, ni incrementos espectaculares, pero sí un crecimiento moderado, regular y estable desde hace 50 años. Esto no lo resuelve todo: el 45% de los colombianos sigue viviendo por debajo del índice de pobreza y las grandes ciudades siguen estando rodeadas por espantosos cinturones de miseria; a veces son ciudades dentro de la ciudad, como la gigantesca Aguablanca y sus 80.000 habitantes en los alrededores de Cali. Pero el país reaccionó bien durante la crisis que afectó a América Latina durante los años 1980. Éxito que puede ser resumido en tres cifras. El crecimiento acumulado del producto interno bruto (PIB) entre 1981 y 1989 fue del 36,9%, mientras que era sólo del 11,7% para el resto del subcontinente. El PIB por habitante aumentó, en



Represión. Vainas de balas disparadas contra una protesta campesina.

© Nick Jaussi/Demotix/Corbis/Latinstock

el transcurso del mismo período, un 13,9%, mientras que en el resto de América Latina, bajaba un 8,3%. Las inversiones extranjeras alcanzaron, en el transcurso de este período, más de 3 mil millones de dólares. Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos que paga regularmente los intereses de sus 17 mil millones de dólares de deuda.

La idea de que la economía del país reposa sobre la cocaína es falsa. La mayor parte de las enormes ganancias del tráfico está en bancos suizos o panameños; el hacer creer que su fortuna es reinvertida en el país es uno de los grandes éxitos de la propaganda de los narcotraficantes. Ellos ganan su dinero en Estados Unidos, lo invierten en el extranjero y sólo gastan una pequeña parte en Colombia, donde poseen un millón de hectáreas de tierras, y entre el 10 y el 20% del mercado inmobiliario.

Estas inversiones improductivas limitan considerablemente los efectos positivos del dinero de la droga sobre la economía. La cocaína representaría entre el 5% y el 6% del PIB; las demás producciones agrícolas (café, cacao, azúcar), un 5%. Desde 1982, esta cifra está en baja, y la guerra entre 1989 y 1990, que le costó al Estado varios millones de dólares por año, la hizo caer seriamente. Lo mismo sucedió con el empleo. El tráfico de drogas habría creado 12.000 empleos, 24.000 según informes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la mayor parte reunidos en las

azúcar. Las flores cortadas tuvieron un enorme desarrollo que ubicó al país segundo en el mundo. Muchos sectores están aún subexplotados. La pesca y la acuicultura podrían ser más florecientes gracias a los 2.900 kilómetros de costas del país: sólo se exportan crustáceos. También la ganadería: a partir de 15 millones de cabezas anuales, pero se podrían alcanzar fácilmente los 30 millones.

Semillas de esperanza

Otra Colombia se construye en lugares remotos. Al fondo de Caquetá, departamento del sur colombiano que baja de la cordillera para perderse en los brazos del bosque amazónico, Misrael, campesino de 33 años, tiró árboles, sacó los arbustos y vigiló el crecimiento de los brotes para instalar allí su reino: tres hectáreas de maíz. Justo después de conocer a Goretti, su mujer, quiso dejar Florencia, la capital del departamento, y el cinturón de barrios precarios que la rodeaba. Trabajaba como obrero; ella había estudiado un poco. Se instalaron a cinco horas a caballo de la primera ciudad, a una hora a pie del primer pueblo, en pleno centro de una zona donde florece la coca. Pero ellos no la quisieron, prefirieron el ananá y el maíz. "Vimos demasiados muertos por aquí", explica él. Un arroyo pasa por el fondo del pequeño valle que eligieron. Misrael baja con frecuencia al pueblo en su caballo. Tienen dos vacas, construyeron una casa. Tuvie-

Más militares

Las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia aumentaron sus efectivos en casi un 50% entre los años 2001 y 2012. En ese lapso pasaron de 300.000 a 446.000 hombres. En 2013 dispusieron de un presupuesto de 13.000 millones de dólares. En cuanto al Ejército, que en 2001 contaba con 147.000 soldados, pasó a tener 230.000.

La guerrilla vio a muchos de sus hombres indultados ser asesinados por el Ejército cuando volvían a la vida civil.

regiones de coca. Cultivadores, transportadores, "químicos", pilotos, etc. Pero también vigilantes, guardaespaldas, asesinos a sueldo, que pudieron hacer valer sus competencias gracias a los traficantes.

El tráfico contribuyó enormemente al desarrollo del contrabando, creando una competencia desleal para el comercio y provocando numerosos despidos. Quienes observan extasiados los grandes inmuebles contruidos por los traficantes en Medellín, se olvidan de mirar los galpones de las viejas fábricas textiles donde las máquinas se oxidan y los vidrios rotos ya no son reemplazados.

El éxito de la economía puede ser atribuido a otra cosa. En primer lugar, a las grandes riquezas naturales. El subsuelo colombiano alberga esmeraldas (primero en el mundo), oro (novenio en el mundo), importantes reservas de bauxita, de potasio y de cobre. La producción de petróleo superó en 1989 los 440.000 barriles por día. La producción de carbón del inmenso yacimiento del Cerrejón alcanzó durante el mismo año los 12 millones de toneladas; 20.000 toneladas de níquel fueron extraídas del yacimiento de Cerro Matoso. El potencial agrícola es considerable: arroz, maíz y sorgo permiten el autoabastecimiento. Se exporta café, bananas, algodón, cacao, tabaco y

ron dos nenas que juegan entre las gallinas. Goretti, que había pensado en ser monja, reservó un pequeño rincón de la casa para rezar. Cuando ella está ocupada, él se encarga de las nenas. Están orgullosos de lo que construyeron. Los viejos demonios dejaron su tierra. No se puede escribir nada sobre el futuro de Colombia sin tener en cuenta esta imagen. ■

1. Algunos cambios importantes fueron: el mejoramiento de la situación de los indígenas, que ya son reconocidos como ciudadanos con todas las de la ley; el reconocimiento del divorcio civil; la supresión de numerosos privilegios parlamentarios; etc.

2. Cifras del diario *El Espectador*, Bogotá.

3. Véase Maïté Piñero, "Enlèvements d'enfants et trafic d'organes", *Le Monde diplomatique*, París, agosto de 1992.

4. Jean-Christophe Rufin, *L'Empire et les Nouveaux Barbares*, Hachette-Pluriel, París, 1989.

*Periodista y escritor, autor de *La vie quotidienne en Colombie au temps du cartel de Medellín*, Hachette, París, 1992.

Traducción: María Julia Zaparart





Ante el conflicto armado más antiguo de América Latina

El deseo de paz no nació ayer

por Benoît Guillou*

Este texto, publicado en 1999, daba cuenta de las expectativas despertadas por el inicio de las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las guerrillas del ELN y las FARC. Lúcidamente, planteaba las enormes dificultades que habría que superar para alcanzar la paz a la que aspiraban vastos sectores de la sociedad colombiana.

Nil policía ni el ejército están presentes en Río Viejo, primer sitio, arcaico, de explotación de minas de oro del departamento de Bolívar (en el noreste de Colombia). Desde hace mucho tiempo, en esta región que produce el 42% del oro nacional, la guerrilla reemplazó al Estado. Por lo demás, en las montañas circundantes, bajo un techo de paja o un trozo de lona, prosperan numerosos laboratorios de coca... Son las 18:00 cuando alrededor de sesenta hombres irrumpen en la plaza central del pueblo. Armas en mano, fuerzan a unas cuarenta personas a tenderse boca abajo en el suelo antes de azotarlas. Luego, decapitan a un joven vendedor de jugo de fruta, Juan Camacho, y juegan al fútbol con su cabeza. Es el 25 de abril de 1997 y se trata de la primera incursión de los paramilitares en el sur del departamento.

El 20 de julio, las “operaciones” continúan en Río Viejo. El vicepresidente de la asociación de mineros (Asoagromisbol) es asesinado. El presidente es obligado a continuar sus funciones en la clandestinidad.

El 11 de junio de 1998, fuertemente armados y vistiendo uniformes, esos paramilitares ganan Cerro de Burgos –un pequeño puerto, un hospital improvisado y dos médicos para 22.000 habitantes–. Provisos de una “lista negra” de los simpatizantes de la guerrilla, se libran a una verdadera cacería humana. Desde entonces, Cerro de Burgos se transformó en un pueblo fantasma, ya que centenares de habitantes huyeron hacia Simití (1).

Terror y asesinatos selectivos; las organizaciones paramilitares, responsables de dos de cada tres asesinatos políticos (2), “limpian”, con el apoyo y la com-

plicidad activa o pasiva de las Fuerzas Armadas, las regiones bajo influencia de la guerrilla. El sociólogo Alejandro Reyes estima que, de un total de 1.070 comunas (municipios), los paramilitares (5.000 a 6.000 miembros) están presentes en 350.

Aunque en nada comparables a los paramilitares por su naturaleza, su pasado y sus objetivos, las guerrillas también recurren a crímenes de civiles y numerosos secuestros para financiar sus actividades. Valiéndose de sus cerca de 20.000 combatientes, activos en 650 comunas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los dos grupos más importantes, llevaron a cabo varias ofensivas de envergadura entre 1997 y 1999 e infligieron espectaculares derrotas a las Fuerzas Armadas.

Si a estos beligerantes se les agregan los intereses de poderosos sectores financieros, el gran bandidismo y la economía de la droga, la situación global resulta cada vez más confusa y el país cada vez menos gobernable.

Desmantelamiento de organizaciones sociales

“Asistimos a una fuerte expansión del conflicto para controlar las grandes fuentes de financiamiento de la guerra”, resalta Alejandro Reyes. La geografía de la violencia coincide con los polos de riqueza del país. Desde ese punto de vista, la región del Magdalena Medio representa un triste laboratorio, con un índice de 200 homicidios cada 100.000 habitantes (3). En el norte, se encuentra oro (departamento de Bolívar), en el sur, carbón y a lo largo del río se practica →

Entre varios fuegos

Vastos sectores del campesinado fueron víctimas de distintos actores del dilatado conflicto armado colombiano. A veces se encontraron en medio del combate de militares y guerrilleros, otras sufrieron las salvajes represalias de los grupos paramilitares, y en ocasiones las de los narcotraficantes.



© Joana Toro/Demotix/Corbis/Latinstock

Pueblo nasa. Toribio, Valle del Cauca. Indígenas de la etnia nasa alzan sus bastones y estandartes en una ceremonia en memoria de sus ancestros.

© Zoonar/Ima Popkova/Alamy/Latinstock



Guerrilla. Emblema de las tropas de las FARC-EP.

→ la ganadería intensiva. Por último, la capital, Barrancabermeja, que ocupa una posición estratégica a alrededor de siete horas de Bogotá, de la frontera venezolana o del mar de las Antillas, aloja la primera refinería del país.

Aquí, todas las organizaciones comunitarias o partidos políticos de oposición están muy debilitados o desmantelados. La Coordinación Campesina ya no existe y lo mismo ocurre con la Unión Patriótica, partido legal fundado por miembros de las FARC que abandonaron la lucha armada (3.000 víctimas a escala nacional en un intervalo de diez años). La Unión Sindical Obrera (sindicato petrolero) cuenta con más de 120 muertos en la región en una década. El actual presidente, Hernando Hernández, fue declarado “objetivo militar” (en otras palabras, sentenciado a muerte) por el grupo paramilitar Autodefensa de Santander. Osiris Bayther, presidenta de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), de la que seis miembros fueron asesinados, sufrió las mismas amenazas y desde entonces vive en Europa.

Sin embargo, en los años 1960-1970, la guerrilla ejercía una influencia dominante en esta región de 700.000 habitantes, considerada como el bastión histórico del mundo obrero. De ahora en más su hegemonía está seriamente amenazada por los paramilitares. Pero no por eso deja de conservar cierta legitimidad frente a las carencias del Estado y las obscuras desigualdades que presenta Barrancabermeja –aunque se usen eufemismos para mencionar a los actores del conflicto, por miedo a que parezca que se toma partido demasiado abiertamente–. La ciudad de 200.000 habitantes permite que los alrededor de 5.000 felices trabajadores de la refinería dispongan de sus propias escuelas, hospital o club deportivo,

mientras que en el otro extremo de la aglomeración se concentran los sectores más vulnerables. Es en este sector donde hicieron irrupción, el 16 de mayo de 1998, miembros del grupo paramilitar Autodefensa de Santander. Provistos de sus sinistras “listas”, mataron a siete personas, entre ellas, dos menores. Otras veinticinco personas “desaparecieron”.

La población ya no oculta su cansancio ante la “guerra sucia” (4). Después de la masacre del 16 de mayo, los habitantes de Barrancabermeja organizaron una “huelga cívica”, que paralizó totalmente la ciudad durante cuatro días. Los días 6 y 7 de junio, mientras que un comunicado de los paramilitares anunciaba “el juicio, la ejecución y la incineración” de los desaparecidos, acusados de ser colaboradores de la guerrilla, miles de personas iban a velar simbólicamente los veinticinco ataúdes vacíos.

En las últimas tres elecciones, la guerrilla había anunciado una “huelga armada” (que estaba dispuesta a hacer respetar por la fuerza) ante la realización de votaciones calificadas de “gran farsa democrática”. Pero no por ello los habitantes de Barrancabermeja dejaron de salir a la calle y fueron a las urnas a pie. En Santa Rosa, comuna del sur de Bolívar, el que se negaba a reconocer a la guerrilla era el alcalde electo. Un centenar de campesinos emprendieron un viaje de doce horas para negociar. Después de una jornada de discusiones, lograron que el “impuesto revolucionario” ya no fuera obligatorio. Así será más difícil de ganar el respeto por el voto.

Una “sociedad civil” con intereses divergentes

En Urabá, una región también muy afectada por la violencia, en la frontera con Panamá, cierta canti-

dad de campesinos se constituyeron en “comunidad de paz” a fin de persuadir a los beligerantes para que respeten su neutralidad y el derecho a la vida. El principio fundamental de esas comunidades se basa en el compromiso transparente y público de no colaborar con ninguna de las partes en conflicto.

En el muy caótico Magdalena Medio, donde coexisten tres guerrillas y paramilitares, surgió hace dos años un programa llamado “Desarrollo y paz”. Coordinado por el padre Francisco de Roux, apunta a buscar las condiciones para la paz a través del desarrollo. Un programa ambicioso, de un presupuesto global de 100 millones de dólares, que les deja la iniciativa a proyectos de la sociedad civil. Proyectos concretos para llevar a cabo en un plazo de diez años y financiados hasta en un 50% por... el Banco Mundial. El religioso economista explica: “Yo participé con los jesuitas de Washington en un debate sobre las instituciones de Bretton Woods que se tornó violento. Algunos sectores tomaron conciencia de que había que cambiar”. La institución ya transfirió 5 millones de dólares y, por primera vez en América Latina, aceptó dar un préstamo para la formación y la innovación. “El Banco Mundial no sabe lo que va a pasar, ¡y yo tampoco! La población decide. Lo esencial es permitir que se consolide la sociedad civil”.

Bogotá, durante mucho tiempo indiferente, ve multiplicarse las iniciativas en favor de la paz. Así, en ocasión de las elecciones municipales del 26 de octubre de 1997, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), una plataforma de cerca de 300 asociaciones, organizó un “voto por la paz”. En las mesas de votación, se dispuso una urna suplementaria al lado de las de la votación oficial. La operación simbólica logró un éxito



© JAIME SÁLDARRIAGA/Reuters/Latinstock

ELN. El Ejército de Liberación Nacional es la segunda formación guerrillera, de menor poderío que las FARC. También fue la segunda en aceptar las negociaciones de paz.

civil” sigue siendo un término genérico que, en la práctica, reúne a entidades con intereses particulares e incluso divergentes. Forman parte de esta última tanto la patronal como los sindicatos. Entre 1991 y 1994, más de 500 de esos sindicatos fueron disueltos o tuvieron que renunciar a sus actividades. La tasa de afiliación es del 6%, principalmente en el sector público. “¿Cómo quieren que podamos organizarnos con un 18% de empleos temporarios, un 14% de desempleo y un 56% de trabajadores informales?”, lanza

Esperanza

Nunca como en 2015 y 2016, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, se ha estado tan cerca de culminar con éxito las complejas conversaciones de paz con las fuerzas guerrilleras de FARC y ELN.

Entre 1991 y 1994, más de 500 sindicatos fueron disueltos o tuvieron que renunciar a sus actividades.

rotundo: 10 millones de votantes se expresaron a favor del “Mandato por la paz”. El 18 de abril de 1998, después del asesinato de Eduardo Umaña Mendoza (eminente abogado defensor de los derechos humanos), nació un frente social ampliado que reunía a sindicatos, organizaciones no gubernamentales y universitarias... Junto con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), este frente hizo campaña por el cese inmediato del conflicto armado y publicó un manifiesto que tomaba firmemente sus distancias respecto de todos los beligerantes. “Como entidad, las organizaciones sociales reivindican su independencia respecto de los actores armados”, explica Alejo Vargas, vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia, quien de todos modos precisa: “Pero no entran en confrontación con la guerrilla”.

Aunque genere grandes esperanzas, la “sociedad

Luis Eduardo Garzón. En diez años, la Central Unitaria de Trabajadores, de la que es el presidente, tuvo que lamentar 2.500 víctimas, crímenes que no dieron lugar más que a una sola investigación... En octubre pasado, Jorge Ortego, su número dos, fue asesinado.

Frente a la crisis de credibilidad de las instituciones, la Iglesia Católica actuó tardíamente, pero de manera radical. La partida hacia Roma de monseñor Alfonso López Trujillo, en 1992, no fue casual. El ex arzobispo de Medellín y presidente de la Conferencia Episcopal encarnaba la obsesión anticomunista. En agosto de 1995, se creaba la Comisión de Conciliación Nacional (CCN). Presidida por monseñor Alberto Giraldo Jaramillo (arzobispo de Medellín y presidente de la Conferencia Episcopal), constituye un espacio activo de mediación y de referencia. Los días 30 y 31



Liberados. Los sargentos César Lasso Monzalve (de la policía) y Luis Moreno (del ejército) en el momento de su liberación por parte de las FARC, en abril de 2012.

Injusticia social

No sólo en la génesis de la guerrilla que actúa en el país desde hace más de 50 años, sino en la de las innumerables contiendas civiles que sacudieron a Colombia en toda su historia se encuentra la brutal inequidad que caracteriza a la estructura de la sociedad.

6 millones de habitantes

Han sido los desplazados de sus lugares de origen, particularmente en las últimas dos décadas, por la guerra interna.

→ de julio de 1998, esta comisión instalaba en Bogotá la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Los organizadores esperaban 1.200 participantes; hubo 3.000. Toda una novedad en Colombia. Allí, pequeñas asociaciones barriales se codean con grandes organizaciones. Se logró llegar a un consenso para reclamar el final negociado de la guerra, pero también reformas sociales y económicas.

La patronal también se presenta como un protagonista. La mala imagen del país en el exterior es percibida como una desventaja y la solución militar al conflicto como un fracaso evidente. Eso explica su participación en el encuentro, que se llevó a cabo en julio de 1998 en Alemania, entre personalidades de la sociedad civil y el ELN (5). Gabriel Misas, asesor económico del ex presidente Ernesto Samper, explica: “Pero los sectores económicos esperan una resolución del conflicto de tipo ‘asistencialista’, como fue el caso con el EPL o el M-19 (6). No son realistas. No es posible pagar una ayuda para la reinserción a los 15.000 combatientes, ya que cada uno de ellos es apoyado por otras tres o cuatro personas. A corto plazo, la guerrilla puede interrumpir los atentados contra los oleoductos o los secuestros, ¿qué se le va a dar como contrapartida? ¡La guerrilla reivindica otro modelo de sociedad!”.

El obstáculo de los paramilitares

Todas las fuerzas políticas se apropiaron del tema de la paz, excepto el general Harold Bedoya. La consecuencia fue clara. El ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, opuesto al diálogo, sólo obtuvo el 1,8% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 1998. Pero esa paz, preocupación fundamental de los colombianos, sigue siendo un término vago. Andrés Pastrana, el

presidente electo, sólo abordó este tema entre la primera y la segunda vueltas de las elecciones. Sin embargo, el 9 de julio, algunos días después de su victoria, se encontró en plena selva con el responsable de las FARC, Manuel Marulanda, “Tirofijo”, el jefe guerrillero más viejo de América Latina. Los dos hombres se dieron un plazo de tres meses para entablar un diálogo de paz (7), que efectivamente se inició el 7 de enero de 1999, en una zona desmilitarizada de 42.000 km² situada en el sur del país.

Pero, si esas negociaciones avanzan, ¿qué hacer con los paramilitares? Estos últimos se confederaron bajo la sigla de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su principal responsable, Carlos Castaño, a cuya cabeza se le puso precio, intenta imponerse para participar de las discusiones de paz –algo que las guerrillas rechazan–. Consciente de las expectativas de la sociedad, Castaño adoptó un discurso demagógico opuesto a sus alianzas en el terreno –militares, narcotraficantes y adeptos al poder económico–. En un documento en el que invitan a guerrillas y paramilitares a explicar las razones que los empujan a continuar la guerra, las AUC comentan: “La adopción del modelo neoliberal tiene consecuencias profundamente desalentadoras en la actualidad...”.

Una situación comentada en estos términos por el semanario *Cambio*: “Si nos atenemos a sus propios textos, todas las facciones pelearían por un proyecto nacional prácticamente similar. Todas atacan la injusticia social, el abandono de la población por parte del Estado, la ausencia de reforma agraria y de redistribución de la riqueza...” (8). En todo caso, el hecho es significativo. Y claramente esa es la cuestión que habrá que arreglar. ■

1. En un lapso de diez años, más de un millón de personas, víctimas de los diversos actores del conflicto, abandonaron el campo colombiano (de una población total de 37 millones de habitantes en esa época).
2. Amnesty International, “Que faut-il donc faire pour rester en vie?”, AMR 23/48/97, octubre de 1997, y “Paramilitaires, ‘disparitions’ et impunité”, AMR 23/39/98, junio de 1998.
3. El índice de homicidios nacional alcanza la triste media de 89,5 por cada 100.000 habitantes.
4. Estos últimos años, Colombia tuvo que lamentar un promedio de 30.000 asesinatos por año. La frontera entre la violencia de derecho común y la de origen explícitamente político es imprecisa. Sin embargo, se considera que el índice de homicidios políticos se sitúa entre el 7 y el 10% del total. En 1997, la base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y Justicia y Paz indicaban que los paramilitares eran por lejos los que cometían la mayor cantidad de asesinatos políticos: el 84% (el 14% la guerrilla y el 2% el ejército). Cerca del 47% de los secuestros del mundo ocurren en Colombia.
5. Véase Maurice Lemoine, “La guérilla Colombienne rêve d’une paix armée”, *Manière de voir*, N° 43, enero-febrero de 1999.
6. El Movimiento 19 de Abril (M-19) cesó las hostilidades el 1° de septiembre de 1988 y una fracción del Ejército Popular de Liberación (EPL), el 1° de marzo de 1991.
7. Una semana antes de que el nuevo presidente prestara juramento, y para situar las relaciones de fuerza, las FARC y el ELN habían lanzado una serie de ataques contra el ejército y la policía, causando al menos 200 muertos en 17 de los 32 departamentos del país.
8. María Cristina Caballero, *Cambio*, Bogotá, N° 256, 11-5-98, en el marco de una iniciativa de la Comisión de Conciliación Nacional, la Cruz Roja Internacional y la revista *Cambio*.

*Periodista.

Traducción: Bárbara Poey Sowerby

Una atmósfera de guerra permanente

El horror y la esperanza

por Ignacio Ramonet*

En 1998, tras la elección del presidente Andrés Pastrana, se renovaban las expectativas de paz en Colombia. Este artículo de entonces daba cuenta de la situación.

Varias decenas de hombres en uniforme de combate y armados hasta los dientes irrumpen en un pueblito al caer la noche; reúnen a la población en la plaza principal, y luego, con listas en las manos, seleccionan a un cierto número de personas. Bajo la mirada espantada de sus allegados, los ejecutan. A veces, las víctimas son torturadas antes de ser degolladas o decapitadas.

Estas escenas de terror no suceden solamente en Argelia. Son habituales en Colombia, donde sólo en el transcurso del año 1997, hubo doscientas ochenta masacres de este tipo, que provocaron miles de víctimas. Por otra parte, veinte consejeros municipales, once intendentes, tres diputados, un senador y dos gobernadores fueron asesinados; así como decenas de militantes por los derechos humanos, como el abogado Eduardo Umaña Mendoza, conocido por defender a sindicalistas y prisioneros políticos, a quien mataron a quemarropa tres asesinos a sueldo. Ni uno solo de los autores de estos crímenes fue detenido.

Dos veces y media más grande que Francia, poblada por cuarenta millones de habitantes, Colombia no es, sin embargo, una dictadura. Incluso es, teóricamente, una de las democracias más antiguas de América del Sur. Pero es también uno de los países más violentos. ¿Por qué?

Se podría decir que todo comenzó en 1948, con el asesinato en Bogotá del dirigente de izquierda Jorge Eliécer Gaitán. Este crimen (del que fue testigo el joven Fidel Castro, que había ido a un congreso de estudiantes, y que lo marcará profundamente) provoca una guerra civil –“la Violencia”– entre las dos fuerzas políticas que se disputan el poder, liberales y conservadores. Esto durará nueve años (1948-1957) y provocará cerca de trescientos mil muertos (1).

La reconciliación de los liberales y los conservadores no se tradujo en un programa de desarrollo social y de reducción de las desigualdades. En consecuencia, muchos grupos armados se negaron a deponer las armas. Dos de ellos –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– se convirtieron, con el tiempo, en las dos últimas grandes guerrillas de América Latina. Las FARC (diez mil hombres) controlan en particular el sur del país, y el ELN (seis mil hombres), el noroeste.

Pero las regiones dominadas por la guerrilla son también las zonas donde se desarrolló el cultivo de coca y donde se instalaron los traficantes de drogas –durante mucho tiempo ligados a los carteles de Medellín y de Cali– encargados de encaminarlas hacia los centros de consumo en Estados Unidos y Europa. Esta extraña simbiosis entre justicieros sociales y narcotraficantes arruinó, a los ojos de muchos ciudadanos, la imagen de una guerrilla que, gracias a los ingresos percibidos por el tráfico de drogas, vive a veces en la opulencia.

En estas mismas regiones, los grandes terratenientes armaron grupos de autodefensa que no han dejado de desarrollarse; sus efectivos se estiman en más de seis mil hombres; ahora están unidos en una sola organización, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para ser reconocidos como verdaderos actores políticos.

La organización estadounidense Human Rights Watch confirma que estas milicias ayudan al Ejército (2). En otro informe, la misma organización afirma que la Brigada 20 de las Fuerzas Armadas está particularmente implicada en los recientes asesinatos de los defensores de los derechos humanos (3). Organizadas en Escuadrones de la Muerte, es-

tos grupos paramilitares practican deliberadamente el terror; son los autores de la mayor parte de las masacres, asesinaron a cientos de antiguos guerrilleros, más de dos mil militantes del Partido Comunista, dos mil doscientos dirigentes sindicales, etc. Hacen reinar en el campo una atmósfera de terror que, según Amnesty International, provoca la huida de alrededor de un millón de personas hacia las ciudades.

Pero también las ciudades entran en este torbellino de inseguridad generalizada. En Colombia, se cometen un cuarto de todos los asesinatos perpetrados en el conjunto del continente americano (89,5 homicidios cada 100 mil habitantes). La situación preocupa a Estados Unidos; el general Charles Wilhem, comandante de las fuerzas de despliegue rápido con base en Miami, declaró recientemente: “Colombia representa hoy una mayor amenaza que Cuba para la seguridad del hemisferio” (4).

El presidente Ernesto Samper (liberal) se mostró incapaz de pacificar su país. Su autoridad ha sido cuestionada debido a las circunstancias de su elección en 1994, que habría sido favorecida por una donación de varios millones de dólares del cartel de Cali (5). El Gobierno controla apenas el 40% del territorio nacional; el resto está en manos de la guerrilla, de los traficantes de drogas y de los paramilitares.

Paradójicamente, la economía está bien. El país (una excepción en América Latina) no tiene una deuda externa demasiado importante y el crecimiento se mantiene constante desde los años 1930. Fue del 3,2% en 1997, y será del 4,5% en 1998. Colombia exporta petróleo, gas, carbón, esmeraldas, café y flores (6).

En este contexto acaba de realizarse la elección presidencial. La victoria de Andrés Pastrana (conservador) representa una esperanza. Pero no por el programa del candidato, sino porque al inicio de esta nueva etapa, todas las fuerzas comprometidas a favor de la paz (sindicatos, partidos democráticos, Iglesia Católica, universitarios, medios de comunicación, asociaciones civiles, etc.) están decididas a actuar para que las cosas cambien. El Ejército ya anuncia el desmantelamiento de la Brigada 20. Y la guerrilla (FARC) acaba de declarar que está dispuesta a sentarse a negociar. ¿Será este el fin de “la gran Violencia”? ■

1. Maurice Lemoine, *Les 100 Portes de l'Amérique latine*, L'Atelier, París, 1998, pp. 109-120.

2. *Le Monde*, 16 de agosto de 1997.

3. *El País*, 13 de mayo de 1998.

4. *Le Monde*, 25 de mayo de 1998.

5. *Newsweek*, 20 de octubre de 1997.

6. *The Wall Street Journal*, 16 de marzo de 1998.

*Director de *Le Monde diplomatique* de 1990 a 2008. Actual director de la edición española.

Traducción: María Julia Zaparart





Límites y peligros de los criterios etnicistas

Comunidades enfrentadas

por Michel Agier y Odile Hoffmann*

La población de Colombia, como lo reconoce su Constitución, es multiétnica. La Ley 70 o “de las negritudes”, de 1993, prevé otorgar títulos de “propiedad colectiva” de las tierras de la costa del Pacífico a las comunidades afrocolombianas, mayoría en esa franja territorial. Pero los criterios imprecisos de la ley generaron conflictos con los campesinos indígenas.

En el departamento de Nariño, a algunos kilómetros de la frontera ecuatoriana, Santa Rosa es el último de los pueblos que bordean el río Mejicano antes de abordar la selva densa y las colinas en las que los seres legendarios son más numerosos que los humanos. Es el mundo del jaguar, la serpiente y el Tío Conejo, el duende encantador y la luciérnaga de los ríos, de la Madre de Agua y la Madre Monte... Don Hipólito, el lugareño, dice que los espíritus están abandonando la selva. Ya no son ellos los que “atemorizan” a los hombres sino los humanos a dichos seres. Al talar la selva con sierras eléctricas y plantar inmensos palmares, se arruinó el hábitat de los espíritus y se destruyeron las reservas de los campesinos. Los campesinos de Santa Rosa tienen tierras cercanas al pueblo y, como a muchos en la región, no les gusta nada la “Ley 70”. Temen perder con ella el derecho sobre su tierra (aunque con frecuencia, no tienen ningún título de propiedad individual), el derecho de donarla o dejarla en herencia a sus descendientes y, sobre todo, el derecho de venderla en caso de necesidad.

El nacimiento de la polémica

Votada en 1993, la ley “de las negritudes” (o Ley 70) es una de las aplicaciones de un principio inscrito en la Constitución de 1991 (artículo 7), que reconoce el carácter “multiétnico” de la nación colombiana y se propone traducir esta diversidad en términos territoriales, políticos y educativos. La Ley 70 prevé la atribución de títulos de “propiedad colectiva” a las poblaciones negras que no posean título reconocido

sobre el suelo. Esta ley está destinada al “grupo étnico” de las “comunidades negras”, “el conjunto de las familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres [...], que muestran y conservan una conciencia de la identidad que las distingue de los otros grupos étnicos” (artículo 2, párrafo 5).

Esta ley está geográficamente circunscrita a las tierras bajas de la costa del Pacífico, una zona de ríos y selvas de entre 100 y 150 km de ancho por cerca de 850 km de largo, que abarca cuatro departamentos (Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño), desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador. La población rural de la zona está estimada en más de 550.000 personas (la misma cantidad que se encuentra en zona urbana, no alcanzada por la ley). Según las estimaciones del organismo nacional de estadísticas (DNP), en 1992, los negros representarían el 90% de la población de la región del Pacífico, mientras que los indígenas (grupos embera, principalmente, y awa en el sur) y los blancos (negociantes de origen extranjero llegados a principios del siglo XX, funcionarios y comerciantes venidos de las zonas andinas) se dividen el 10% restante. Estos datos no indican la parte de población mestiza, presente en toda la región.

Durante mucho tiempo marginada y poseedora de todos los récords nacionales en materia de pobreza, subequipamiento o mortalidad infantil, la región del Pacífico como tal no tiene existencia a nivel administrativo, pero desde principios de la década de 1980 está siendo objeto de un descubrimiento político e intelectual, así como de operaciones interna- ➔

Mosaico

La población colombiana está configurada por un variado mosaico étnico, sobre la base de blancos de origen español, indígenas y negros traídos como esclavos durante la época de la colonia, y el consiguiente mestizaje entre ellos. Después se sumaron inmigrantes de diversos orígenes, como libaneses, sirios, italianos, alemanes, etc.



Afrocolombianos. Constituyen alrededor del 11% de la población.

→ cionales para la ayuda humanitaria, la protección de la “biodiversidad” y el “desarrollo duradero”. En este contexto de internacionalización de la mirada y de la intervención sobre la región es en el que se sitúa la ley de las negritudes (1).

A escala nacional, hasta el momento de escribirse este artículo [1999], veintitrés títulos de propiedad colectiva fueron entregados oficialmente a las poblaciones en cuestión (de los que el más importante, en el departamento del Chocó, concierne a un único territorio de 700.000 hectáreas que reúne a 50.000 campesinos). Únicamente en el departamento de Nariño, alrededor de veinte titularizaciones están en preparación. Pero la multiplicación de conflictos entre indígenas y negros en el Chocó y el Cauca, entre empresas agroindustriales y comunidades negras en el Chocó y Nariño y, más recientemente, el asesinato del representante legal de un territorio en proceso de constituirse en Nariño, anuncian una inquietante escalada de la violencia.

Con la Ley 70, el Estado invita explícitamente a poblaciones agrupadas por referencias imprecisas de identidad –color de piel (negra), lugar de hábitat (Pacífico) y “tradiciones y costumbres” (afrocolombianas)– a constituirse en “comunidades” y crear sus propios gobiernos locales. Estos adquieren la forma legal de consejos comunitarios –instancia inexistente en la “tradicición” afrocolombiana–, que deben elaborar el reglamento interno de las comunidades territoriales, según “los mandatos constitucionales y legales y los que les asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad” (Decreto 1.745 de 1995 que reglamenta la Ley 70).

El Estado remite así la realización del contrato social sobre una parte de su territorio a una confusa tradición étnica –objeto de polémicas– que presupone la existencia de modos específicos y comunitarios de ocupación, uso y gestión de las tierras. Esta intervención pública se basa en el modelo de las reservas indígenas, que a su vez fue fruto de las políticas coloniales de marginalización de las poblaciones locales (2). También se inspira en las nuevas retóricas que preconizan, en las instancias internacionales de cooperación y financiamiento, un desarrollo de carácter liberal (menos Estado) y neocomunitarismo (apoyo a las iniciativas e identidades micro locales). Pero, en el terreno, los campesinos se encuentran desprovistos para hacer aplicar dicha ley, y a otros les falta información o posibilidades de crítica.

En realidad, tomada al pie de la letra, la Ley 70 podría permitir el reconocimiento de los derechos individuales adquiridos sobre la tierra, integrándolos dentro de conjuntos protegidos colectivamente. Pero la redacción del texto es confusa: a un buen abogado no le dará mucho trabajo encontrarle múltiples interpretaciones posibles. Además, algunos discursos son menos tranquilizadores. Sus enfoques muy políticos –y a menudo ignorantes de las realidades locales– en favor de la recuperación de las tierras ancestrales

preocupan a los campesinos. Por último, se pueden temer desviaciones y abusos de poder, dado que toda operación territorial está sometida al reglamento particular de cada consejo comunitario.

Así, surgen oposiciones cada vez más abiertas, que enfrentan a los campesinos que se sienten amenazados por lo poco que ya tienen (tierras en las que pueden cazar, cultivar lo que comen, y un poco de cacao y coco para vender) con los jóvenes escolarizados originarios de las ciudades cuya ideología étnica está estimulada por la nueva legislación. Y en dicha legislación encuentran también su legitimidad para ocupar funciones de coordinación, federación y asesoramiento, inscritas en los textos de aplicación de la ley para ayudar en principio a la formación de los consejos comunitarios, pero de las que ya no quieren desprenderse una vez cumplida su función.

A siete horas de caminata de Santa Rosa, después de haber atravesado varios puentes de madera, interminables troncos de árbol cruzados sobre el sendero y cinco colinas llenas de barro, se encuentra la casa de Rafael, un indígena awa. Su padre y su suegro, instalados en las proximidades, llegaron allí hace unos treinta años, después de haber abandonado una reserva indígena situada un poco más al sur. Son las únicas tres casas que hay en esta parte de la selva. Numerosas tierras de la región están ocupadas así por indígenas que se ubican fuera de los resguardos (las “reservas” indígenas). Son ocupaciones individuales, generalmente recientes (una o dos generaciones), que resultaron de acuerdos puntuales entre familias indígenas y pueblos negros para la venta y el uso de la tierra, con o sin título legal (3).

“La ley está con los indígenas”

Minoritarios y en deuda con sus compadres negros en el contexto local, los indígenas tienen, a escala nacional, una ventaja importante al nivel de la ideología y la legislación étnicas. Además, los negros dicen que “la ley está con los indígenas”. Por poco ancestral y poco autóctono que sea en una tierra determinada, un indígena que reivindica un derecho territorial en una instancia nacional tendrá todas las posibilidades de ganar lo que no podría obtener en la relación de fuerzas local. Es de esto de lo que se queja Don Pedro, campesino negro de la región, en conflicto con otros indígenas awas. Por su parte, Don Pedro está firmemente comprometido en un movimiento que busca la titularización de una tierra colectiva de 1.500 hectáreas, ubicada dos ríos más al sur, y a la que él y sus amigos le dieron el nombre de “Cortina Verde Nelson Mandela”.

Su movimiento comenzó a mediados de la década de 1970 cuando, frente a la expansión de las empresas agroindustriales de palma de aceite sobre lo que ellos consideraban sus tierras (aunque no tuvieran los títulos), invadieron a su vez una tierra virgen, algunos kilómetros más lejos en la selva. Ahora intentan obtener la legalización de su situación gracias a la ley de las negritudes, lo que motivó que los no negros del

movimiento (una pequeña minoría de blancos y mestizos) se alejaron del proyecto. La reciente llegada de indígenas awas a la tierra que habían delimitado provocó conflictos (en especial seis casas quemadas), seguidos de difíciles negociaciones con abogados y representantes étnicos de los awas llegados de Bogotá. Como la perspectiva de un título de propiedad se aleja, los asociados se desmovilizan y a Don Pedro, su dirigente, comienza a entrarle miedo.

En efecto, a imagen de esta asociación, algunos grupos lugareños se valieron de la ley de las negritudes para intentar recuperar tierras vendidas a la fuerza o incluso confiscadas desde la década de 1950 por las grandes empresas ganaderas, los palmares de aceite o los estanques de cría de camarones.

Las tensiones más fuertes surgieron en esta situación. Algunas tierras, consideradas “tierras ancestrales” por los campesinos y los militantes negros, son explotadas, a veces sin título de propiedad, por los agroindustriales. Ante la ausencia de una fuerza pública neutra que regule de manera firme y duradera las negociaciones necesarias, la relación de fuerzas en el terreno entre los defensores del capitalismo agroindustrial (generalmente originarios de la región de Cali) y los campesinos sin tierra es desequilibrada. En el sur del país, el dirigente de un consejo comunitario del río Mira, Francisco Hurtado, fue asesinado en febrero de 1998. Estaba realizando un relevo de las tierras y las familias llamadas a integrar el futuro territorio colectivo que él representaba, limítrofe con palmares industriales.

Así, surgen tres situaciones de conflicto con la aplicación de la Ley 70: conflicto interno al campesinado de ascendencia afrocolombiana; conflicto entre negros e indígenas; conflicto entre campesinos expropiados y agroindustrias. Otros dos actores se mantienen como telón de fondo. Por un lado, la guerrilla, que habría dado a entender que no intervendría en tanto se respetaran los intereses de las poblaciones campesinas. Por el otro, los narcotraficantes, presentes en las tierras que por el control de territorios usados –parcialmente– para fines ilegales. Aunque siempre se encuentre algún lugareño para trabajar con los traficantes, es a esos “extranjeros” a los que los campesinos les tienen más miedo, ya que, por el momento, no saben cómo reaccionar frente a esta violación de sus tierras de otra forma que no sea esperando la partida de los intrusos. Según ellos, a falta de apoyos sólidos para afrontar esta violencia, no podrán hacer nada para liberar el territorio colectivo al que se les dice que tienen derecho.

Debilidad del comunitarismo

La escalada de la violencia es previsible en el futuro inmediato, a medida que se vaya aplicando la Ley 70. Resulta urgente una revisión de la misma, tanto como la atribución de recursos importantes para su aplicación. Al adoptar a las apuradas, en 1993, una ley



Niñas indígenas. Ante una revisión de una patrulla policial.

de tipo etnicista, la intención del gobierno ¿era pasarles a los campesinos sin recursos la responsabilidad de resolver, en micro conflictos violentos pero poco mediáticos, la cuestión crucial del control del territorio, contentándose el Estado con crear espacios dotados de su propia legalidad? Este comunitarismo, apoyado por las redes y las agencias de desarrollo a escala global, muestra sus propios límites y peligros.

Los desacuerdos dentro de la población implicada son numerosos y profundos (nociones de pertenencia colectiva, uso del espacio, organización del trabajo, relaciones interétnicas, etc.). Estos desacuerdos revelan la fragilidad de las ideologías identitarias, de los presupuestos culturalistas y del apriorismo del particularismo étnico. Cuando esas ideologías, dotadas de poder político o de existencia jurídica, debilitan a las poblaciones y las empujan, impotentes, hacia un nuevo frente de violencia, hay motivos suficientes para poner en tela de juicio la des-responsabilización del Estado en el control de los conflictos y los territorios, y para incitarlo a comprometerse en una verdadera reforma agraria nacional, sin discriminación (ni negativa ni positiva) racial, étnica o regional. ■

1. Véanse Pablo Leyva (ed.), *Colombia Pacífico*, Santafé de Bogotá, Proyecto Biopacífico/Fondo FEN, 1993; Arturo Escobar y Álvaro Pedrosa (eds.), *Pacífico: ¿desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*, Cerec, Bogotá, 1996.

2. Véase Peter Wade, “Identités noires, identités indiennes en Colombie”, *Cahiers des Amériques latines*, N° 17, Paris, Iheal, 1994, pp. 125-140; sobre la nueva política de las reservas indígenas después de la Constitución de 1991, véase Christian Gros, “Un ajustement à visage indien”, en J.-M. Blanquer y Christian Gros (eds.), *La Colombie à l’aube du troisième millénaire*, Iheal, Paris, 1996, pp. 249-275.

3. Los intercambios sociales y simbólicos entre indígenas embera y negros en el Chocó fueron objeto de una investigación pionera sobre el tema (véase Anne-Marie Losonczy, *Les Saints y la Forêt*, L’Harmattan, Paris, 1997).

*Periodistas.

Traducción: Bárbara Poey Sowerby

INDÍGENAS, ESPAÑOLES

15000 a.C.

Testimonios

Hallazgos arqueológicos más antiguos, en El Abra, Zipaquirá.

1501

Magdalena

El español Rodrigo de Bastidas recorre el litoral del Caribe y descubre el río Magdalena.

Siglos XVI-XVIII

Conquista

Conquista y colonización española, con el dominio y desplazamiento de los pueblos nativos, como los Muiscas.

Trata

Introducción de enormes contingentes de esclavos africanos.

1549

Real Audiencia

Creación de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, adscripta al Virreinato del Perú.





Erupción devastadora y masacre en el Palacio de Justicia

El noviembre de la tragedia

por Françoise Barthélémy*

El 6 de noviembre de 1985, un comando de guerrilleros del M-19 asaltó y ocupó el Palacio de Justicia en Bogotá. El Ejército desató una represión indiscriminada, que culminó con la muerte de un centenar de personas, entre ellas once magistrados. El día 13 de ese mismo mes, la erupción del volcán Nevado del Ruiz barrió del mapa la ciudad de Armero, dejando 26.000 muertos.

Una tras otra, dos tragedias acaban de golpear al pueblo colombiano [este artículo, que aquí ofrecemos en versión resumida, fue publicado poco después de los acontecimientos]. La catástrofe de Armero, esa ciudad que en la noche del 13 al 14 de noviembre pasado quedó sepultada bajo la avalancha de lodo que descendía de las pendientes del volcán Nevado del Ruiz, primero suscitó un estupor aterrado y luego la cólera. Ciertamente, para las autoridades era difícil prever la amplitud del desastre: 26.000 muertos, 50.000 personas sin hogar, 20.000 hectáreas afectadas en los departamentos de Tolima y Caldas, ese “corazón” agrícola rico en plantaciones de algodón, sorgo, maní, papas, café, etc., rico también en ganado y dotado de importantes infraestructuras, puentes, vías férreas, líneas de alta tensión, escuelas, hospitales, alojamientos, iglesias... De todos modos, numerosas señales anticipatorias de la erupción –la persistente lluvia de cenizas, por ejemplo– habrían debido generar ciertas medidas de precaución que permitieran evacuar rápidamente los pueblos más cercanos. No se hizo nada. En las altas esferas, se contentaban con decir que “no hay [había] peligro” y se le pedía a la población que “se quedara tranquila”. Y ahí está tranquila para siempre, concluía sombríamente Enrique Santos Calderón, editorialista del periódico liberal *El Tiempo*.

Entre los sobrevivientes y la opinión pública brotan las preguntas cargadas de angustia y de indignación. Como habían brotado, una semana antes, des-

pués de la atroz carnicería en la que terminó la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de un comando de insurgentes del M-19 (Movimiento 19 de Abril). ¿Por qué cometieron estos ese acto irracional, sobrestimando la relación de fuerzas al punto de creer que el presidente Belisario Betancur cedería a sus exigencias, se arrepentiría públicamente y reconocería la responsabilidad del poder en las violaciones de los acuerdos de paz firmados en 1984?

¿Por qué Belisario Betancur, ese hombre lleno de cultura y humanismo, que quiso ser el paladín de la reconciliación nacional, fue llevado a negarse a negociar la suerte de los rehenes, sordo a los llamados patéticos que le dirigía el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes?

Reyes había elaborado la “ley del perdón” de mayo de 1985, al abrigo de la cual decenas de guerrilleros habían vuelto a la vida civil. Los militares más duros lo odiaban, al igual que a sus colegas del Consejo de Estado que, el 27 de junio de 1985, condenaron al ex presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), su ministro de Justicia, Camacho Leyva, y al comandante de la Brigada de Institutos Militares, Vega Uribe, por su responsabilidad en la práctica de la tortura contra opositores. Ahora bien, Vega Uribe, hoy general, es el actual ministro de Defensa.

Dentro del Palacio de Justicia, en medio de la confusión en la que se desarrollaron los combates de los que participaron 4.000 soldados apoyados por tanques, la artillería y helicópteros, ¿hubo un ajuste de →

Desigualdad

Colombia ocupa el puesto 12º entre 168 países del mundo en lo referente a la mayor desigualdad de ingresos, según el Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas presentado en 2014. La desigualdad también es manifiesta entre hombres y mujeres y en el acceso a la educación y la salud.

300.000 muertos

Es la cifra estimada que arrojó el período histórico denominado “La Violencia”, que transcurrió entre el Bogotazo del 9 de abril de 1948 y 1957.

→ cuentas, como lo creen los padres de un juez asesinado después de que se lo viera subir vivo a una ambulancia? Del principio al fin, el caso es tan turbio que el gobierno, blanco de múltiples presiones y duramente criticado por uno de los artífices más activos de las gestiones en favor de la paz, Alfredo Vázquez Carrizosa, se vio obligado a abrir una investigación.

Muchos observadores rechazan la tesis oficial, que sostuvo en París el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Augusto Ramírez Ocampo, según la cual todo se explica por la “connivencia” entre el M-19 y los traficantes de drogas, cuyos expedientes estaban en manos de los magistrados, los que estaban listos para decidir sobre su eventual extradición hacia Estados Unidos. Esta teoría de la “narco-guerrilla”, fabricada por el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, para desacreditar a algunos movimientos de lucha armada, resulta muy útil (1). Resulta muy útil también para tapar la lección esencial que se desprende de acontecimientos aparentemente muy desordenados: el alto mando del Ejército, francamente hostil a los esfuerzos de paz (las ventajas que se obtienen de la “contra insurrección” son mucho más lucrativas) fue quien impuso una solución tan sangrienta: “Si el presidente Betancur hubiera aceptado el diálogo con el M-19, los tanques se habrían vuelto en su contra”, se escucha decir en Bogotá, donde se habla de un “mini golpe de Estado” militar.

A su manera, Betancur reconoció el hecho en una alocución televisada: “El gobierno y el ejército salen unidos de este drama”, señaló, resaltando que “las instituciones no se negocian”. Afirmación extraña, en boca de un jefe de Estado que pasó la mayor parte de su mandato negociando con las guerrillas, en particular acerca de la reforma de las instituciones perimidas en el marco de las cuales se asfixia la “democracia restringida”.

Mientras que el país se prepara para las elecciones legislativa y presidencial (respectivamente en marzo y mayo de 1986), el miedo y la decepción reinan en la población. Sin embargo, una extraordinaria ola de esperanza había surgido hace más de un año, después de la tregua que se concluyó primero con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y luego con el M-19 y otros grupos armados. Esta había encontrado su ilustración más ferviente y alegre en la “Jornada de los artistas por la paz”, el 26 de agosto de 1984. “Viva la paz con los ojos abiertos”, escribía en gruesos trazos de pincel Gabriel García Márquez en la Plaza Bolívar de Bogotá, donde las verdaderas palomas se mezclaban con las pintadas en las paredes de los edificios, en las calles, en las cometas y los globos que ondeaban en el cielo, y el mismo espectáculo se repetía en las demás grandes ciudades: Medellín, Barranquilla, Cali, Manizales, Cartagena, donde, ya el 7 de diciembre de 1983 a mediodía, durante dos minutos, millones de personas habían izado la bandera nacional, habían agitado pañuelos blancos y habían hecho sonar las sirenas de las fábricas, las bocinas de los

autos, las campanas de las iglesias y catedrales, cada uno manifestando a su manera su voluntad de paz. [...]

De hecho, se sigue esperando la puesta en marcha de una auténtica “apertura democrática” que ponga fin al yugo del bipartidismo liberal-conservador establecido desde 1957 (2). Un sistema que asfixia la vida política, con demasiada frecuencia limitada al “clientelismo”, favorece la corrupción y el terrorismo, explica el desinterés del electorado por la votación (la abstención alcanza un promedio del 60 al 80% del padrón) y permite al Ejecutivo recurrir constantemente al Estado de Sitio para responder a los innumerables conflictos que genera la persistencia de profundas desigualdades sociales: huelgas de obreros mayoritariamente organizadas en el seno de la Central Sindical de Trabajadores de Colombia, apropiación salvaje de terrenos en las ciudades y el campo, manifestaciones de estudiantes, multiplicación de “maquis” y esos famosos paros cívicos, amplias protestas de ciudadanos de todas las categorías que pueden paralizar al país como fue el caso en 1977 e incluso antes. [...]

Incertidumbres electorales

¿Qué gritos de horror generó esa marcha de cerca de cinco mil campesinos que llegaron a pie desde lo más recóndito del Estado de Bolívar hasta el corazón de Cartagena, para protestar contra la miseria extrema en la que están estancados, exigir al gobernador puentes, rutas, escuelas, servicios sanitarios, regularmente prometidos en período electoral y regularmente olvidados! Esto fue a principios de julio de 1985. Las playas y la ciudad desbordaban de turistas y veraneantes. Su estadía se vio poco perturbada: esta columna de campesinos hambrientos, agotados, sedientos, las mujeres cargando en brazos a sus chiquillos en penoso estado, se amontonaron como ganado en el venerable Parque del Centenario, destrozando únicamente el césped, mientras que sus delegados reclamaban sus derechos y obtenían algunas promesas.

Una demostración de descontento de las más pacíficas. Fue entonces cuando la publicación del Partido Conservador –el periódico *El Siglo*– se desató, junto a la prensa en general: esta marcha era subversiva, peligrosa, infecta, inadmisible, una amenaza intolerable para la paz y la democracia, un primer paso hacia la insurrección general, un desafío a las autoridades legítimas (3). No sorprende que siga quedando por hacer una verdadera reforma agraria, cuando se oye a los propietarios de las tierras y los ganaderos hablar de su mano de obra como si se tratara de siervos. Tampoco sorprende que grupos armados recluten fácilmente a jóvenes rebeldes en las siniestras villas miseria que rodean a las ciudades –producto del éxodo rural– para ir a tirar tiros y jugar a los bandidos de honor.

Contrariamente al M-19, que rompió la tregua firmada con el gobierno, las FARC resolvieron prolongarla y presentarse a las elecciones después de haber

creado un nuevo partido, la Unión Patriótica (UP). Desafiando todos los riesgos que representa esta mutación: desde su creación, la UP ya perdió a setenta de sus militantes, abatidos por asesinos. Pero la muerte no es selectiva. Estos últimos tiempos, parece que estuviera en marcha un plan de eliminación de los dirigentes de la oposición, progresistas o revolucionarios (4). Recientemente cayeron Hernán Dionisio Calderón, responsable comunista del departamento del Valle; César Flórez, dirigente socialista; Ricardo Lara Parada, fundador del Ejército de Liberación Nacional e impulsor del Frente Amplio del Magdalena Medio; Óscar William Calvo, del Ejército Popular de Liberación y miembro de la Comisión de Paz; Rubén Castaño, miembro del Comité Central del Partido Comunista, y Hernando Yate, dirigente de la Unión Patriótica.

Encontrar a los dirigentes “históricos” de las FARC no es fácil. Hay que hacer un viaje de dos horas en helicóptero, el que se desliza en medio de las impresionantes gargantas que perforan la cordillera oriental, hasta las vertientes cubiertas de una selva tupida. De repente, un claro, una casa. Hombres y mujeres jóvenes, vestidos con uniformes de combate. Disciplinados, siempre ocupados en alguna tarea en el campamento. Y luego esas dos figuras legendarias: Manuel Marulanda Vélez, “Tiro Fijo”, cincuenta y cinco años, fornido y silencioso, y Jacobo Arenas, que podría descender de las montañas para defender en la plaza pública el programa de la Unión Patriótica y ser su candidato a presidente.

“La paz está indisolublemente vinculada a las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales que reclama el país, esta es la idea que defenderemos sin descanso en el Parlamento y en todas partes. A Betancur lo movían buenas intenciones, pero ¿cómo se puede seguir las recetas de austeridad del FMI y responder a las aspiraciones populares a la vez? El desempleo, para atenerse sólo a uno de los aspectos de la crisis, hace estragos”, dice Braulio Herrera, el joven dirigente de la UP. Esta última aspira a convertirse en un frente capaz de debilitar el bipartidismo. Va a ser duro.

En efecto, a pesar de sus rupturas internas, los dos partidos “tradicionales” disponen de formidables recursos y no menos formidables aparatos. Pero, por diferentes razones, ni uno ni otro apoyaron realmente al presidente Betancur. Los conservadores sólo aprobaron a regañadientes las audaces iniciativas de aquel al que el pueblo llama familiarmente “Belisario” o “BB”. Su candidato actual, Álvaro Gómez, rígido y altanero, viejo zorro de la política partidista (tres veces perdedor en las presidenciales), cuyo padre, el ex presidente Laureano Gómez, ejerció una dictadura “falangista” de 1950 a 1953, intenta disimular sus instintos autoritarios bajo un lenguaje moderado y vago. El sangriento caso del Palacio de Justicia, aunque le dio al Partido Conservador la oportunidad de cerrar filas, representa para él más bien una desventaja, como todo lo que marcó ese “noviembre negro”.

En cambio, el candidato del Partido Liberal, Vir-

gilio Barco, ex intendente de Bogotá, seguramente intentará sacar ventajas electorales de esos mismos acontecimientos. Aunque carece de carisma, ese tecnócrata un poco deslucido, de ideas keynesianas, no deja de contar con un apoyo masivo dentro de su formación. El Partido Liberal se dividió desde que el actual senador Luis Carlos Galán fundó, en 1980, el Nuevo Liberalismo, cuya otra figura destacada fue Rodrigo Lara Bonilla. Asesinado el 30 de abril de 1984, este joven ministro de Justicia libraba en ese entonces un peligroso combate contra la mafia de la droga. En campaña para las elecciones presidenciales por segunda vez, Galán declara: “Queremos que el Partido Liberal vuelva a sus fuentes progresistas. ¿Nuestro electorado? Los habitantes de las grandes ciudades –las mujeres están muy atentas a nuestro mensaje, también los jóvenes–, y entre ellos las clases medias, cuyo nivel de vida no deja de bajar. Pero trabajamos mucho por los ‘marginales’, todos aquellos que viven en condiciones miserables mientras que el país es formidablemente rico. Alcanza con tomar el caso del carbón, (mal) administrado por el Estado colombiano y la compañía Exxon: esas riquezas sólo benefician a una minoría”.

Este es claramente uno de los problemas centrales de Colombia. Belisario Betancur está de acuerdo al respecto. Cuando le preguntamos: “En su opinión, ¿cuáles son los enemigos de la paz?”, nos respondió: “Los enemigos de la paz son los factores objetivos que alimentan la subversión: la pobreza, la marginalidad económica, la desigualdad en los ingresos, el desempleo. Pero, a la hora de retirarme, no tengo frustraciones. Hemos buscado y seguimos buscando la paz, en el interior de Colombia y en nuestra región. Y esas gestiones avanzan. El Grupo Contadora representa el éxito del diálogo en la política internacional, y los acuerdos internos de paz también traducen las virtudes del diálogo, son un hecho histórico, que debe continuarse hasta llegar a buen término”.

Hoy, tanto el Grupo Contadora como los acuerdos de paz parecen estar fuertemente amenazados: sin embargo, nadie duda de que constituyen la única salida razonable que se puede seguir; desesperadamente. ■

1. Una cosa es admitir que algunos grupos armados, instalados en zonas en las que se cultiva coca, tienen buenas relaciones con los campesinos para los que ésa es su fuente de subsistencia; otra cosa es la tesis de una alianza sellada entre guerrilleros y mafiosos, que no se basa en ninguna prueba, mientras que, en cambio, los lazos entre los traficantes y los grupos paramilitares de extrema derecha son del dominio público.

2. Véase Bernard Cassen, “Colombie: des lézards dans la façade démocratique”, *Le Monde diplomatique*, París, noviembre de 1977, y el dossier “Colombie: la guerre ou la paix”, Mario Calderón y Eduardo Pizarro (directores) *Amérique latine*, N° 23, julio-septiembre de 1985.

3. En el artículo “A toda marcha”, publicado por el periódico *El Tiempo* del 10 de julio de 1985, Daniel Samper Pizano denunció el carácter odioso y obtuso de esas reacciones.

4. Según el Partido Comunista colombiano, los “militares fascistas”, asistidos por individuos del grupo “Ricardo Franco”, actuarían bajo el nombre de “Plan Cóndor”.

*Periodista.

Traducción: Bárbara Poey Sowerby

HACIA LA INDEPENDENCIA

1717

Virreinato

Se crea el Virreinato de Nueva Granada, que comprendía, aproximadamente, lo que hoy es Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador.

1810

Independencia

Se inicia el proceso de independencia de Colombia.

1819

Boyacá

7 de agosto. El ejército al mando de Simón Bolívar derrota a los españoles en la batalla de Boyacá y asegura la independencia definitiva.

1819

República

Carta Fundamental: se crea la República de Colombia; Bolívar es declarado Presidente.

1830

Desintegración

Muere Simón Bolívar. Se disgrega la Gran Colombia al separarse Venezuela y Ecuador.



2

Colombia hacia adentro

LA MAYOR APUESTA

La paz está en el centro de las ambiciones políticas del país. La guerrilla, encarnada en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), es la más antigua de América Latina: opera desde hace más de medio siglo. Hubo varios gobiernos que intentaron negociar la paz con ella, pero sin éxito. El presidente Juan Manuel Santos, tras largas y complicadas negociaciones, parece estar a un paso de suscribir un acuerdo de paz definitivo, esperanza y apuesta máxima de la mayoría de los colombianos.



La otra cara de una negociación larga y difícil

¿Quién le teme a la verdad?

por Maurice Lemoine*

A mediados de marzo de 2016 parecía inminente la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, después de tres años de complicadas negociaciones, primero en Noruega y luego en Cuba. Pero una paz duradera exigirá profundas reformas estructurales en el país.

• Tres años! Hace ya más de tres años que se abrieron formalmente, en Noruega, las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese día, el 20 de octubre de 2012, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, declaró como preámbulo, en nombre de la guerrilla más vieja de América Latina: “Hemos venido a Oslo desde el Macondo (1) de la injusticia, con un sueño colectivo de paz y una rama de olivo en las manos”.

Atento a poner la vara a la altura adecuada y recordar las causas de la lucha armada iniciada décadas antes –un conflicto de naturaleza económica, política y social–, el comandante reclamó “cambios estructurales” y excedió claramente el orden del día decidido durante los encuentros secretos organizados desde hacía meses (2). A lo que el jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, respondió: “Para discutir la agenda minera y energética [eje central de las políticas neoliberales del poder], las FARC tienen que dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones”. Antes de poner presión sobre los insurgentes se pronunció sobre la duración de las tratativas: “Va a ser un proceso rápido y eficaz. Un proceso que se va a medir en meses y no en años”.

Antecedentes fallidos

Antes de estas negociaciones –que desde noviembre de 2012 tienen en La Habana sus cuarteles definitivos (3)– ya había habido algunas tentativas. La más esperanzadora, y acto seguido más desesperanzadora, tuvo lugar bajo la presidencia del conservador Belisario Betancur (1982-1986). La historia merece ser

recordada. Un alto el fuego bilateral pactado durante los acuerdos de La Uribe, el 28 de marzo de 1984, permitió la creación de un partido político, la Unión Patriótica (UP), que reunió a los militantes de diversas izquierdas no armadas, a los que se les sumaron numerosos guerrilleros de las FARC desmovilizados para la ocasión. Los otros esperaron, al pie del cañón, el desarrollo de los acontecimientos. Que, desafortunadamente, terminaron muy mal. Después de haber resultado electos 14 senadores, 20 diputados, 23 intendentes y más de 3.000 consejeros municipales en 1986, los militantes, simpatizantes y dirigentes de la UP fueron exterminados por los ultras del ejército y los paramilitares: 4.000 muertos, entre los que se contaban dos candidatos a las elecciones presidenciales, Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo (1990) (4). Combatiente insurgente que había vuelto a la vida civil, elegido diputado por Caquetá, Iván Márquez, como muchos otros, volvió a la clandestinidad a fines de los años 1980. No por capricho, ni por amor a la violencia o las incomodidades de la selva, sino por simple necesidad de supervivencia.

Después de eso, las negociaciones conocidas como “del Caguán” (5), entre octubre de 1998 y febrero de 2002, durante la presidencia de Andrés Pastrana, fueron “improvisadas y desprolijas”, estima Jean-Pierre Gontard, emisario suizo que participó en las mismas en representación de su gobierno. “Eso les convenía a los dos partidos. Por un lado, el poder necesitaba tiempo para concretar el Plan Colombia con Estados Unidos (6). Por otro, para las FARC, que habían crecido muy rápido, se trataba de poner una pausa para formar cuadros y descansar”, señala Gontard. En esas →

Drogas

Para muchos campesinos, el cultivo de coca fue una de las pocas vías a su alcance para salir de la miseria, así como los marginados sociales de la periferia de las grandes ciudades fueron la fértil cantera de la que se nutrieron las filas de las bandas de narcotraficantes.

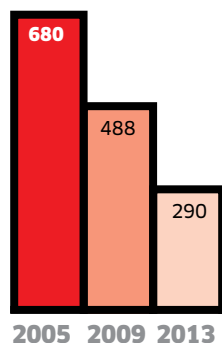


© REUTERS/John Vizcaino

Desaparecidos. Una demostración llevada a cabo en Bogotá en reclamo por las personas desaparecidas a manos de los grupos paramilitares, por la memoria histórica y por la paz.

Fabricación de cocaína

(con un grado de pureza del 100%, en toneladas)



→ sesiones prácticamente no se siguió ningún orden del día. “Nos subíamos a una avioneta en San Vicente del Caguán para ir hasta el lugar de la reunión, y el comisario de paz nos decía: ‘Bueno, hoy tal vez vamos a hablar de esto...’. Y no necesariamente se hablaba de eso.” La guerrilla había pedido que en las reuniones participaran militares: “El gobierno designó a un general retirado que durmió durante la mayor parte de las reuniones... ¡hacía mucho calor!”, cuenta Gontard.

Ahora sí

Llevadas a cabo bajo la égida de dos países garantes, Cuba y Noruega, y de dos acompañantes, Chile y Venezuela, las negociaciones actuales se desarrollan en un contexto completamente distinto. Para las élites económicas “modernas” que representa Santos, se vuelve más realista buscar la paz por otra vía más que por un enfrentamiento sin salida: aunque se debilitó en estos últimos años, la guerrilla no fue vencida militarmente. Para las FARC tampoco se perfila ninguna perspectiva de victoria. Desde noviembre de 2012 se discute cara a cara. La Habana garantiza la organización, Oslo financia, Santiago no hace gran cosa y Caracas les permite a los rebeldes pasar por su territorio para ir a Cuba. Siempre según Gontard, nunca las condiciones fueron tan favorables, porque “los representantes presentes en la isla son en parte los que participaron en las negociaciones precedentes, de manera que, en términos de experiencia, hay una especie de capitalización”.

Haciendo tambalear los cálculos del gobierno, que preveía una “negociación express” y una paz arran-

cada al término de una carrera contra el reloj que favorecería, sin redistribución ni transformación, el crecimiento de la economía neoliberal, las FARC, aunque renunciaron a sus reivindicaciones más radicales, siguen exigiendo reformas para dejar los fusiles a un lado. Por más penosa que le pueda parecer esta constatación, el poder tiene que transigir. De los cinco puntos de negociación de la agenda –“reforma rural integral”, “participación política”, “culturas ilícitas y narcotráfico”, “justicia y reparaciones a las víctimas”, “desarme”–, sobre los tres primeros ya se llegó a un acuerdo. Nadie conoce el tenor exacto del mismo, ya que las dos partes implicadas convinieron en que “no hay nada cerrado hasta que no esté todo cerrado”. Para que no se trabase el proceso, una cierta cantidad de puntos en litigio quedó “en pausa” y va a tener que ser resuelta al final. Entre esos puntos figura la supresión de los latifundios, una exigencia de las organizaciones campesinas que se agrupan en la Cumbre Agraria.

Latifundios y minifundios

Según el Censo Nacional Agrario que se hizo público el 11 de agosto de 2015, el 69,9% de las propiedades agrícolas de menos de 5 hectáreas ocupan el 5% de las superficies; los dominios de más de 500 hectáreas, concentrados en las manos del 0,4% de los propietarios, representan el 41,1% de los 113 millones de hectáreas que se censaron. Ese es el corazón del problema. Sin embargo, mientras que las organizaciones populares ponen el acento en Zonas de Reserva Campesina (ZRC) (7), defendidas también por las FARC en la

mesa de negociaciones, el poder está a favor de la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), asociaciones asimétricas de pequeños campesinos con grandes empresas que les prometen a los primeros sólo el rol de asalariados, sometidos y subyugados, de la agroindustria. Al mismo tiempo, el gobierno elabora un nuevo proyecto de ley sobre los “baldíos”, que escamotea la entrega de títulos de propiedad a los campesinos. Y cuando la protesta se transforma en manifestación, llueven bastones y gases lacrimógenos, seguidos de arrestos, condenas por “rebelión” y encarcelamiento de menores –acusados, por lo general sin razón, de tener lazos con las FARC o con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra organización armada que opera en el país–. Centenares de presos políticos se suman así a los prisioneros de guerra (alrededor de 9.000 personas).

Negociar como si no hubiera guerra

La paz o la búsqueda de la paz puede ser la continuación de la guerra por otros medios, y la burguesía la propone sólo si favorece sus intereses. “Lo que se discute en Cuba –confirma de hecho en Bogotá el historiador y sociólogo Sergio Arvoleda– paradójicamente no tiene influencia directa en la vida cotidiana del país.” Queriendo ser optimista, sin embargo agrega:

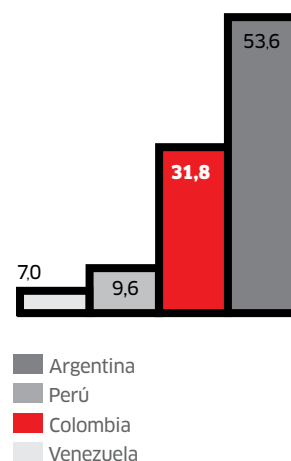
la opinión pública ejerce presión, en un contexto político muy complicado, el proceso de paz entra en una fase que exige una aceleración forzada”, nos explica, con pedido de anonimato, una fuente no latinoamericana directamente implicada en la negociación (cada una de las dos delegaciones cuenta con numerosos consejeros y expertos civiles y militares, nacionales y extranjeros). Habilitado por su predecesor de extrema derecha Álvaro Uribe y su gente de confianza, opuestos a cualquier negociación mientras los “terroristas” no se “rindan”, pero también por los medios (que están a favor de la paz, pero que son violentamente hostiles con los rebeldes), ¿no se mostró el presidente Santos un poco imprudente al establecer el 26 de marzo de 2016 como fecha límite de las discusiones? Volviéndolas todavía más complejas, miembros de las dos delegaciones asistidas por sus expertos integraron cuatro subcomisiones para progresar a marcha forzada en los temas más delicados: “justicia transicional”, “presos políticos”, “género y niños”, “abandono de armas y alto el fuego”.

“Un milagro”

Esta última subcomisión la componen oficiales activos del ejército y comandantes del ala militar de las FARC, de la cual todos los bloques (9), incluso los que

Tasa de homicidios

(cada 100 mil habitantes, 2011-2013)



“[Algunos] creyeron que la justicia restauradora tenía como objetivo encarcelar a los guerrilleros.”

“Desde un punto de vista histórico, lo que pasa igual representa un profundo cambio. Cada día que pasa, las decisiones tomadas en La Habana abren un camino que se puede consolidar”.

En varias oportunidades, las FARC anunciaron y respetaron un alto el fuego unilateral, haciendo caer de manera espectacular la cantidad de personas asesinadas en los combates (8). Sin embargo, no obtuvieron su contrapartida por parte del poder, por lo que la presión militar sigue siendo la prioridad. De lo que resulta una sucesión de dramas, con orígenes que suelen ser confusos, donde cada uno acusa al adversario cuando caen soldados o guerrilleros; crisis inevitables mientras el gobierno siga imponiendo negociar como si no hubiera guerra y seguir combatiendo como si no hubiese negociaciones. No obstante, bajo la amistosa presión de los países garantes y acompañantes, así como también de sectores progresistas y movimientos sociales, inquietos por la degradación del proceso, las FARC anunciaron una vez más un alto el fuego unilateral el 12 de julio de 2015, algo que le volvió a dar oxígeno a una negociación cuya llama se estaba apagando. Como respuesta, y como adepto de la desescalada parcial, Santos sólo ordenó, el 26 de julio, la suspensión de los bombardeos.

“A medida que las conversaciones avanzan y que

están considerados como los más duros, tienen un representante en la capital cubana, lo que corta en seco los rumores acerca de posibles divisiones en sus rangos. “La guerrilla muestra una cohesión impresionante –retoma nuestro observador–. Tiene problemas para informar a sus tropas, porque el ejército intercepta sus comunicaciones, pero, a lo largo de este último período, las tuvo constantemente al corriente y llevó a cabo cambios impresionantes, reemplazando muchos comandantes del frente y cuadros medios de perfil ‘militar’ por homólogos más ‘políticos.’” Y, el 23 de septiembre, ocurrió el milagro...

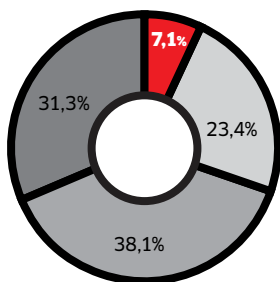
“Fue un acontecimiento –sonríe Jahel Quiroga, sobreviviente de la Unión Patriótica y responsable de la organización de defensa de los derechos humanos Reiniciar–. Por la mañana, Santos había avisado que iba a anunciar una gran noticia y que, por primera vez, iba a ir a La Habana. Por lo que estábamos pegados a TeleSur (10) en internet, porque nuestros canales de televisión, RCN, Caracol, sólo informan acerca de lo que dice el gobierno y cortan la transmisión apenas empiezan a hablar los representantes de la guerrilla.” Ese día, fue efectivamente desde la capital cubana que el jefe de Estado colombiano y el número uno de las FARC Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochoenko”, anunciaron haber llegado a un→

Postergación

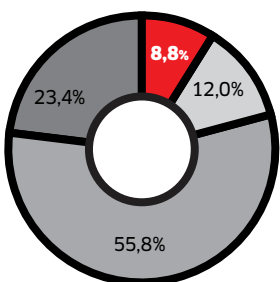
La tan anunciada fecha del 23 de marzo de 2016 para firmar el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC fue finalmente postergada. Pero pocos días después se daba la buena noticia de que se iniciaban también las negociaciones con el ELN para lograr el mismo objetivo.

Participación en el PIB sudamericano (porcentaje del total)

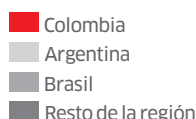
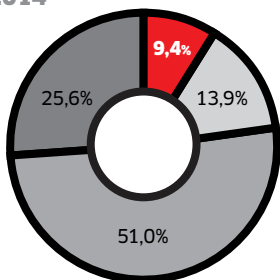
1960



1990



2014



© REUTERS/Enrique de la Osa



Negociador. Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC que discute los términos de la paz con el gobierno de Santos.

→ acuerdo en la cuestión de la justicia y el derecho de las víctimas; para muchos, un punto sin vuelta atrás. Intercambiaron un apretón de manos histórico, benedicto a su manera por un encantado Raúl Castro.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la tragedia colombiana se cobró 218.094 muertos (el 19%, combatientes) y provocó el desplazamiento forzado de 5.712.506 personas entre 1958 y 2012 (11). Cuenta curiosa, por cierto, que excluye las 200.000 o 300.000 víctimas caídas entre 1948 y 1957, durante la espantosa guerra entre conservadores y liberales que pasó a la historia como “la Violencia”. Este período había llevado a los comunistas y, temporalmente, a los liberales, a organizar grupos de autodefensa en el campo; grupos de los cuales, ulteriormente, al intensificarse la represión, surgieron las FARC. Sea como sea, los hechos están ahí, por más maneras que existan de presentarlos, y tantas otras de recibirlos. Algo que el presidente Santos presintió cuando anunció, como si caminara sobre huevos: “No todo el mundo va a estar contento, pero estoy seguro de que con el tiempo todo va a ir mejor, y poco importa que queden algunos descontentos. A nadie se lo puede satisfacer totalmente, y el cambio va a ser muy positivo” (12).

Pretensiones absurdas

Ninguna de las partes llegó a la mesa de negociaciones con las manos limpias. Existe una clara división entre las zonas rurales, afectadas por el conflicto, y los centros urbanos, “que no entienden lo que pasa”, señala Arvoleda. Los imaginarios de unos y de otros no son los mismos. “El país está totalmente polarizado, ayudado en ese sentido por los grandes medios, que falsifican la historia y distorsionan la verdad –re-

sume Carlos Lozano, director del semanario comunista *Voz*-. Su mensaje no es un mensaje de reconciliación o de tolerancia; alimenta las divisiones. Los partidarios de la paz están acorralados.” Para toda una corriente de opinión marcada a fuego por Uribe o por su fiel servidor, el procurador general Alejandro Ordóñez, la única cuestión que vale es saber por cuánto tiempo los jefes de los “terroristas” van a estar privados de vida política y encarcelados.

Sólo que nunca se vio, en ningún lado, que los dirigentes de un movimiento de oposición armada no vencido firmaran la paz para verse a sí mismos, apenas recuperado su traje de civil, detrás de las rejas, o para ser extraditados a Estados Unidos. El hermano del jefe de Estado, Enrique Santos, que tuvo un rol importante en las primeras tratativas con los rebeldes, intenta darle un nuevo marco al debate: “Este proceso no apunta a castigar a las FARC, sino a terminar con una guerra que provocó mucho daño y destrucción” (13). De la misma manera, el senador Antonio Navarro-Wolf, ex comandante amnistiado después de que la guerrilla del M-19 abandonara las armas en 1990, informó que “la participación política es el corazón de todos los procesos de paz negociados en el mundo y en nuestra historia; de todos, sin excepción” (14). Habiendo partido de una postura selectiva, punitiva, unilateral, asimétrica, el gobierno y sus negociadores tuvieron que tomar en cuenta esta realidad.

La reflexión no fue menos difícil para los simpatizantes de la guerrilla o para los sobrevivientes de la UP, por ejemplo, como Jahel Quiroga: “La guerrilla nació a causa de la exclusión política y la imposibilidad de responder a las aspiraciones del pueblo por vía democrática. Las violaciones más graves de los derechos humanos fueron cometidas por el Estado y por los paramilitares; no se puede establecer un paralelismo”. En cuanto a los guerrilleros, de los que nadie olvida las ejecuciones extrajudiciales o los secuestros en serie, “la tarea fue ardua –cuenta nuestro testigo de primera línea– cuando se trató de hacerlos evolucionar en su razonamiento”. Un razonamiento que el comandante Jesús Santrich todavía expresaba el 1º de septiembre de 2015 al declarar: “En tanto insurgentes, no vamos a cumplir ni un segundo de prisión. La rebelión es un derecho universal que nosotros hemos ejercido, por el cual no manifestamos ningún arrepentimiento y por el que no admitimos ninguna sanción” (15).

Ríspidas discusiones

Las discusiones fueron muy rudas, particularmente durante la visita de la ponente de Naciones Unidas sobre las violencias sexuales, o cuando se abordó el tema de los reclutamientos forzados. “El primer punto los guerrilleros lo rechazaron en bloque: argumentan que son muy estrictos en su reglamento interno y que, si existieron casos de ese tipo, en ningún caso se trata de una política deliberada. En cuanto al concepto de reclutamiento forzado, en su lógica no existe. Conside-

ran que en las zonas rurales ellos son el Estado: ‘O venís con nosotros o morís de hambre.’” A fin de cuentas, los comandantes insurgentes también tuvieron que evolucionar. Estos dos temas, muy sensibles para ellos, serán mencionados en el acuerdo. “Su conclusión fue: ‘De acuerdo, confirmamos que no es una política de las FARC, pero si alguien está implicado en este tipo de crimen deberá responder a título personal!’.”

Gobierno y rebeldes anunciaron la creación de una jurisdicción especial para la paz y un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que incluye a una Comisión de la Verdad considerada de la mayor importancia. Cuando una guerra termina, dejando detrás de sí una estela sangrienta de crímenes y de exacciones, la restauración del Estado de Derecho supone como prioridad un derecho a la memoria: conocer los crímenes cometidos, sus autores, saber qué fue lo que pasó. También existe una obligación moral, una necesidad social todavía más imperiosa: identificar y nombrar a las víctimas. Y otorgarles una reparación. Pero cuando el objetivo principal es pasar del conflicto al posconflicto, de una “sociedad caótica” a una “sociedad apaciguada”, poniendo en juego miles de vidas futuras y el destino de una nación, todo eso no necesariamente pasa por el casillero “prisión”. Es lo que se conoce como la justicia restauradora o justicia de transición.

Qué es la justicia restauradora

La jurisdicción especial para la paz va a contar con salas de justicia y un tribunal por la paz, ambos compuestos en su mayoría por magistrados colombianos, así como también por algunos especialistas extranjeros altamente calificados. Van a ser juzgados todos aquellos que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado y están implicados en “crímenes graves”: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Va a haber dos tipos de procedimientos: uno para los que exponen sin desvío los hechos y su responsabilidad (de cinco a ocho años de “restricción de las libertades”, en un perímetro limitado), y otro, con una pena que puede llegar a los veinte años de cárcel, para los que no lo hagan o lo hagan de manera tardía. Las personas acusadas de “crímenes políticos o conexos” –todavía no definidos, pero susceptibles de cubrir los secuestros y la implicación en la cadena de narcotráfico, destinados a financiar la economía de guerra– se van a ver beneficiadas por una ley de amnistía.

Todos los que creían haber terminado con una guerrilla subterránea están estupefactos. Todos colorados y con los ojos como platos, los partidarios de la guerra a ultranza, los mismos que permitieron condenas insignificantes por los crímenes de los paramilitares gracias a la Ley de Justicia y Paz firmada por Uribe en 2005, se desatan contra semejante “impunidad”. El ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002) estima incluso que Colombia está siguiendo el camino como para transformarse, insulto máximo, en Ve-



© REUTERS/Alexandre Meneghini

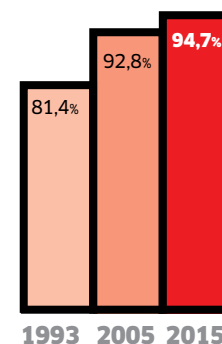
Mesa de la paz. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y del país anfitrión, Cuba, Raúl Castro, se saludan al comienzo de las conversaciones de paz con las FARC.

nezuela. Porque lo peor está por venir. En efecto, al forzar a los colombianos a enfrentar un pasado doloroso y verdades molestas, ejercicio al cual muchos no tienen ninguna gana de entregarse, el acuerdo va más allá de la clásica acusación de los actores armados –guerrilleros, militares y paramilitares–, cara a las “sociedades civiles” y a los profesionales de la defensa de los derechos humanos. Se espera que todos los actores implicados en el conflicto respondan por sus propios actos ante la Comisión de la Verdad, incluidos los “no combatientes”. Lo que promete un descenso a los bajos fondos de las cloacas y las alcantarillas...

Responsabilidades escandalosas

¿En nombre de qué doble parámetro, en efecto, se les podría pedir a las FARC que rindieran cuentas (y mañana al ELN) sin hacer lo mismo con la oligarquía tradicional, los partidos políticos, los altos funcionarios, los empresarios, los ganaderos, los terratenientes o las multinacionales, cuyos lazos con la injusticia social y/o las milicias de extrema derecha fueron comprobados miles de veces? ¿Se puede exonerar a los que sacaron provecho del despojo de tierras, de los desplazamientos forzados o del tráfico de influencias en el marco de la administración de la justicia?, ¿a las estructuras criminales detrás de los ejecutantes? ¿Cómo ocultar el rol preponderante de Estados Unidos en la persistencia del conflicto, desde el general William Yarborough, quien, en 1962, sugirió organizar grupos paramilitares, hasta William Clinton y George W. Bush, los financistas del Plan Colombia? Consejero jurídico de las FARC por invitación del gobierno noruego, el español Enrique Santia-→

Tasa de alfabetismo (mayores de 15 años, en porcentaje)

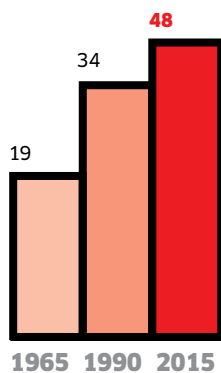




Desplazados. Una niña se asoma en la precaria vivienda de un campamento de refugiados, víctimas de los desplazamientos forzados por la guerra civil. Bogotá, 2009.

Población

(millones de personas)



→ go genera conmoción cuando hace públicamente algunas preguntas particularmente delicadas, como la siguiente: “¿Dónde termina la cadena de mando en una dictadura? En el mejor de los casos, dentro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pero en una democracia desemboca en el palacio presidencial y en el gabinete de los ministros. Algo que está plenamente establecido por la jurisprudencia internacional...” (16).

Y ese es el motivo por el cual se evoca a los ex jefes de Estado, y en particular a Uribe, en quien se interesa la Corte Suprema de Justicia por, entre otras ignominias, su “probable participación, por acción o por omisión”, en la masacre paramilitar de El Aro –17 campesinos torturados y ejecutados, 1.200 personas desplazadas–, en 1997, cuando era gobernador de Antioquia... ¿Y quién era su ministro de Defensa cuando estalló el escándalo de los “falsos positivos” –no menos de 3.000 casos de secuestros y de asesinatos de civiles por parte de las Fuerzas Armadas para inflar los resultados de la lucha antiguerrilla–? Santos, el actual jefe de Estado.

Y ahora es el escándalo. Se puede ver a algunos de los que arrasaron con el país, pero que recuperaron un inocente fervor, llamar a... la Corte Penal Internacional (CPI). “Lo que pasa –dice Lozano casi jocosamente– es que creyeron que la justicia restauradora tenía como objetivo encarcelar a los guerrilleros. Por lo que, trazando un paralelismo, se imaginan a todo el mundo detrás de las rejas. En realidad se trata fundamentalmente de que todos den su testimonio. Que el país y las víctimas sepan qué fue lo que pasó.” Da igual. El 19 de octubre de 2015, al mismo tiempo que reafirmaban su apoyo al presidente Santos, los sectores económicos expresaban las inquietudes que carcomen a los patrones. Con la presentación de un do-

cumento que llevaba el título de “El acuerdo de paz debe ser respetuoso con el Estado de Derecho”, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), Bruce MacMaster, confesaba: “Nos preocupa la posibilidad de responsabilidades indirectas”, y pedía aclaraciones.

Algunos días antes, el jefe de los negociadores del gobierno, De la Calle, ya había dado un paso hacia atrás al declarar: “El texto suscrito tiene algunas ambigüedades y deberá [efectivamente] ser aclarado”. Y entonces se hizo oír la respuesta de las FARC. En un comunicado que llevaba como título “La claridad no admite interpretación”, afirman que no va a ser posible “honrar el compromiso” de concluir las conversaciones en seis meses si el gobierno empieza “a poner en duda los acuerdos que ya se firmaron” y “hace retroceder los avances” (sic).

Todos se prenden de la esperanza; es cierto que nunca un proceso de paz con las FARC llegó tan lejos. Pero quizás todavía es demasiado pronto para hablar de “posconflicto”. ■

1. Referencia al pueblo imaginado por Gabriel García Márquez, principalmente en su novela *Cien años de soledad*.
2. Véase Maurice Lemoine, “Paz, con justicia social”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, febrero de 2013.
3. Véase Hernando Calvo Ospina, “Vu et entendu à La Havane”, *Le Monde diplomatique*, París, febrero de 2013.
4. Véase Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz, “Vida y muerte de la Unión Patriótica colombiana”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, mayo de 2005.
5. Una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados se estableció durante esta ocasión en los municipios de La Macarena, Uribe, Vista Hermosa, Mesetas (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), la pequeña “capital” de las negociaciones.
6. En una primera fase, este plan elaborado por Washington permitió inyectar 10.700 millones de dólares para modernizar al ejército colombiano.
7. Entidad jurídica definida por la Ley 160 de 1994. Los movimientos campesinos hicieron de la misma una herramienta para proteger la economía rural y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que luchaban contra la concentración de tierras mediante la reglamentación de su ocupación, con una particular atención puesta en los campesinos pobres.
8. De acuerdo con la fundación Paz y Reconciliación, se registran en general entre 180 y 200 acciones armadas por mes. Durante los cinco meses de la primera tregua unilateral de las FARC, sólo se registraron 112, es decir, una disminución de casi el 50% (*El País*, Madrid, 23-5-15).
9. La estructura militar de las FARC está compuesta por siete grandes “bloques” (que corresponden a territorios), divididos en “frentes”, compuestos por “columnas”.
10. Canal internacional de televisión creado por Hugo Chávez en 2005 con Argentina, Uruguay, Cubay, en 2006, Bolivia, para contrarrestar a los medios dominantes. No se transmite en Colombia.
11. *¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*, Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, 2013.
12. *El Tiempo*, Bogotá, 22-9-15.
13. *El Tiempo*, 6-10-15.
14. *El Tiempo*, 8-10-15.
15. Agencia de información Nueva Colombia (Anncol), Estocolmo, 1-9-2015.
16. *Semana*, Bogotá, 25-7-2015.

*Periodista. Último libro publicado: *Les Enfants cachés du général Pinochet*, Don Quichotte, París, 2015.

Traducción: Aldo Giacometti

La visión pesimista de un iconoclasta

Ruinas nada más

por Fernando Vallejo*

El escritor colombiano Fernando Vallejo, ácrata radical, provocador y pertinaz polemista, es una de las grandes voces de la literatura en español. Hace más de cuarenta años tuvo que exiliarse en México, donde aún reside. En este texto pinta un crudo y desesperanzado retrato de la realidad de su país natal.

Ustedes tuvieron la mala suerte de nacer, y en el país más loco del planeta: no le sigan la corriente, no se dejen arrastrar por su locura. Pues si bien la locura ayuda a sobrellevar la carga de la vida, también puede sumarse a la desdicha.

El cielo y la felicidad no existen. Esos son cuentos de sus papás para justificar el crimen de haberlos traído a este mundo. Lo que existe es la realidad, la dura realidad: este matadero al que vinimos a morir, cuando no es que a matar, y a comernos de paso a los animales, nuestro prójimo.

Porque nuestro prójimo también son los animales, y no sólo el hombre como creyó Cristo. Todo el que tenga un sistema nervioso para sentir y sufrir es nuestro prójimo: los perros, los caballos, las vacas, las ratas. Mis hermanos los perros, mis hermanos los caballos, mis hermanas las vacas, mis hermanas las ratas, que también hacen parte de Colombia. O sea de ustedes. O sea de mí.

En consecuencia, no se reproduzcan. No hagan con otros lo que hicieron con ustedes, no paguen con la misma moneda, el mal con el mal, que imponer la vida es el crimen máximo. Dejen tranquilo al que no existe, ni está pidiendo venir, en la paz de la nada. Total, a ésa es a la que tenemos que volver todos. ¿Para qué entonces tanto rodeo?

La patria que les cupo en suerte, que nos cupo en suerte, es un país en bancarrota, en desbandada. Unas pobres ruinas de lo poco que antes fue. Miles de secuestrados, miles y miles de asesinados, millones de desempleados, millones de exiliados, millones de despla-

zados, el campo en ruinas, la industria en ruinas, la justicia en ruinas, el porvenir cerrado: eso es lo que les tocó a ustedes. Los compañeros. Les fue peor que a mí.

Y como yo, que un día me tuve que ir y justo por eso hoy les estoy hablando (vivo, a lo que parece), probablemente también se tengan que ir ustedes, pero ya no los van a recibir en ninguna parte porque en ninguna par-

La patria que les cupo en suerte, que nos cupo en suerte, es un país en desbandada.

te nos necesitan ni nos quieren. Un pasaporte colombiano en un aeropuerto internacional causa terror: “¿Quién será? ¿A qué vendrá? ¿Qué traerá? ¿Coca? ¿Vendrá a quedarse?”.

No. No vinimos a este mundo a quedarnos. Vinimos a pasar como el viento y a morir. A veces ese viento al pasar hace estragos y tiene nombre: se llama Pablo Escobar, se llama Miguel Rodríguez Orejuela, se llama Tirofijo, se llama Gaviria, se llama Samper, se llama Pastrana. Aprendan mientras se van a ponerle nombres propios a la infamia.

Cuando yo nací me encontré aquí con una guerra entre conservadores y liberales que

arrasó con el campo y mató a millares. Hoy la guerra sigue aunque cambió de actores: es de todos contra todos y ya nadie sabe quién fue el que mató a quien. Ni sabe, ni le importa, ni lo piensa averiguar, porque, ¿para qué? ¿Para qué, si a ningún asesino lo van a castigar en el país de la impunidad? ¿Si nuestro primer mandatario va en peregrinación a los Llanos a abrazar a nuestro primer delincuente? Como diciéndoles con la iniquidad de ese abrazo: “¡Maten, roben, extorsionen, destruyan, secuestren pero, eso sí, háganlo a cabalidad para que se queden con lo que queda de Colombia!”.

Y aquí vamos, por estas calles de este país embotellado, por entre perros y niños abandonados, sacándoles el cuerpo a los baches, a las balas y a los impuestos del gobierno y de las FARC. ¿Pero hacia dónde vamos? ¿Adónde es que pretendemos llegar?

Somos muchos y ya no nos soportamos ni cabemos. Nos hemos convertido en un estorbo para los demás, a los que les estamos bebiendo el agua, respirando el aire, contaminándoles los ríos, embotellándoles las calles. El aire se va a acabar, el agua se va a acabar, las calles ya no alcanzan y esos ríos fantásticos de Colombia que cuando yo nací vivían, bullían de peces, también ya los matamos. Hoy los ríos de Colombia son alcantarillas que van a dar al mar, un desagüadero de cloacas.

No se reproduzcan que nadie les dio ese derecho. ¿Quién lo pudo dar? ¿Dios? ¿Dios que es tan bueno y se ocupa de los niños y los perros abandonados que llenan las calles de Colombia? ¿Qué se va a ocupar! Dios no trabaja. Con eso de que el séptimo día se sentó a descansar... De los niños y los perros abandonados que llenan las calles de Colombia el que sí se ocupa es el Papa.

Yo he vivido a la desesperada, y se me hace que a ustedes les va a tocar vivir igual. Y un día me tuve que ir, sin quererlo, y se me hace que a ustedes les va a tocar ir igual. El destino de los colombianos de hoy es irnos. Claro, si antes no nos matan. Pues los que se alcancen a ir no sueñen con que se han ido porque adondequiera que vayan Colombia los seguirá. Los seguirá como me ha seguido a mí, día a día, noche a noche, adonde he ido, con su locura. Algún momento de dicha efímera vivido aquí e irrepetible en otras partes los va a acompañar hasta la muerte. ■

*Escritor, autor de numerosos libros de ficción y ensayos, algunos de ellos científicos. Entre sus títulos más notorios se cuentan *La Virgen de los sicarios*, *El desbarrancadero*, *El río del tiempo* (su autobiografía en cinco tomos), *Mi hermano el alcalde* o su gran biografía *Barba-Jacob: el mensajero*. También fue cineasta y es biólogo.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



Desequilibrio externo y desigualdad

por **Mauricio Cabrera Galvis***

Los dos mayores desafíos que enfrenta Colombia son eliminar el cuantioso desequilibrio externo y reducir la gran desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. El déficit fiscal también es un problema, pero es producto de la caída de los ingresos de las exportaciones. Las políticas neoliberales aplicadas a partir de la década de 1990 fueron nefastas.

En el contexto regional, Colombia tiene el dudoso honor de ser el campeón del desequilibrio externo, pues es el país de América Latina con el mayor déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (CCBP), y a la vez de ser el subcampeón suramericano de la desigualdad.

En cuanto al déficit externo, hay dos indicadores que muestran el tamaño del problema: la balanza comercial, es decir la diferencia entre lo que importa y exporta el país, arrojó en 2015 un saldo negativo de 16.000 millones de dólares, equivalente al 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Para tener un punto de referencia, México tuvo un déficit del 1% del PIB y Brasil un superávit de 0,8% del PIB.

Si a este resultado se le agrega el saldo del comercio de servicios, el de los intereses pagados y recibidos del exterior y los dividendos girados a los inversionistas extranjeros, se llega al saldo de la CCBP, que el año pasado fue deficitario en un monto de 6,2% del PIB. Otro récord regional.

En materia de distribución del ingreso, Colombia sigue siendo el segundo país de Suramérica con mayor desigualdad, con un índice Gini de 0,536 [en esta medición, cuanto más cercana es la cifra a 1 mayor desigualdad

expresa], superado tan solo por Brasil, que registra el 0,553 y muy lejos del país con mayor justicia social, que es Uruguay con el 0,383.

El desastre neoliberal

El déficit externo del comercio exterior es preocupante porque en el 2014 había sido de “sólo” 6.300 millones de dólares –un incremento de 153% en un año– y porque desde la Gran Recesión de 1999 Colombia siempre había tenido superávit comercial, con la única excepción del año 2007.

Se intenta explicar el desbalance externo por el derrumbe de los precios del petróleo y del carbón, que en dos años redujeron a la mitad los ingresos por la venta de estos productos, de 39.500 a 18.900 millones de dólares. Pero no son sólo los ingresos por combustibles, porque en el año también disminuyeron las exportaciones del sector agrícola (-5,6%) y las de manufacturas (-11%).

Pero la caída de las exportaciones es sólo la explicación coyuntural del problema. La causa estructural son las políticas de apertura hacia adentro, que desde comienzos de la década de 1990 multiplicaron por trece el valor de las importaciones. Especialmente acelerado fue su crecimiento después de la recesión de 1999, pues desde este año pasaron de 9.991

a 61.088 millones de dólares en 2014. Y todo a costa de la producción nacional.

El modelo de desarrollo implantado en Colombia desde los años 90 del siglo pasado siguió los lineamientos neoliberales de la apertura a ultranza recetada por el llamado Consenso de Washington: para crecer hay que exportar más (hasta ahí todo bien); para que aumenten las exportaciones hay que importar más, y para lograrlo hay que bajar aranceles y quitar todas las barreras que impiden la libre entrada de bienes del exterior.

Colombia aplicó la receta y su economía se ha abierto y globalizado desde que en la década de 1980 la crisis de la deuda latinoamericana obligó al gobierno de Belisario Betancur a una drástica restricción de las importaciones. El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) empezó la apertura comercial eliminando primero la mayoría de los controles directos a las importaciones y planteando un proceso gradual de reducción de los aranceles, pero al mismo tiempo aceleró la devaluación del peso para proteger la producción nacional y estimular las exportaciones. Así generó un superávit en la balanza de pagos del 3,9% del PIB.

La administración de César Gaviria (1990-1994) pisó a fondo el acelerador de la →



Minería. La del carbón es una de las principales actividades extractivas.

→ apertura en dos frentes: de una parte dejó el gradualismo y en un año bajó el arancel promedio del 47% al 12%, y de otra eliminó los controles a los ingresos de capital, lo que produjo una notable revaluación del peso. Como consecuencia, las importaciones se triplicaron y el superávit externo se convirtió en déficit, que llegó a ser del 7,3% del PIB en 1995, pero lo pudo compensar con abundante financiamiento externo, en un caso típico de *prosperidad al debe*.

El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) trató, sin mucho éxito, de cerrar la brecha externa, pero sólo logró disminuirla marginalmente a niveles del 6,3% del PIB, y siguió recibiendo capitales externos para financiarse. Fue en la administración de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) cuando se hizo a la fuerza el ajuste: con la crisis del Sudeste Asiático se cerraron los mercados financieros internacionales y disminuyeron abruptamente los flujos de capital.

La respuesta política del Banco Central fue subir las tasas de interés, en un contexto de excesivo endeudamiento de los hogares y las empresas, lo que produjo la quiebra de los deudores y del sector financiero, y condujo a la Gran Recesión de 1999 (el PIB cayó 5%). El ajuste fue doloroso pero efectivo, pues las importaciones se redujeron al equivalente del 4% del PIB y se logró un pequeño superávit en el comercio de bienes y en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Otro resultado notable del ajuste fue el control de la inflación, que pasó de promediar el 20% anual a rangos del 7% a 8%, y más adelante a sólo el 3%. La contrapartida fue el

aumento del desempleo, que llegó a niveles cercanos al 20% de la fuerza laboral.

Los mercados financieros internacionales se estabilizaron desde los primeros años de los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), lo que permitió volver a los niveles de importaciones de antes de la crisis. Luego, hacia el 2004, empezó la bonanza de los precios del petróleo y otras materias primas que contagiaron al país con la *enfermedad holandesa* [así se denomina a las consecuencias dañinas provocadas por un aumento significativo en los ingresos en divisas de un país], pues el aumento de los ingresos de las exportaciones junto con la equivocada política de estímulos a los ingresos de *capitales golondrina* revaluaron en un 64,5% el peso colombiano respecto del dólar. Las importaciones se cuadruplicaron, y a pesar de los mayores ingresos, la CCBP volvió a saldo negativo del orden del 3% del PIB.

“Apertura hacia adentro”

El primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) profundizó la apertura, pues redujo el arancel promedio al 6,3% y empezó a aplicar tratados de libre comercio que facilitaban el ingreso de bienes de Estados Unidos y Europa. Así, las importaciones llegaron a 61.000 millones de dólares, es decir 12 veces el valor que tenían cuando empezó el proceso de apertura dos décadas atrás.

El grado de apertura de una economía se mide usualmente con la relación entre el comercio exterior (Exportaciones más Importaciones, o $X + M$) y el PIB. Con la apertura de Gaviria el indicador aumentó un poco hasta 1998, pero se desplomó con la Gran Rece-

sión de 1999. Es en el siglo XXI cuando se da un proceso continuo y sostenido de apertura: en 2000 el comercio exterior representaba el 31,5% del PIB, y en 2014 llegó al 45,2%. Pocos países pueden mostrar una apertura tan rápida de sus economías.

Sin embargo, lo que hizo Colombia fue una “apertura hacia adentro”: la primera parte de la receta se cumplió con creces, y las importaciones casi duplicaron su participación en el PIB al pasar de 15,4% a 29,4%. Su crecimiento ni siquiera se frenó con la devaluación de los dos últimos años.

Pero el beneficio esperado de esa apertura sobre las exportaciones nunca llegó; por el contrario, la participación de las exportaciones sobre el PIB se mantuvo prácticamente constante alrededor del 16% en los recientes 15 años, e inclusive disminuyó en 2014 y 2015.

El resultado no ha sido bueno, pues no sólo fracasó la receta de importar más para exportar más, sino que el desequilibrio externo se amplió y el crecimiento se frenó. El ex director de la CEPAL, José Antonio Ocampo, ha mostrado cómo en el período que él denomina de “Industrialización impulsada por el Estado” (1950-1980) el crecimiento del PIB fue mayor y menos volátil que en el período de “Liberalización y Apertura” (1990-2014); aunque la tendencia es general en toda la región, la desaceleración en Colombia fue más pronunciada, al bajar de 5,1% a 3,8%.

Además, la desprotección a la producción nacional, agravada con la funesta revaluación del peso, produjo un proceso de desindustrialización y estancamiento de la agricultura, sectores que hasta el 2013 prácticamente no generaron nuevos empleos y que crecieron mucho menos que el resto de la economía. En efecto, mientras en esa década el PIB aumentó 51%, la producción industrial sólo lo hizo 32% y la agrícola escasamente un 14%.

Ahora que acabó la fiesta de la bonanza petrolera se ha hecho evidente la alta vulnerabilidad externa de Colombia, mayor inclusive que la de otros países con altos ingresos petroleros, como México o Brasil. Hasta ahora no ha habido crisis externa porque a pesar del tamaño de la brecha, ésta ha sido financiada con ingresos de capital por la misma cuantía, e incluso superiores, pero no hay ninguna garantía de que en el futuro continúen flujos de capital de la misma magnitud, e inclusive ya hay signos de que están disminuyendo.

El desafío de la igualdad

La evolución reciente de la situación social en Colombia ha tenido avances y retrocesos. En los años 90 del siglo pasado los efectos ne-

gativos de la apertura hacia adentro sobre la agricultura incrementaron la pobreza rural y ampliaron la brecha de ingresos con la ciudad; asimismo, en la ciudad ampliaron la diferencia entre los ingresos de los profesionales y los trabajadores calificados frente al de los informales, todo lo cual deterioró la distribución del ingreso, elevando el índice Gini urbano de 0,49 hasta 0,57. Sin embargo, el aumento del gasto social impulsado por la nueva Constitución de 1991 contribuyó a disminuir el nivel general de pobreza, hasta que la Gran Recesión de 1999 y el enorme aumento del desempleo llevaron a que la población pobre pasara del 49% al 57%, y los indigentes pasaran del 15% al 25%. Por supuesto, se incrementaron todavía más los índices de desigualdad.

Al salir de la crisis, con la paulatina reducción del desempleo al 11% –que siguió siendo el más alto de Latinoamérica– y el continuo incremento del gasto público social, los indicadores fueron mejorando, de manera que al final de la década pasada (hacia 2010) el porcentaje de pobres se había reducido al 40% y el de indigentes al 15%. No sucedió lo mismo con la desigualdad, pues después de mejorar un poco, para el 2009 el índice Gini había vuelto a 0,57.

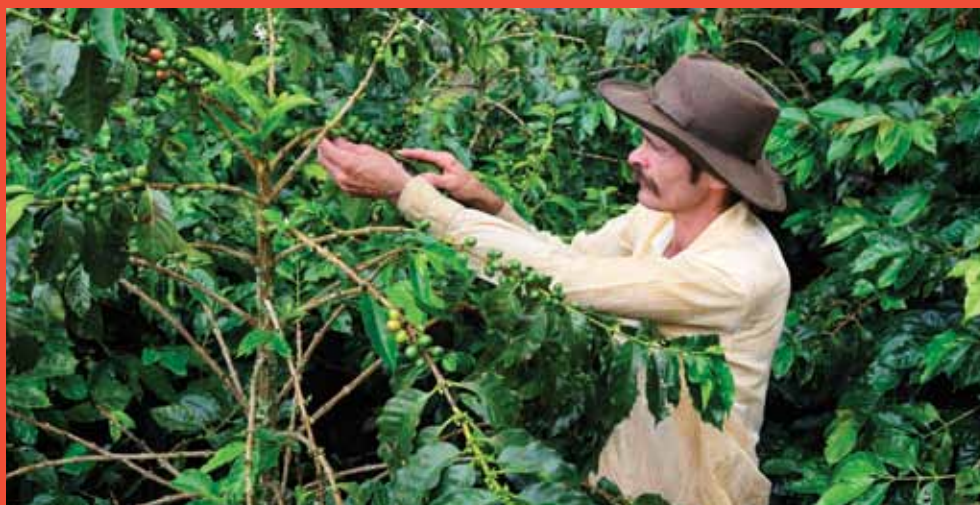
Entre el 2010 y el 2015 hubo significativos avances: 2,8 millones de colombianos consiguieron empleo y la tasa de desempleo bajó a un dígito (8,3%); 4 millones de personas salieron de la situación de pobreza y 2,2 millones de la pobreza extrema o indigencia, con lo cual los índices han disminuido hasta 28,2% y 7,9% de la población respectivamente. También ha mejorado el acceso a los servicios de salud, que hoy llegan al 92,8% de los colombianos.

De hecho, según el Índice de Protección Social elaborado por el ex ministro José Antonio Ocampo, y que mide el acceso a los servicios básicos y el gasto social de los gobiernos, se observa que en la última década todos los países latinoamericanos (con la excepción de Costa Rica) mejoraron la protección social de sus habitantes, pero que Colombia fue el país que registró el mayor avance, aunque partiendo de un nivel muy bajo.

Disparidades escandalosas

A pesar de estos avances, Colombia sigue muy lejos de los niveles de protección social alcanzados por los países del Cono Sur de América Latina, y tiene grandes retos en esta materia. Se pueden mencionar tres de los más importantes.

El primero es disminuir la informalidad en el mercado de trabajo: un millón de los



© Christian Heeb/JA/Corbis/Latinstock

Café. Uno de los productos emblemáticos de Colombia.

nuevos empleos creados en el quinquenio fueron informales. Más aun, del total de trabajadores colombianos, el 58,7% están en la informalidad, es decir que no tienen un contrato de trabajo estable y con prestaciones sociales que correspondan a lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina “trabajo decente”.

El segundo es la ampliación de la cobertura en pensiones. En la actualidad sólo el 35% de los colombianos están afiliados a los sistemas públicos o privados de pensiones, y se estima que apenas una de cada cinco personas podrán llegar a contar con una pensión en su vejez.

Finalmente, Colombia es un país con enormes diferencias regionales: su capital, Bogotá, clasificaría como ciudad del Primer Mundo, y regiones como la Costa Pacífica, tienen niveles de pobreza similares a África subsahariana. Así, por ejemplo, mientras en Bogotá el porcentaje de pobres es de sólo el 10%, en los departamentos de la Costa Atlántica es del 41%, y en la Costa Pacífica es del 50%.

Pero el mayor desafío que enfrenta Colombia en materia social es la reducción de los elevados niveles de concentración del ingreso y de la riqueza. El Plan de Desarrollo del actual gobierno se fija como meta bajar el índice Gini del ingreso de 0,54 a 0,52, y formula estrategias para reducir las grandes disparidades entre las distintas regiones del país.

El Plan es insuficiente, porque reduce sus metas a la distribución del ingreso y no menciona para nada el más grave problema de concentración de la riqueza (tierra, propie-

dad raíz y activos financieros) que es mayor y genera rentas de capital que incrementan la desigualdad en los ingresos.

Dos indicadores muestran la gravedad de la situación. El Gini de la distribución de propiedad de la tierra rural pasó de 0,87 a 0,86, y 2.313 propietarios (el 0,06%) eran dueños del 53.5% de la tierra disponible en Colombia. Más escandalosa aun es la concentración del ahorro financiero, donde, según datos oficiales, 8.500 propietarios son dueños del 77% de los certificados de depósito a término (CDT) en los bancos, y 9.200 son dueños del 65% de los depósitos de ahorro. Como consecuencia, el índice Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes.

Colombia lucha por conquistar la paz y pronto debe lograr que termine el conflicto armado y se silencien los fusiles, pero para construir una paz duradera debe cumplir el aforismo latino: “*Si vis pacem cole iustitiam*”. Si quieres la paz cultiva la justicia. ■

*Economista colombiano y licenciado en Filosofía con amplia experiencia en la dirección de bancos y empresas. Fue alumno distinguido de la London School of Economics. Ha sido alto funcionario del área económica del Estado y profesor universitario. Ha publicado más de medio centenar de artículos técnicos en revistas especializadas y es columnista de Economía en periódicos de Bogotá, Cali, Cartagena y Bucaramanga.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



Un balance de la presidencia de Juan Manuel Santos

Avances, obstáculos, incertidumbres

por Socorro Ramírez*

La siguiente versión abreviada de un artículo publicado en diciembre de 2015 analiza los esfuerzos de la presidencia de Juan Manuel Santos por negociar el fin de la guerra interna y proyectar una imagen de Colombia como país emergente en proceso de cambio. Pero la consolidación de los avances logrados choca con los graves problemas que arrastra el país.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos impulsó negociaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) sobre una posible agenda y sobre las condiciones del eventual establecimiento de la paz. La Mesa de Conversaciones se instaló en Oslo el 18 de octubre de 2012, empezó a funcionar en La Habana un mes después y hasta mediados de 2014 había anunciado tres acuerdos temáticos (agrario, sobre drogas y sobre participación política), el comienzo del desminado humanitario y diez principios sobre reconocimiento de las víctimas.

Vino luego un año de recrudescimiento de la confrontación, hasta que la Mesa anunció, el 12 de julio de 2015, que se acelerarían las negociaciones en Cuba y se desescalarían los combates en Colombia. Un cambio de metodología permitió trabajar en forma simultánea sobre todos los puntos pendientes, las FARC-EP retomaron una tregua que habían abandonado y el Estado cesó los bombardeos en su contra. Dos meses después, el 23 de septiembre de 2015, el presidente Santos y el comandante de las fuerzas guerrilleras, Rodrigo Londoño Echeverri, alias *Timoleón Jiménez* o *Timochenko*, firmaron un comunicado de diez puntos con un arreglo sobre uno de los temas más difíciles –el de la justicia transicional (1)–,

un plazo máximo de seis meses para la firma del fin del conflicto (que se extendería hasta el 23 de marzo de 2016) y dos meses posteriores para dar inicio a la dejación de las armas.

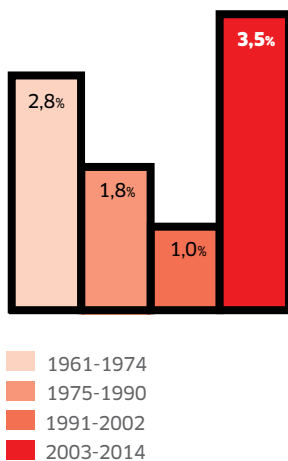
Discrepancias de interpretación

Sin embargo, pronto surgieron divergencias sobre la interpretación del acuerdo, por lo que juristas de ambas partes emprendieron la tarea de precisarlo: cómo y quién escoge los jueces de los tribunales especiales, qué delitos conexos a la rebelión pueden ser objeto de amnistía, a qué actores se les aplicará perdón o sanción –sólo a guerrilleros y miembros del Estado, o también a paramilitares y otros sectores involucrados en la confrontación– y cómo será la restricción de la libertad en los casos de condena.

La percepción de estar cerca del final de las negociaciones se reactivó en octubre de 2015 gracias a dos anuncios. El primero, el acuerdo de la Mesa para crear una unidad de búsqueda de desaparecidos y para ubicar, identificar y entregar sus restos con ayuda de la Cruz Roja y Medicina Legal. Luego, Santos anunció gestiones para que pronto el Consejo de Seguridad de la ONU le pidiera a la entidad verificar un cese bilateral y definitivo del fuego, que comenzaría en 2016, y las FARC-EP solicitaron que éste empezara el 16 de diciembre de 2015. →

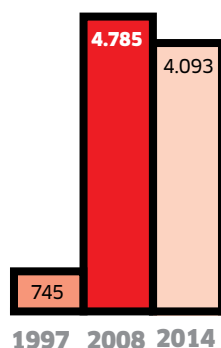
Evolución del PIB

(promedio anual, por períodos)



Remesas

(en millones de dólares)



→ Para lograr esa meta, la Mesa de La Habana debía terminar en dos meses los acuerdos sobre víctimas y justicia transicional, y sobre un cese del fuego bilateral con concentración guerrillera en zonas delimitadas que permitiera realizar una verificación internacional. Mientras tanto, el Congreso debatía sobre la forma de referendar los acuerdos (el gobierno proponía un plebiscito mientras que las FARC-EP y el ex presidente Álvaro Uribe postulaban una Asamblea Constituyente) y posteriormente implementarlos.

Por otra parte, se enturbiaba la posibilidad de que las negociaciones anunciadas por el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –la otra fuerza guerrillera– confluyeran con las de las FARC-EP. Las acciones de este grupo mostraron que, o bien se encontraba internamente dividido, o no había comprendido que con ellas no fortalecía su posición. Sin embargo, a fines de marzo de 2016 el panorama se aclaró, cuando el gobierno y el ELN anunciaron la inminente apertura de una mesa de diálogo para formalizar las conversaciones de paz, con nexos de coordinación con las negociaciones con las FARC.

Enfrentamientos por la paz

Las negociaciones con la guerrilla han desatado intensos forcejeos suscitados por al menos cuatro factores: los vaivenes del proceso, el fuerte rechazo nacional a las FARC-EP, la oposición radical de Uribe y el enfrentamiento institucional entre el procurador general, Alejandro Ordóñez, opuesto al acuerdo, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, favorable a él, ambos convertidos en protagonistas políticos.

Esa dura y permanente batalla, junto con las vacilaciones y contradicciones de Santos, han hecho fluctuar la opinión nacional. Al inicio de las conversaciones reinó una incierta expectativa, pero el primer cese del fuego decretado por las FARC-EP aumentó un apoyo que, luego, con el reinicio de los combates, volvió a mermar. Lo que sí se mantuvo estable es el resentimiento de la opinión pública hacia la guerrilla. La mayoría de los encuestados reiteró que tenían que dejar las armas, y no aceptaba que se les hicieran grandes concesiones; pedía más castigo que verdad, y estaba en desacuerdo con que pagaran penas que excluyeran la prisión. Un 80% de los encuestados afirmó que no quería ver a los líderes guerrilleros como legisladores en el Congreso.

Empero, los anuncios de los últimos meses de 2015 hicieron repuntar el respaldo al proceso de paz. Una medición de esa época mostró que un 79% de los encuestados lo veía con optimismo, un 81% pensaba que la paz mejoraría la situación del país, 65% confiaba en que las negociaciones culminarían con éxito y 61% sentía que el acompañamiento internacional las hacía más confiables.

A la pregunta: “Si de usted dependiera la aprobación del acuerdo, ¿lo aprobaría?”, el 79% dijo sí y un 14%, no (2). Curiosamente, subió la opinión favorable tanto sobre Santos (de 29% a 42%) como sobre Uri-

be, quien aprovecha cada dificultad o cada avance del proceso para multiplicar sus reparos (51% afirma estar de acuerdo con sus cuestionamientos a las negociaciones). Sin embargo, en las recientes elecciones, el ex presidente no logró convertir esa opinión en votos.

Polarización y deterioro de la política

El sistema político colombiano muestra una polarización y un deterioro agudos. La polarización en torno de las conversaciones con la guerrilla marcó las elecciones presidenciales de 2014: la primera vuelta la ganó un uribismo contrario a cualquier acercamiento con las FARC-EP –encabezado por Oscar Iván Zuluaga–, y en la segunda resultó reelegido Santos por la bandera de la paz. No ocurrió lo mismo en las elecciones locales del 25 de octubre de 2015. Uribe trató de convertirlas en plebiscito contra las negociaciones, pero los votos respondieron a otras problemáticas, a pesar de que los elegidos serían decisivos en la aplicación de los acuerdos de paz.

Esa clase de elecciones –en las que se escoge a responsables para cinco tipos de cargos: 32 gobernadores, 418 diputados a las asambleas departamentales, 1.101 alcaldes y 12.065 concejeros municipales, además de 6.700 ediles de juntas administradoras locales– tiene una lógica distinta de las presidenciales y legislativas. Y el que en ellas participaran 127.347 candidatos de todos los partidos políticos, de minorías étnicas y religiosas, de movimientos cívicos o independientes, podría mostrarlas como una perfecta competencia pluripartidista. Pero la realidad es más compleja.

La Misión de Observación Electoral y la Fundación Paz y Reconciliación denunciaron 152 casos de alianzas entre candidatos y personas condenadas o encarceladas por nexos con parapolíticos y mafias del narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la contratación pública amañada; esos candidatos recibieron el aval de los partidos con la excusa de que no afrontaban directamente procesos judiciales o disciplinarios (3). Los medios de comunicación presionaron en contra de esos avales y la Fiscalía ordenó la captura de 44 de los candidatos. Sin embargo, un 60% de los postulantes cuestionados resultó elegido (4), algunos de ellos en regiones en las que se concentra la confrontación armada, cercanas a Venezuela.

El oficialismo triunfó, aunque se resquebrajó su punto de apoyo, el Acuerdo Unidad Nacional, que nuclea a varios partidos, y la abstención alcanzó un 41% del padrón electoral. En perspectiva de las presidenciales de 2018, Germán Vargas Lleras, actual vicepresidente y responsable de programas estatales populares –viviendas gratuitas, provisión de agua, construcción de vías y puentes– resultó uno de los ganadores y aseguró una maquinaria a través de los pactos de su partido, Cambio Radical, con algunos independientes elegidos en grandes capitales y con otros personajes cuestionados que articulan amplias clientelas. Los demás partidos que forman parte del gobierno (el Liberal y el Partido de la U) lograron la

mayoría de los votos avalando tanto a candidatos decentes como cuestionados. Los Verdes obtuvieron tres gobernaciones y la alcaldía de una capital de departamento. Verdes y conservadores aventajaron al Centro Democrático de Uribe, que ganó sólo una gobernación, 76 alcaldías en pequeños municipios, quedó sexto en votos para concejos y asambleas y perdió en Antioquia, la región del ex presidente. La popularidad de Uribe no es endosable y su cerril obstruccionismo lo perjudica. La izquierda, por su parte, fue derrotada en Bogotá luego de 12 años de gobierno y sólo obtuvo la alcaldía de una pequeña capital.

Los graves problemas del sistema electoral se hicieron más visibles en estos comicios y el Estado no aprovechó suficientemente la oportunidad para combatirlos. Aunque para evitar el transfuguismo el Consejo Electoral anuló 42% de las inscripciones para cambio de sitio de votación, tuvo que revertir la medida en Bogotá y no respondió consultas sobre inhabilidades de los candidatos ni vigiló los dineros legales e ilegales que abundaron en las campañas.

Los partidos se han reducido a siglas que reclutan candidatos para mantener su personería jurídica, la financiación y el acceso a la publicidad. Avalan aspirantes según los votos que puedan aportar, y no les proveen de identidad, ideas y credibilidad porque ellos mismos no las tienen. Cada aspirante trata de montar su maquinaria para captar votos, y si no obtiene el aval pero tiene prensa y dinero, sale a buscar firmas para registrarse como independiente. Así lo intentaron 810 “comités promotores”, de los cuales 265 lograron inscribir a su postulante. Los candidatos se diferencian por los rostros, no por sus tesis o programas, lo que hace imposible saber si son “independientes, cívicos, alternativos, políticos en apuros, tráfugas, oportunistas o pescadores de incautos”. De todos modos, cinco o seis partidos (el de Uribe, que parece el más “ideológico” pero es el más caudillista, la coalición de izquierda y la oficialista Unidad Nacional) captan el 80% de la votación en coaliciones, y en ellos predominan el clientelismo y el personalismo. Como señala el director de *Razonpublica.com*, hay espacio suficiente para que las mafias que controlan regiones y barriadas “se vistan de políticos y accedan al corazón del Estado” (5).

En suma, a pesar del deterioro general del sistema político colombiano, el gobierno de Santos ha logrado en estos cinco años el mayor avance en el intento de solución política del conflicto armado y ha ido ganando apoyo nacional en esa empresa. No obstante, quedan asuntos cruciales por resolver y problemas del sistema político que obstaculizan la construcción de la paz, en especial en zonas fronterizas.

Apoyo internacional

A diferencia del fuerte enfrentamiento interno, la negociación con las guerrillas ha contado con un pronto respaldo internacional. En septiembre pasado así lo expresaron los presidentes en la Asamblea de la



Álvaro Uribe. Tenaz opositor a las negociaciones de paz.

ONU, el papa Francisco y editoriales de periódicos en Estados Unidos, Europa y América Latina. Lo reiteran los gobiernos directamente implicados en la Mesa de La Habana –los países garantes (Noruega y Cuba), los acompañantes (Venezuela y Chile) y los asesores (Uruguay, con la ONU, ayuda a la comisión sobre cese del fuego y dejación de armas)– y los enviados especiales de Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea; igual sucede con los países que han servido de sede en la exploración de una agenda de negociación con el ELN (Ecuador, Brasil y Venezuela).

Ese respaldo puede ser leído como un reconocimiento a los esfuerzos por cambiar de parte de una Colombia que, bajo el presidente Álvaro Uribe, era vista como un país perturbador y foco de problemas para la región. Así lo resaltó el propio Santos al hacer un balance de su primer gobierno: “A Colombia la están escuchando, la están viendo como una democracia fulgurante en lugar de un país paria y aislado del mundo” (6). El cambio se ha visto favorecido por la normalización de las relaciones de vecindad, el involucramiento en dinámicas latinoamericanas y caribeñas, la ampliación de nexos con distintos actores internacionales y el despliegue de iniciativas en temas cruciales de la agenda global. ■

1. “Justicia transicional: el nudo del proceso de paz”, *Semana*, 23/09/2015.
2. “Los colombianos dicen sí a la paz”, *Razón Pública*, 12/10/2015.
3. León Valencia, “Las últimas elecciones en medio de la guerra”, *Semana*, 17/10/2015, y “Los partidos y el Consejo Electoral al desnudo”, *Semana*, 18/7/2015.
4. Ariel Ávila Martínez, “Resultado de las elecciones y mapa del 2018”, *Las 2 orillas*, 27/10/2015.
5. “Los avales y las firmas: ¿qué pasa con los partidos?”, *Razón Pública*, 3/8/2015; Hernando Gómez Buendía: “El voto inútil”, *El Espectador*, 16/10/2015.
6. Socorro Ramírez, “Política exterior: ¿imagen o realidad?”, *Razón Pública*, 14/1/2013.

*Doctora en Ciencia Política. Fue profesora en la Universidad Nacional de Colombia y coordinadora del Grupo Académico Colombia-Venezuela y de los programas andino-brasileño y Colombia-Ecuador.

TIEMPOS TURBULENTOS

1839-1842

Contienda

Guerra civil de “los Supremos”. Varias provincias se rebelan contra el gobierno central.

1851-1901

Guerra sin fin

Con intermitencias, durante más de medio siglo se registra un período de guerras civiles. Se agudiza el enfrentamiento entre librecambistas y proteccionistas que defienden a las pequeñas industrias nacionales.

1903

Pérdida

3 de noviembre. Promovido por Estados Unidos, Panamá se separa de Colombia y declara la República.

1948

Estallido

9 de abril. Es asesinado el líder liberal de izquierda Jorge Eliécer Gaitán, lo que desata “el Bogotazo”, espontánea insurrección popular que termina con más de 3.000 muertos.





Tierras robadas, héroes sin rostro y escuelas fragmentadas

Las fronteras de la sociedad

por José Luis Novoa S.*

Colombia es uno de los CIVETS, una nueva sigla para referirse al grupo “emergente” integrado por esta nación andino-caribeña junto con Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Sin embargo, detrás de esta imagen atractiva para las inversiones extranjeras perviven crónicas desigualdades mezcladas con atroces violencias que remiten a la época colonial y poscolonial.

Es carnaval en Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano. Fines de febrero de 2012. La mayor fiesta popular en uno de los países más felices del mundo, según dicen distintos estudios, está llegando a su punto máximo. En la Batalla de Flores, sábado en la tarde, desfilan comparsas de marimondas, monocucos, garabatos, toritos, negritas Puloy y tantos otros de los coloridos disfraces que hacen parte de la tradición. En las Marimondas de Barrio Abajo desfilan grandes empresarios de la ciudad junto a amas de casa, algún desempleado y cientos de personas del común, todos bajo el mismo antifaz de rasgos de elefante y con las mismas ropas de colores neón que pretenden desde hace más de un siglo subvertir por unos días el orden de todos los días. Los actores de las telenovelas más vistas desfilan en carrozas montadas sobre camiones, apenas a unos metros de las manos de quienes los siguen cada noche en la televisión. Un Quico improvisado desfila con una comparsa variopinta y posa decenas de veces junto a niños que creen que están frente al ídolo de verdad, el que aparece en televisión desde que sus padres también eran niños. Toda una estampa de felicidad nacional, de unidad en la diferencia, un poco de *melting pot* estadounidense, de *miscigenação* brasileña. ¿Será cierta tanta belleza? Esa tarde de brisa fresca con sus gentes de fiesta, ¿es una metáfora de lo que está pasando en el país? ¿O justamente, como metáfora, es sólo eso, un momento de placer y brisa suave en medio del calor persistente de todo el año, un carnaval que en el fondo confirma el *statu quo*?

Una estructura colonial

Una mirada más detallada deja ver las costuras. Los palcos de la derecha, más altos y organizados, tienen escaños para al menos diez filas de cientos de personas; en las partes bajas hay baños portátiles, venta de cerveza y comestibles al doble del precio usual, guardianes a la entrada y, en algunos casos, bandas musicales de respaldo para subir el ánimo cuando decaen las presentaciones que van por la calle.

Esos son territorios de las clases media y alta. La entrada está por encima de los 35 dólares por persona. También de ese lado hay palcos especiales, patrocinados por empresas privadas, con meseros, whisky y licores de calidad para el que quiera y cuanto quiera, gratis. En ambos lugares se puede ver al poder colombiano, a empresarios, líderes y políticos que se dejan fotografiar por quien lo desee. En los últimos años el carnaval se ha ido convirtiendo en un evento social por sí mismo, cuando por muchas décadas fue considerado una fiesta esencialmente plebeya. Tanto, que muchos barranquilleros de clase alta les huían como a la peste a esos días de harina en la cara y cerveza en la mano.

A mano izquierda están los palcos más populares: tarimas bajas de tres escalones, sin guardias a la entrada, sin sitios de comida, salvo algún vendedor ambulante de papas y plátanos fritos. El baño, si lo tienes a la mano, es algún matorral de los que se extienden entre ésta, la Vía 40, plena de recintos industriales, y el Magdalena, el gran río, la columna fluvial por la que ha transcurrido buena parte de la historia co- →

EL IMPACTO DEL PLAN COLOMBIA

Drogas y geopolítica

por Carlos Alfieri

El denominado, abreviadamente, Plan Colombia, comenzó a pergeñarse en 1998 durante las presidencias de William Clinton en Estados Unidos y Andrés Pastrana Arango en Colombia, y consistía en un acuerdo entre ambos países con los objetivos declarados de combatir el cultivo, elaboración y tráfico de drogas ilegales, promover el desarrollo socio-económico colombiano y propiciar la finalización del prolongado conflicto armado con las formaciones guerrilleras. En la práctica, y con el mayor vigor en los mandatos de George W. Bush (2001-2009) y Álvaro Uribe (2002-2010), el eje de este programa fue geopolítico y militar: el fortalecimiento del ejército colombiano y el aumento de la influencia y presencia estadounidenses en el país para contribuir a la lucha contra lo que se dio en llamar “narcoterrorismo” o “narcoguerrilla”. Tanto fue así, que las Fuerzas Armadas de Colombia se convirtieron en el tercer receptor mundial de ayuda militar de EE.UU., después de Israel y Egipto, y lograron un crecimiento y modernización notables. Washington invirtió entre los años 2000 y 2016 alrededor de 10.000 millones de dólares en el Plan Colombia; en su transcurso, incrementó el número de efectivos en territorio colombiano, en donde disponía de siete bases militares, y se multiplicó la creación de grupos paramilitares para combatir la guerrilla, una táctica que había sido defendida por el general Barry McCaffery, ex comandante en jefe de las fuerzas militares de EE.UU. en América del Sur.

El aporte norteamericano se tradujo en importantes avances del ejército colombiano sobre la guerrilla, cuyo poderío fue debilitado notoriamente, aunque nunca hasta el punto de posibilitar su liquidación. En cuanto al narcotráfico, éste no desapareció sino que se transformó. En el marco del Plan Colombia se irrigaron 1,6 millones de hectáreas con glifosato (sustancia probablemente cancerígena) para intentar erradicar plantaciones de coca; sin embargo, en 2014, Colombia registró un incremento de la superficie cultivada de 48.000 a 69.000 hectáreas. En 2015, las fuerzas de seguridad incautaron una cantidad récord de cocaína: 252 toneladas. Por otra parte, en particular durante los primeros años de dicho Plan, aumentaron las acciones de los grupos paramilitares y las atrocidades cometidas contra la población civil, a la vez que el número de habitantes desplazados por los enfrentamientos entre los bandos en pugna. A lo largo de los años, no obstante, fue disminuyendo drásticamente la cantidad de secuestros, homicidios y masacres cometidos en el territorio nacional.

→ lombiana desde antes de ser país, desde la Conquista española. El río y su territorio, en el que se hunden algunas de las raíces más viejas que explican la desigualdad secular en una nación que hoy es una de las promesas para el capital internacional; uno de los CIVETS, la más reciente denominación de los analistas económicos para referirse a un grupo de países en ascenso: Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica.

El carnaval es una buena manera de comenzar a desenredar esta historia. La de un país desigual como pocos en el mundo, que quiere salir del llamado Tercer Mundo –siguiendo la senda de Brasil o Chile–, pero manteniendo intacta en la práctica la estructura de poder social que tiene rasgos de la época colonial, desde donde se explican buena parte de los males actuales.

El despojo de la tierra

La historia de Colombia puede contarse como la historia del despojo de la tierra. Del despojo de la tierra por parte de los españoles, y luego de los criollos, a los indígenas; luego, de los colonos al Estado; de los terratenientes a los colonos; de los narcotraficantes y las guerrillas a los indígenas, negros y colonos; de muchos terratenientes ayudados por notarios corruptos, frente a todo aquel contra el que pudieran; de empresarios agrícolas y ganaderos aliados con los demás despojadores contra todos los despojados. Hay todas las posibilidades, documentadas, contadas, con las evidencias abiertas, con la feroz realidad de millones de colombianos forzados a migrar del campo a las ciudades por grupos armados que llegaron a unos extremos de horror que aún nos duele contar y que quizás se resuman –para no enumerar la sangre y las heridas– en la cabeza de una víctima que es pateada por los asesinos como pelota de fútbol ante la vista inerme y aterrorizada de los que quedaron vivos, como sucedió en la masacre de Mapiripán, entre el 17 y el 20 de julio de 1997.

Cada vez queda más claro, por investigaciones periodísticas como las que revela cotidianamente el sitio web *Verdad Abierta*, que detrás de la lucha antiguerrillera emprendida desde los años 80 por escuadrones paramilitares –que llegaron a reunir a políticos de calado nacional para “refundar” la Patria– lo que había era un esquema sistemático de robo de tierras, que en muchos casos fueron destinadas a plantaciones agroindustriales. Lo del combate contra los abusos de la guerrilla, que dio origen a muchos de esos grupos, se convirtió luego en la tapadera perfecta para encargarse del narcotráfico y del expolio de tierras, fenómenos que vinieron de la mano desde entonces.

Ese ha sido el penúltimo capítulo de la larga historia en la que la mayoría de académicos y analistas cifran la causa histórica más profunda que explica la desigualdad y la pobreza en Colombia. Vengan del espectro político o social de donde vengan, todas las propuestas para lograr una paz duradera, en una

nación que apenas si ha gozado de breves ráfagas de tranquilidad en su historia republicana, pasan por el asunto de la propiedad agraria como requisito indispensable para pensar en un país con justicia social.

El inicio de una historia de la revista *Semana* resume un caso arquetípico: “Conseguir su finca de 17 hectáreas ha sido una hazaña para Eric Vides, un campesino sucreño de unos 70 años. En los años 60, con la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, se hizo con otros campesinos de una tierra, pero los quisieron matar. Pasaron 20 años para que otro gobierno, el de Virgilio Barco con el Plan Nacional de Rehabilitación, se la titulara colectivamente. El año pasado [2009] pagó al Incoder 400.000 pesos para legalizar su propiedad individual, pero no le han salido los papeles y ahora unos cachacos quieren comprarle su tierra por nada” (1).

“Ser despojado o no tener tierra se consolidó desde la Colonia como una desventaja fundamental, como una forma de discriminación”, explica Augusto Gómez, profesor de Antropología de la Universidad Nacional y uno de los académicos que más han rastreado el tema por fuera de las medidas econométricas (2).

Con todo, las cifras son en sí mismas elocuentes. El índice de Gini –que mide la desigualdad en los ingresos de una sociedad, en donde 0 es el escenario ideal en el que todos obtienen más o menos lo mismo y 1, el nivel extremo en el que unos pocos lo tienen casi todo– marca un indicador de 0,58 para Colombia, una de las peores cifras en América Latina, apenas superada por países como Haití o Brasil, según el período que se tome como referencia. Es decir, somos uno de los países más desiguales en la región más desigual del mundo. La riqueza está tan mal repartida en América Latina que aun los países con “mejor” equilibrio en su índice de Gini tienen un peor reparto que las naciones que ocupan las escalas más bajas en Europa. Pues bien, el índice de Gini para el sector rural en Colombia llega a 0,87. Es decir, lo que debería ser el indicador para una sociedad feudal de los siglos XII o XIII en Europa.

Cuatro millones de “desplazados”

Eso, traducido en personas de carne y hueso, explica los hasta cuatro millones de “desplazados”, como llamamos en Colombia a quienes en las últimas décadas fueron expulsados en forma violenta desde el campo hacia los núcleos urbanos. Usualmente se integran a las ciudades a las que llegan, engrosan los barrios suburbanos y entran en un ciclo de economía informal que resulta difícil superar, al menos para la primera generación. Aun así, con la dificultad de subsistir, muchos prefieren seguir siendo pobres en la ciudad que ser pobres en el campo, y una vez instalados y con alguna posibilidad de ingreso, así sea frágil, lo piensan más de dos veces antes de intentar el regreso.

El gobierno de Juan Manuel Santos, elegido en 2010 [y que sería reelegido en 2014], tiene como uno



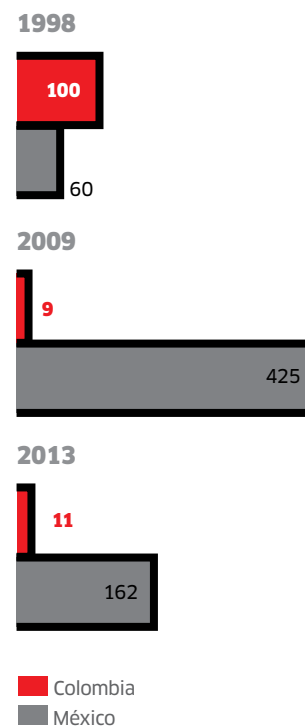
©Adam Woolfitt/Corbis/Latinstock

Niños trabajadores. Un niño manipula fibras de sisal. Son muchos los hijos de campesinos que no concurren a la escuela por tener que ayudar en el trabajo a su familia.

de sus proyectos bandera la restitución de tierras, oportunidades y dignidad a esa población desplazada, que si se juntara podría disputar por ser una de las diez ciudades más grandes de América Latina. La primera meta, la devolución de las tierras despojadas, va sufriendo ya los primeros tropiezos en su implementación (trabas en la justicia, vacíos legales, intereses cruzados, etc.), pero sobre todo, el fantasma que más amenaza es el de la violencia, pues persisten los asesinatos de líderes sociales en la lucha por la tierra. La Defensoría del Pueblo estatal reveló que entre 2006 y 2011 ocurrieron al menos 71 asesinatos de líderes de procesos de restitución de tierras en 14 departamentos del país (3).

Sobre el modelo nacional para gestionar la tierra cultivable y sus riquezas, poco se ha avanzado. Por un lado, se está incentivando, como en buena parte de América Latina, la explotación de los recursos naturales primarios, lo que está generando un incremento en los ingresos del Estado. Por otro lado, de los más de 20 millones de hectáreas potencialmente cultivables, sólo se dedican unos 5 millones a la agricultura. Según cifras oficiales, la ganadería ocupa hoy más de 38 millones de hectáreas. Es decir, por cada hectárea agrícola, que tiende a generar más empleo, hay ocho hectáreas dedicadas a la ganadería, sustento básico de un modelo de propiedad de tierras que está en la base misma de la desigualdad nacional. El columnista Andrés Hoyos lo expresó recientemente así en *El Espectador*: “Si apenas se desarrollara la mitad de la tierra disponible [...] sería posible reducir el desempleo y el subempleo a la mitad. Dicho de otro modo, existe un colosal instrumento para generar millo-→

Producción de opio (secado al horno, en toneladas)



Barranquilla

Por el papel estratégico que desempeña su puerto en el intercambio comercial, la ciudad de Barranquilla, en la costa del mar Caribe, es conocida como “la Puerta de oro de Colombia”. Pero además de su intenso auge económico es, según el estudio ONU Hábitat, la urbe que más ha avanzado en el país en la reducción de la pobreza e inequidad.

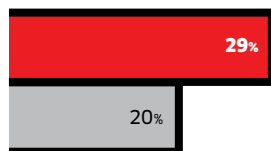


© Jeremy Horner/Corbis/Latinstock

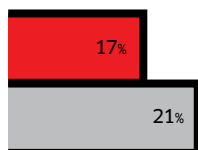
Sacrificio. Recogiendo café en una plantación de Armenia, Colombia. Hombres, mujeres y niños se ven obligados a realizar una labor muy esforzada para sobrevivir.

Industria y agricultura (como porcentaje del PIB)

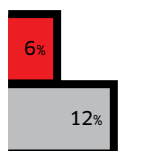
1965



1990



2014



■ Agricultura
■ Industria

→ nes de puestos de trabajo que no se usa. De ñapa [yapa], sus propietarios pagan por no usarlo unos impuestos ridículos” (4).

Una porción sustancial de la música propia del carnaval proviene de las poblaciones ribereñas del río Magdalena, la columna líquida del país. Buena parte de quienes vienen a la fiesta grande sufrieron la violencia en carne propia o en la de sus familiares. Casi todos llevan al menos un muerto triste en sus oraciones. Aun así, siguen cantando y tocando la flauta de millo o la tambora en las grandes comparsas de esta Batalla de Flores, como se llama el desfile del sábado. Al mismo tiempo, dueños de muchas de esas tierras usurpadas también vienen al carnaval y algunos, incluso, desfilan.

Un rostro para el héroe negro

Barranquilla, con sus dos millones de habitantes, es un fenómeno urbano relativamente reciente: tiene algo más de un siglo como puntal del comercio en el Caribe, a partir de la creación de un puerto cerca de la desembocadura del río Magdalena. Tiene fama de activa, bullanguera y cuna de las movidas culturales más interesantes de la región. A 90 minutos en automóvil está Cartagena, la “ciudad inmóvil”, como la describe Efraín Medina, uno de sus escritores contemporáneos. Por allí entraron los barcos negreros de la Colonia, y en su Plaza de la Aduana se vendían los esclavos que habían sobrevivido a la feroz travesía desde la costa occidental de África. Buena parte de la comunidad afrodescendiente de Colombia habrá tenido al menos un ancestro que pisó esa plaza.

Desde entonces se configuró en esta ciudad el esquema social, persistente aún, de una minoría blanca o con muy poco mestizaje dictando los modos y maneras y manteniendo la estructura social por encima de una mayoría negra. El parecido con Sudáfrica no es una coincidencia.

Julieta Lemaitre, una bloguera oriunda de Cartagena, recuerda que “cuando vivía en Cartagena, en los años 80, había un gesto terrible que espero haya caído en desuso: era frotarse levemente la piel del dorso de la mano con el índice del otro mientras se indicaba, con una expresión entre el humor y el desprecio, que la persona de la cual se hablaba era negra” (5). En los últimos años ha habido demandas contra bares y restaurantes por no dejar ingresar a personas de raza negra sobre cuya vestimenta y actitud no podría haber reparo alguno que sirviera de excusa para negarles la entrada. Por estos días [año 2012] ha habido una polémica nacional por el uso de la imagen de un hombre negro, encadenado como en los viejos tiempos coloniales, como una representación de la ciudad. ¿En una asamblea internacional de turismo!

Un repaso a vuelo de pájaro deja ver que en las zonas de clase alta los negros son los que llevan uniformes: niñeras, aseadoras, vigilantes, etc. En los barrios populares, la inmensa mayoría de la población es negra o mulata. Sin embargo, no hay negros en la historia oficial de Cartagena. No había. Del único de ellos cuyo nombre pervivió, no había ni siquiera un retrato. En el Camellón de los Mártires, la bisagra que une la vieja ciudad amurallada con Getsemaní, el arrabal de los esclavos, hay dos hileras de bustos de

hombres blancos, héroes de la Patria –y también esclavistas– pero no de Pedro Romero, el héroe negro sin rostro. Esa ausencia motivó hace un par de años la creación de un colectivo de artistas que se hizo una pregunta simple: ¿Por qué no hay representaciones claras de los líderes negros e indígenas que lucharon por la independencia en nuestra ciudad? Entonces nació Pedro Romero Vive Aquí.

El colectivo descubrió que, en su momento, el Concejo de la ciudad había boicoteado la construcción de un busto de Pedro Romero y que, a cambio, había accedido a hacer un homenaje a un herrero, el oficio de Romero. Donde debió existir un héroe negro, se puso a un herrero blanco. Y un poco más lejos de los bustos del Camellón de los Mártires. Los artistas hallaron además que hace algún tiempo se hizo un busto de Pedro Romero con un rostro inventado, pues, como está dicho, sus rasgos se perdieron en la historia o acaso nunca fueron plasmados en un lienzo o en un papel. La estatua era de fibra de vidrio, no de bronce o mármol, como el material de los demás bustos eternos. De hecho, se rompió y la reemplazaron por otra. El pintor Alejandro Obregón posó para ser el rostro de Romero, intentando reivindicar esa ausencia, y ese busto en alguna parte está, pero aún no aparece. La historia de esas estatuas fallidas les pareció a los artistas toda una metáfora de la construcción de las imágenes de la ciudad y de sus gentes.

Pasaron a la acción: les pusieron pelucas afro a los orondos bustos de los héroes blancos; produjeron un video del himno de la ciudad que le rehuyó a la acuarela bucólica que tantos tienen en mente y la pobló de niños y niñas negros, de habitantes de los barrios, de la gente cotidiana haciendo sus cosas; documentaron el fin de uno de los comedores populares, que debió cerrarse para abrirle paso al espacio peatonal; al logo estilizado de la ciudad, contratado con un estudio creativo foráneo, le opusieron un logo hecho por Runner, el mismo artista popular que hace los avisos con que los autobuses anuncian sus rutas. Pero sobre todo, le pusieron rostro a Pedro Romero y, por esa vía, están intentando recuperar para los cartageneros su propia cara: cientos de personas, en cuatro versiones del evento, crearon en una calle de Getsemaní su propia visión de ese héroe negro, cada uno con su retrato: los hay mulatos, de rostro rastafari, al carboncillo, gordo y de medio lado, desnudo y de espaldas...

Uno de los principales promotores de Pedro Romero Vive Aquí es Jhon Narváez, un realizador audiovisual joven, negro y de los barrios populares, tres características que no van bien con lo que se estilaba en la ciudad amurallada. “Hay una minoría en crecimiento, que se asume negra y que asume de manera más abierta la discusión y la lucha frente al tema. Eso es positivo, indiscutiblemente. Pero como pueblo cartagenero nos hace falta hacer el duelo por lo que hemos sufrido por siglos, ya no damos todos el tema por visto, queremos afrontarlo para sanar”,



© Kobby Dagan/Corbis/Latinstock

Carnaval. Un grupo de participantes en el famoso carnaval de Barranquilla, donde por unos días se crea la ilusión de que la tajante división de clases sociales desaparece.

dice en una entrevista (6). “El racismo continúa en Cartagena de todas las formas, todos los días. De manera sutil en las relaciones personales y de manera más abierta en la prensa, en la publicidad y, en general, en la representación que se hace de nosotros en la televisión, por ejemplo, o en cómo se vende una ciudad turística”, continúa. A pesar de que los avances de algunos grupos y colectivos como el suyo “son significativos”, al mismo tiempo cree que “no son suficientes porque el público en el que influyen es limitado”.

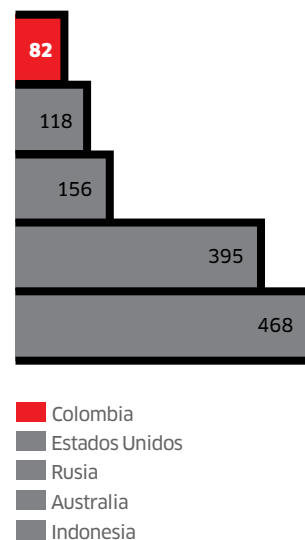
Su definición de las consecuencias de tener un color más oscuro de piel en Cartagena se puede calcar, perfectamente, al resto del país: “Ser negro y ser pobre es una relación naturalizada y perpetuada por el Estado y la sociedad. En el barrio, en el colegio, en la familia. Más allá de la cultura, cualquier cosa que eso sea, el racismo está en la costumbre” (7).

Una educación privada... de calidad

Bogotá, con unos ocho millones de habitantes, es en sentido estricto una ciudad mediterránea. Está rodeada de tierras por todos lados. El océano Atlántico le queda al menos a 18 horas de carretera. La planicie andina donde está ubicada, a más de 2.600 metros de altura, está situada en la cordillera oriental, con lo que la llegada de mercancías hacia y desde el océano Pacífico implica remontar tres cadenas montañosas. Aun así, por razones de centralismo histórico, es el principal motor económico del país, al que le aporta la cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB). Junto con Medellín, la segunda ciu-→

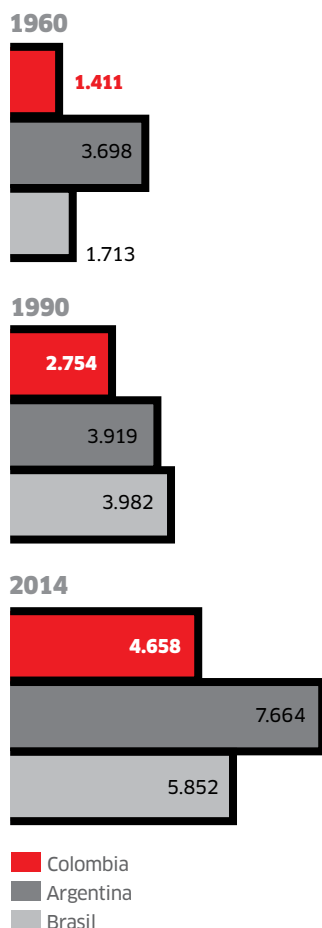
Principales exportadores de carbón

(millones de toneladas, 2013)



PIB per cápita

(dólares constantes de 2005)



→ dad del país, también enclavada entre montañas, es la urbe que más le ha apostado en la última década a la educación como motor de igualdad.

Para Paola Valderrama, una de las dos asesoras del secretario de Educación de Bogotá, el principal problema del país respecto de la desigualdad es la brecha entre educación pública y privada: “Desde ahí ya tienes un ciudadano de primera o de segunda categoría”. Esto es: si en el colegio privado de calidad te ofrecen clases de música, gimnasia, artes e inglés en una jornada que va hasta las tres o cuatro de la tarde, y en el colegio público sólo te dan “clases”, y esto únicamente hasta el mediodía, ya de entrada “están condicionadas tus oportunidades” para salir adelante. Y desde el comienzo se nota la diferencia: “Si comparas a un niño de jardín de un colegio privado con otro de un colegio público, es común que encuentres mejor psicomotricidad, más desarrollo en el habla, una expresión oral mejor elaborada en uno que en el otro”, dice (8).

El problema, ahora, entonces, no es de acceso sino de calidad, y del imaginario sobre lo público y lo privado. Una de las cosas que más han sorprendido al equipo que comenzó funciones en enero pasado –tras la elección del izquierdista Gustavo Petro como alcalde– es que hay unos 150.000 niños de estratos 1 y 2 (los rangos más bajos de la clasificación socioeconómica de seis niveles que se usa para diversos propósitos en Colombia) que asisten a colegios privados. Esto, en momentos en que hay más de 50.000 cupos escolares sin utilizar en la ciudad.

¿Por qué razón un pobre prefiere gastar una porción considerable de sus escasos ingresos pagando un colegio privado, cuando en su propio barrio podría tener estudiando a su hijo en una escuela pública? La principal razón parece cifrarse en el imaginario de que “salir de algún colegio privado significa tener acceso a más oportunidades, que es determinante para salir de la pobreza”, según Valderrama (9).

De hecho, la mayor parte de esos colegios privados a los que van los hijos de las clases medias y bajas de la ciudad son considerados “de garaje”: contruidos en pequeños lotes en los que se apeñusan salones de clase, sin áreas verdes, y donde se replican los horarios limitados hasta el mediodía y el esquema de clases en el aula de los colegios públicos.

El reto de Bogotá es mayúsculo: debe resolver la formación de un millón de niños en 365 colegios (algunos con varias subse-des), con 32.000 maestros. El alcalde Petro quiere extender la jornada, para por lo menos igualar el tiempo neto que un niño o adolescente de colegio público ocupa en su estudio respecto de uno de colegio privado de calidad. De entrada, tendría que duplicar el número de edificios, porque los actuales se utilizan en doble jornada: un grupo de niños estudia hasta el mediodía y en la tarde hay otro ocupando el mismo espacio. Petro también quiere implementar un grado más en la educación secundaria y fortalecer la educación preescolar para esos 1,4 millones de niños de entre cero y cinco años.

Esfuerzos ejemplares

Tanto Bogotá como Medellín han invertido sistemáticamente en mejorar sus infraestructuras: las múltiples megabibliotecas erigidas por ambas ciudades son ejemplos mundiales; han construido algunas decenas de colegios con una calidad y espacios sólo comparables a los colegios de elite; han reforzado estructuralmente y remodelado a fondo centenares de escuelas; han logrado que la educación sea en verdad gratuita, sin cobros disfrazados; han logrado en muchos casos dotar de implementos y alimentación complementaria a buena parte de sus estudiantes. Pero no es suficiente. Ni para esas dos ciudades ni, mucho menos, para el país. El rezago es demasiado. Colombia, a diferencia de Argentina u otros países, nunca tuvo un sistema educativo nacional y de relativa calidad. Uno de los principales problemas, como lo señala Valderrama, es que la gente no ha entendido ni ha tomado conciencia de que la educación pública es un bien y un derecho que hay que proteger (10).

Para Consuelo Uribe, directora del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana, efectivamente en Colombia “la educación es la puerta de acceso a la movilidad social, pero también es la puerta para la reproducción de las desigualdades sociales”. En nuestro país, “la noción de clase social sigue estando vigente”. Es decir, puede haber movilidad social entre los llamados estratos socioeconómicos, pero no necesariamente alguien que viva en el estrato 6 (el más alto) tiene “acceso a recursos de poder”, dice. También es cierto lo contrario: “Se puede no tener fábricas o empresas”, incluso no contar con una fortuna, pero sí tener acceso a la clase social más privilegiada.

Un elemento relativamente esperanzador, por doble vía, es que hay más matrícula de mujeres que de hombres en la educación básica, según me dice Uribe. Una tendencia así ayudaría en algún sentido a corregir el desbalance histórico de poder entre géneros. Al parecer, en la juventud los varones están siendo más tentados por el mercado de trabajo, así sea informal, pero las chicas se están concentrando en formarse y terminar al menos el bachillerato. Valderrama lo vio durante una jornada cultural en el colegio Carlos Pizarro Leongómez de Bogotá, en una alumna de quizás 15 años, embarazada, con unas frases pintadas en letras de colores sobre su barriga desnuda: “Mi mamá me ama. Quiere aprender. ¿Hay quien le enseñe?”.

Sólo tres razones, entre muchas

Si bien la propiedad de la tierra, la segregación por el color de piel y la educación como diferenciador social son las principales razones en las que coinciden los analistas como explicación de las desigualdades en Colombia, también es cierto que son explicaciones parciales, a las que habría que agregar factores de segregación por etnia, género y clase social, al menos. La ecuación maestra para

encontrar soluciones tendría también que contemplar otros elementos:

- ◆ Los desequilibrios regionales, que explican por qué en Colombia conviven ciudades y regiones con indicadores de salud y educación en franca y sostenida mejoría con otras cuyos índices son comparables sólo con los peores del mundo. El país económico sigue girando alrededor del eje Bogotá-Medellín. Apenas se ven esbozos de lo que podría ser una gran industria y una región pujante en el Caribe, con eje en Barranquilla, mientras que en el Pacífico no asoma aún un gran polo de desarrollo, ni tampoco en la Orinoquia, que tiene un gran potencial agrícola.

- ◆ Un sistema tributario inequitativo, en el que el gran capital saca ventaja y por el que los más ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que las clases medias. La redistribución que se hace, como señala la mayoría de los expertos, es al estilo “Hood Robin”, es decir, al revés, de abajo para arriba, de los más pobres a los más ricos.

- ◆ Unas costumbres políticas en las que la depredación del presupuesto público está a la orden del día, recurriendo a los más variados mecanismos: cobro de porcentaje por contratos de obra y para los empleados que llegaron de la mano de políticos; nóminas paralelas de empleados; pensiones infladas

apostando fuerte a un sistema de reparto de regalías mineras –que entra en vigencia este 2012– en procura de un mejor equilibrio entre regiones, para impulsar proyectos de infraestructura, ciencia y tecnología que puedan impactar más allá del municipio desde donde se extraen el petróleo, el carbón y demás bienes primarios.

Desde una mirada escéptica respecto de la violencia y la desigualdad secular, la de Colombia parece ser la historia de Sísifo: una eterna lucha, nunca resuelta, que recomienza por ciclos similares; una repetición, con otros nombres, de una historia similar. Poco a poco las cifras de pobreza y miseria muestran mejorías, pero el mal reparto de la riqueza sigue siendo el mismo, así como la perpetuación de un modelo social que comenzó en la Colonia. Una mirada optimista dirá que cada vez hay más posibilidades de que Colombia pueda corresponder hacia adentro con esas expectativas que se proyectan desde el exterior, principalmente desde las firmas que representan a los grandes capitales internacionales. Quizás, entonces, con un poco de esperanza en el bolsillo, podamos leer el carnaval de Barranquilla no sólo como una metáfora sino como una utopía. Nos dice algo de lo que somos ahora, pero sobre todo, nos dice algo de lo que podríamos llegar a ser. ■

Emigrantes

Colombia es el país sudamericano con mayor emigración. Sólo durante el primer semestre de 2014, casi medio millón de ciudadanos partieron al exterior en busca de mejores horizontes vitales y laborales. Una primera ola, en los años 1970, se dirigió sobre todo a EE.UU.; una segunda, en los 80, a Venezuela, y una tercera, en los 90, tuvo variados destinos, como España y Ecuador.

Todas las propuestas para lograr una paz duradera pasan por el problema de la propiedad agraria.

por mecanismos ilegítimos o funcionarios venales, entre otros.

- ◆ Un imaginario promovido por los medios de comunicación en el que los usos y costumbres válidos son los de la clase media alta, principalmente la de Bogotá, mientras que los de las clases populares son motivo de risa y anécdotas.

- ◆ El conflicto interno y la lucha contra el narcotráfico, que se llevan una gran porción del presupuesto nacional que bien podría dedicarse a inversión social. De cada cuatro pesos del presupuesto nacional para 2012, uno se va para pagar la deuda; más de dos para los gastos de funcionamiento, y el equivalente a 80 centavos para inversión “pura”.

La actual administración nacional lo reconoce: “La desigualdad es grave. Este gobierno trabaja con todo para romper esa realidad. Lo desafortunado es que los resultados no se verán al año ni a los dos. Espero que cuando me vaya de acá ya no tengamos la medalla de bronce”, le dijo hace pocas semanas a la prensa Mauricio Santa María, en referencia al tercer lugar mundial que algún estudio le asignó a Colombia en el reparto de la riqueza, “superado” sólo por Haití y por Angola (11).

Además del proceso de restitución de tierras a sus dueños originales, el gobierno de Santos le está

1. “Tierra a la vista”, *Semana*, 21/8/2010, disponible en <www.semana.com/nacion/tierra-vista/143386-3.aspx>.
2. Entrevista con el autor, Bogotá, 27 de marzo de 2012.
3. “Defensor pide agilizar investigaciones y sancionar a los responsables”, Defensoría del Pueblo de Colombia, Prensa, 9/4/2012, <www.defensoria.org.co/red/?_item=0301&secc=03&ts=2&n=1459>.
4. “La cuestión agraria”, *El Espectador*, 21/02/2012, disponible en <www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-328007-cuestion-agraria>.
5. “¿Dónde se esconde el racismo?”, *Desde el jardín*, blog, 22/3/2012, <www.lasillavacia.com/elblogueo/Julieta-lemaitre/32281/donde-se-esconde-el-racismo>.
6. Entrevista telefónica y por correo electrónico, 19 de abril de 2012, y reportaje en Cartagena, marzo de 2012.
7. *Ibíd.*
8. Entrevista con el autor, Bogotá, 29 de marzo de 2012.
9. *Ibíd.*
10. *Ibíd.*
11. Martha Morales Manchego, “Sin ahorros, en dos años estaríamos en crisis”: Mauricio Santa María”, entrevista en *El Tiempo*, 18/02/2012, disponible en <www.eltiempo.com/economia/negocios/articulo-web-new_nota_interior-11169561.html>.

*Reportero y gestor de proyectos periodísticos. Director ejecutivo de Consejo de Redacción, organización que agrupa a los periodistas de investigación de Colombia.

Déficit, deuda social

La apertura económica que se registró a partir de los años 90 fue perjudicial para la economía colombiana. Pero se van operando lentas mejoras de la protección social.

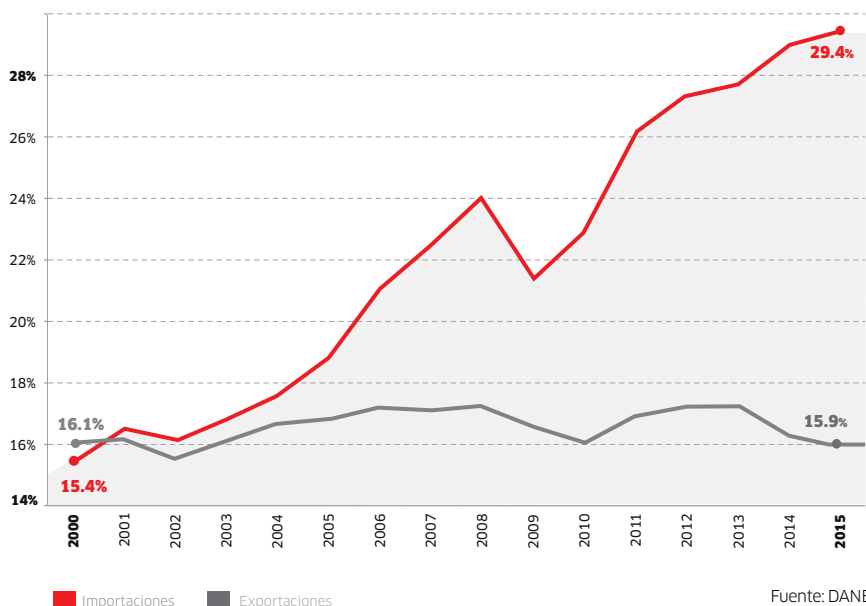
Eran los tiempos del apogeo neoliberal. El Consenso de Washington había proclamado a los cuatro vientos la necesidad de que los países abrieran de par en par su economía, eliminaran las barreras que impedían el ingreso de mercancías y capitales del exterior y disminuyeran aranceles e impuestos. Como otros países de la región –la Argentina presidida por Carlos Menem, por ejemplo–, Colombia adoptó al pie de la letra las instrucciones neoliberales bajo el gobierno de César Gaviria (1990-1994): el promedio de los aranceles descendió del 47% al 12%; saltaron los controles a los ingresos de capital y como consecuencia se revaluó excesivamente el peso.

Rápidamente, los productos nacionales perdieron competitividad frente a los extranjeros, las importaciones se triplicaron, el tradicional superávit externo se transformó en déficit, que en 1995 alcanzó el 7,3% del Producto Interior Bruto (PIB). El incremento de las exportaciones, que, según prometían las recetas neoliberales, se produciría al compás de estas políticas, jamás ocurrió.

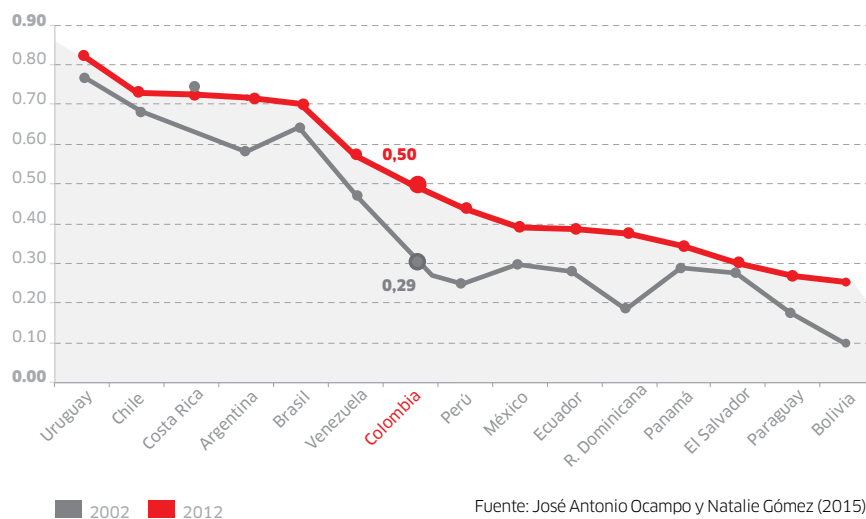
Entonces, para tatar los agujeros que iba presentando la situación económica, se apeló al financiamiento externo. Colombia se endeudó, como casi todos los países latinoamericanos. El final de la década lo fue también el de la “fiesta” con pago aplazado: sobrevino una importante recesión, quebraron empresas y entidades financieras, se empobreció la población, el ajuste redujo la inflación pero dejó a un ejército de trabajadores sin empleo. El efecto dañino de las políticas neoliberales sobre la economía colombiana queda de manifiesto en las cifras del PIB: bajo su vigencia, entre 1990 y 2014, el promedio de crecimiento fue de 3,8%, mientras que entre 1950 y 1980 había sido de 5,1%.

En cuanto a la desigualdad social, hubo marchas y contramarchas. La pobreza rural se acentuó, y en las urbes se profundizó la brecha entre los que percibían mayores ingresos y el resto de los trabajadores. El aumento del gasto social logró morigerar la pobreza, pero la recesión de 1999 la hizo crecer: pasó del 49% al 57% de la población, y la indigencia, del 15% al 25%. A partir de los primeros años del nuevo siglo se fueron incrementando sostenidamente las inversiones públicas y sociales y mejoró la situación de la economía, con lo que el desempleo bajó del 20% al 8,3%, la pobreza, del 57% al 28,2% de la población, y la indigencia, del 25% al 7,9%. ■

El estallido de las importaciones



Índice de protección social

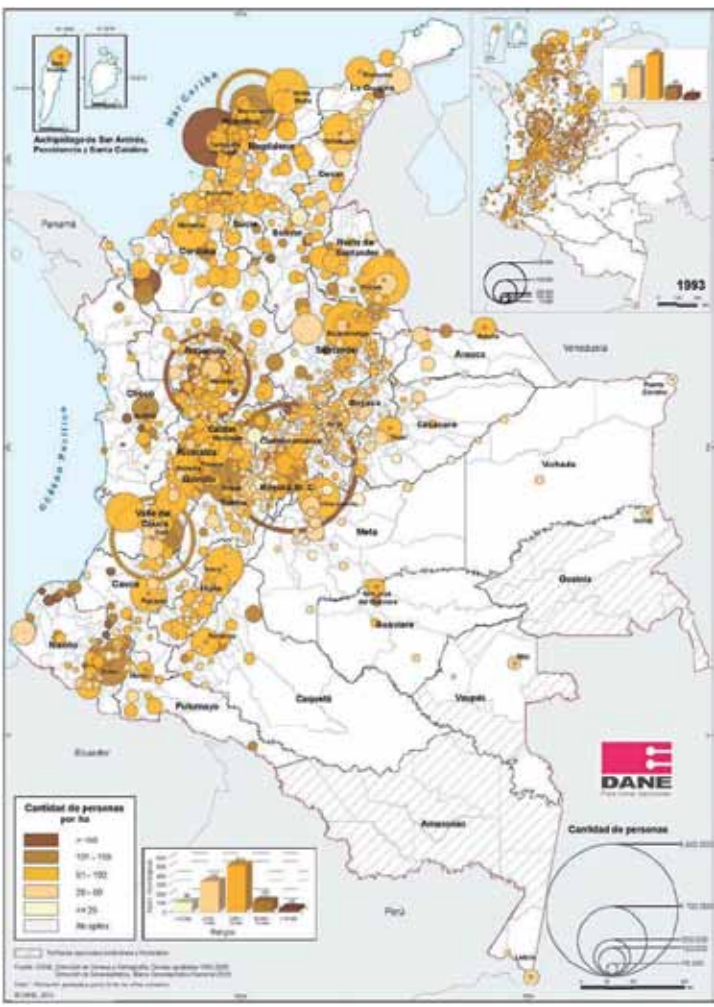


Densidad de población



Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)

Densidad de población (por cabeceras municipales)



Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)

DOS EJES POBLACIONALES

Distribución heterogénea

La distribución de la población en el territorio colombiano se centra claramente en dos ejes: el Andino, que es el principal, y al que pertenecen las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali), y el Caribe, con centros urbanos de la importancia de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta; estas dos regiones concentran la más alta densidad poblacional. En contrapartida, el oriente y el sur del país, en las regiones de la Amazonia, Orinoquia y Pacífico, presenta las más bajas densidades.

Desde su condición de país eminentemente rural, Colombia fue experimentando un proceso de intensa urbanización. La población urbana en 1938 era el 31% del total de los habitantes; en 1973 había pasado al 59%, y actualmente ronda el 75%. La ciudad más poblada es Bogotá, cuya densidad es la máxima: 16.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Si se toman en cuenta las ciudades cabeceras municipales, las mayores densidades se ubican en la región andina, en la que se destacan nitidamente Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Pereira y Manizales, Ibagüé, Bucaramanga, Cúcuta y Pasto.

La población total de Colombia era en 2016 de 48.750.000 habitantes, y según las proyecciones estadísticas, sobrepasará los 50 millones en 2019. ■

La gran Bogotá

La capital de Colombia ha crecido de manera espectacular en las últimas décadas, hasta convertirse en una gran y moderna metrópolis. En 2016 contaba con 8 millones de habitantes, pero si se toma en cuenta también su conurbano, la aglomeración asciende a 11 millones de habitantes.



Litigio. Una patrulla de la Marina de Guerra de Colombia surca las aguas del Mar Caribe frente a la isla de San Andrés, en la zona de litigio con Nicaragua, que reclama su soberanía sobre ella.

3

Colombia hacia afuera

ABRIRSE AL MUNDO

Tradicionalmente, el país ha sido un férreo aliado de Estados Unidos. Este vínculo alcanzó su mayor expresión con la implementación del llamado Plan Colombia y bajo el gobierno de Álvaro Uribe. El presidente Juan Manuel Santos ha impulsado un giro en su política exterior en busca de un abanico más plural de relaciones. Las fricciones con la Venezuela chavista y el litigio con Nicaragua por el archipiélago de San Andrés y el mar territorial son actualmente los problemas más candentes en este ámbito.



Estados Unidos. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, recibido por su par norteamericano Barack Obama. Washington apoya las negociaciones de paz con la guerrilla.



Salir del aislamiento y abrirse a todo el mundo

Un giro en la política exterior

por Socorro Ramírez*

Desde su asunción, el presidente Juan Manuel Santos le imprimió un giro a la política exterior colombiana. Su primer objetivo fue reinsertar el país en Sudamérica, lo que debía comenzar por recomponer las relaciones con Venezuela y Ecuador. Pero además, buscó ampliar vínculos con los países de los cinco continentes.

Santos aprovechó su primer mandato para rehacer los nexos oficiales de Colombia con Ecuador y Venezuela (1). Pero la normalización de esas relaciones y el manejo de la problemática fronteriza han tenido caminos y resultados diferentes.

En estos cinco años, los presidentes Santos y Rafael Correa, de Ecuador, regularizaron los encuentros de jefes de Estado, de cancilleres y de los dos gabinetes ministeriales. Resolvieron las demandas ante organismos internacionales, determinaron el punto de inicio del límite marítimo que estaba pendiente, mejoraron los pasos fronterizos formales y avanzaron en acuerdos energéticos y en la gestión de las cuencas hidrográficas comunes. La Comisión de Vecindad elaboró el plan “Fronteras para la prosperidad y el buen vivir”, que combina las prioridades de ambos países y la participación de las zonas amazónica, andina y del Pacífico, lo que permite el desarrollo de proyectos conjuntos. La Comisión Militar Binacional Fronteriza (Combifron) puso en marcha el Plan Binacional de Seguridad Fronteriza, que ha aumentado el control territorial en ambos lados y las acciones contra grupos irregulares y contra la minería ilegal, el narcotráfico y la criminalidad transnacional ligada al contrabando de personas, armas, precursores químicos y drogas.

En su momento, Santos y el presidente venezolano Hugo Chávez se comprometieron a respetar sus diferentes opciones y a reunirse cada tres meses, lo que hicieron hasta cuando Chávez se refugió enfermo en

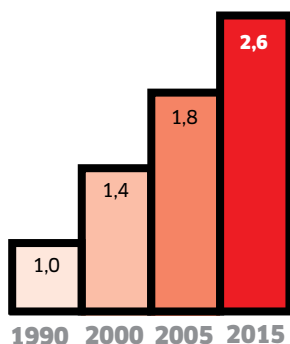
La Habana. Sus ministros también tuvieron frecuentes encuentros. Desafortunadamente, Chávez no aceptó reactivar la institucionalidad de esa compleja vecindad debido al peso de la oposición venezolana en los estados fronterizos con Colombia.

Sin el respaldo ni el carisma de Chávez –el punto estable en la inestable Venezuela que él mismo creó–, Nicolás Maduro (electo el 14 de abril de 2013 con un estrecho margen) ha tenido que hacerse valer ante la alianza cívico-militar que encarna el chavismo y ante la opinión nacional e internacional. Recibió una grave crisis económica cuya corrección posterga por temor a los costos sociales y políticos del ajuste, en medio de las reñidas elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y del retroceso en los avances sociales y la reducción de la pobreza. La parálisis en la producción nacional y en las importaciones de bienes básicos que el Estado distribuye en forma subsidiada se agrava cada día más por falta de divisas y por la caída de los precios del petróleo, mientras aumentan déficits, deudas, desabastecimiento, escasez e inflación.

Por distorsiones económicas, corrupción y diferencias de cambios y precios, muchos bienes importados y subsidiados por Venezuela se fugan de contrabando por sus fronteras, en especial por la más extensa, poblada y estrechamente articulada: la que comparte con Colombia. La situación es allí especialmente complicada, tanto por la precaria presencia estatal y la falta de opciones de desarrollo en ambos lados como por la confrontación armada colombiana. Sin una fluida comunicación intergubernamental ni una →

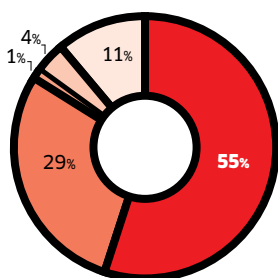
Colombianos en el extranjero

(en millones, 1990-2015)

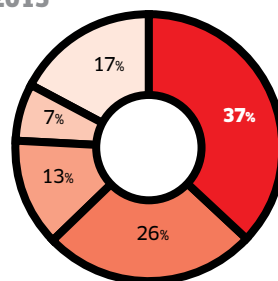


Principales destinos de migrantes colombianos

1990



2015



→ vecindad institucionalizada, y ante la destrucción de los emprendimientos legales de otra época –cuando cada país era el segundo socio comercial del otro–, es imposible reconvertir esas zonas hoy atrapadas en la economía ilegal.

Rispideces con Venezuela

Aunque Santos reconoció rápidamente a Nicolás Maduro como mandatario –a la vez que en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) defendió la necesidad de una auditoría de los resultados electorales–, el diálogo interpresidencial e interministerial ha sido precario y desigual. La primera crisis llegó un mes después de la asunción de Maduro, cuando Santos le informó que recibiría al líder opositor venezolano Henrique Capriles Radonski. Maduro lo acusó entonces de formar parte de un “complot” para derrocarlo y amenazó con reconsiderar incluso el acompañamiento a las negociaciones con la guerrilla (2).

Ante las manifestaciones de protesta de 2014, el gobierno colombiano pidió a su vecino abrirse al diálogo con la oposición, respetar los derechos ciudadanos y las libertades democráticas. Maduro, por su parte, ha reiterado que Santos se ha puesto “del lado de los fascistas”, tolera la introducción de paramilitares en Venezuela, forma parte de una conspiración con Estados Unidos y con los venezolanos que han migrado hacia Colombia para desplegar una “guerra económica” y apoya marchas en zonas fronterizas con la intención de provocar la secesión de los estados andinos y el Zulia.

Con base en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada del 17 de noviembre de 2014, el gobierno bolivariano creó teatros de operaciones militares en las fronteras, luego definió cuatro zonas de defensa marítima e insular (Decreto 1.787 del 27 de mayo de 2015) y trazó límites y jurisdicciones en zonas en disputa con Guyana y con Colombia, cuyo rechazo hizo que se modificara el mencionado decreto reconociendo que son áreas pendientes de negociación.

Debido a la agudización de los problemas de seguridad –y al aumento de la criminalidad y la violencia–, así como al fracaso de numerosos planes para enfrentarlos, Maduro lanzó, a mediados de 2015, la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), cuestionada incluso por sectores de la izquierda venezolana debido al uso desproporcionado de la fuerza en zonas marginales y por dejar fuera a los que más lucran con los negocios ilegales (3). El 19 de agosto de 2015, Maduro extendió la OLP a las fronteras con Colombia, decretó el cierre progresivo e indefinido de todos los puentes y pasos limítrofes y declaró el estado de excepción, que suprime derechos y libertades ciudadanos. Desde el 19 de octubre de 2015 viene prorrogando esas medidas.

Escalada conflictiva

Bajo el gobierno de Maduro, han sido deportados cerca de 9.000 colombianos: más de 7.000 entre 2012 y mayo de 2015, luego de ser capturados mientras in-

tentaban comprar alimentos o conseguir algún servicio, y casi 2.000 entre el 19 de agosto y fines de octubre de ese mismo año, luego de que el Ejército requisara sus casas –algunas de las cuales fueron marcadas y destruidas–. Estas medidas suscitaron la huida de otros 22.000 colombianos (4). La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostraron que las deportaciones han sido colectivas y masivas, y sin el juicio previo ni el debido proceso establecidos en normas venezolanas y en acuerdos internacionales. Los deportados no son únicamente personas indocumentadas; muchos hicieron los trámites en la Misión Identidad y esperaron respuesta por varios años; otros obtuvieron cédulas de nacionalización que les permitían ser electores y recibir subvenciones sociales, pero más tarde les fueron retiradas, o recibieron una residencia que al vencer no les fue renovada; algunos tienen doble cédula y muchos habían hecho el trámite de refugio y protección humanitaria.

Los gobiernos de Uruguay y Ecuador, que presiden *pro tómpore* la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) respectivamente, promovieron un encuentro entre Maduro y Santos y acompañaron la reunión de los ministros de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Pero la normalización de la vecindad quedó atrapada en dinámicas que Chávez y Santos habían tratado de superar (fijación unilateral de límites marítimos, triangulación de relaciones al incorporar a Estados Unidos como parte de una supuesta guerra económica, militarización fronteriza, cierre indefinido de pasos limítrofes, medidas unilaterales, sindicación al vecino de todos los problemas y deportación irregular de migrantes), ingredientes explosivos en unas fronteras donde se juega buena parte del acuerdo con las guerrillas.

Ampliación de nexos regionales e internacionales

Santos elevó la región a prioridad de su política exterior. Invitó a “superar cualquier diferencia que persista y pensar en grande”, y pidió partir no de las divergencias sino de las oportunidades compartidas, para asumir conjuntamente lo que en su primer gobierno llamó “la década de América Latina”.

La normalización de las relaciones con Ecuador y Venezuela ayudó al reencuentro con Brasil y Argentina, a la reingeniería de la Comunidad Andina y al involucramiento en la Unasur. Ha sido activa la participación colombiana en la Celac, la Asociación de Estados del Caribe (cuya Secretaría ejerce un cartagenero), en la Alianza del Pacífico y en el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.

Además, Santos le propuso al presidente estadounidense Barack Obama una diversificación de la agenda binacional, en la que desde entonces ocupan un lugar importante temas comerciales, energéticos

y ambientales, junto con la seguridad, que sigue siendo asunto central. Estados Unidos respalda las negociaciones con la guerrilla, y los dos gobiernos ofrecen cooperación o exportan asesoría y servicios, en particular, para el combate contra el crimen organizado en América Central, el Caribe y México. El Plan Colombia –acordado en 1999 durante las administraciones de Andrés Pastrana Arango y Bill Clinton– intenta reenfocarse hacia las nuevas realidades del conflicto.

El gobierno de Santos destaca el reconocimiento de la Comisión Europea a Colombia como socio económico, aliado en escenarios multilaterales y en temas de seguridad. Con la meta de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país ha sometido a evaluación su economía y educación, adhirió a los convenios contra la corrupción, el gobierno corporativo de las compañías del sector público, la transparencia e intercambio de información con propósitos fiscales, las políticas de internet y las directrices sobre minería responsable.

Las relaciones con Asia, a su vez, se centran en negociaciones comerciales y de inversiones con Corea del Sur, Japón, China, India, Singapur y Rusia.

Mediaciones en la escena mundial

El presidente Santos trató de proyectar su primer gobierno como mediador en conflictos. En 2013 inten-

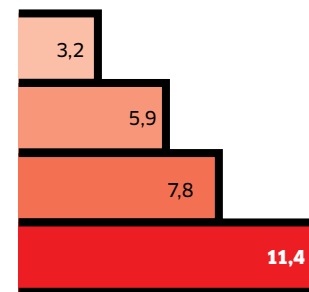
sión sobre las alternativas. En diversos espacios multilaterales, el gobierno colombiano ha insistido en no confiar el examen de la política de drogas únicamente a los organismos policiales y militares que controlan las agencias, y en hacer la lucha antidrogas coherente con otras convenciones de la ONU. Como promotor de la convocatoria y preparación de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS, por su sigla en inglés) en 2016, impulsa un debate amplio e informado para evitar que la asamblea se reduzca a ratificar metas fallidas.

En conclusión, en los años que lleva de Presidente, Santos ha tratado de mostrar que Colombia ha dejado de ser el gran problema regional de seguridad. Más que pretender que la región y el mundo se ocupen de los problemas del país –y, en particular, de la confrontación armada, como lo hacía su antecesor Álvaro Uribe Vélez–, el mandatario colombiano ha dedicado su gobierno a impulsar el fin del conflicto y una apertura regional e internacional.

El mayor avance en la búsqueda de esos objetivos está en la negociación con la guerrilla y en el intento de construir relaciones proactivas con toda la región, y en especial con los países vecinos. También avanza el ingreso del país en la OCDE, la diversificación de relaciones internacionales y el impulso del debate en asuntos cruciales como el de las drogas.

Gastos militares

(promedio anual por periodos, en miles de millones de dólares de 2011)



1988-1995
1996-2000
2001-2007
2008-2014

Santos le propuso al presidente estadounidense Barack Obama una diversificación de la agenda binacional.

tó aproximar a Palestina e Israel para que retornaran a la negociación, y como estrecho aliado de Israel en Sudamérica firmó con ese país un tratado de libre comercio (TLC) a la par que acuerdos de cooperación aérea e innovación tecnológica. Para acercarse a África, se realizaron varias visitas oficiales y aperturas de delegaciones diplomáticas o comerciales junto con otros miembros de la Alianza del Pacífico.

En materia ambiental –sin que ésta hubiera sido asumida como eje central de su política internacional–, el gobierno de Santos propuso en la Cumbre Río+20 la construcción de una agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estimuló en los espacios multilaterales el esfuerzo para precisar unos pocos ejes con metas concretas y un escogimiento flexible en la fijación de compromisos de todos los países, incluyendo los desarrollados.

El tema de drogas es tal vez el que más impulso ha recibido. Como jefe de gobierno anfitrión de la VI Cumbre de las Américas, Santos propició que el diálogo cerrado entre los presidentes girara en torno del fracaso de la “guerra contra las drogas” y logró que de allí saliera un mandato para que la Organización de Estados Americanos (OEA) examine escenarios posibles. El documento resultante ha promovido la discu-

Hay logros diplomáticos en la eliminación parcial de visas a los colombianos y en la apertura de embajadas y consulados en lugares estratégicos compartidos con sus socios de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, la polarización interna, la corrupción, los graves problemas sociales y del sistema político y la incertidumbre económica no constituyen el mejor contexto para la consolidación de esos avances. La paz y una positiva inserción global del país tendrán que estar respaldadas por sólidos procesos de cambio interno que siguen aplazados.

1. Socorro Ramírez, “¿Torniquete de Ecuador y Venezuela contra Colombia?”, *Razón Pública*, 21/9/2015.
2. “‘Desde Colombia se conspira contra nuestra Patria’: Maduro”, *Semana*, 10/6/2013.
3. Adriana Duarte Bencomo et al., “La seguridad frente al delito es un asunto político”, *Alai*, 17/8/2015; véase información en el Observatorio de Violencia, <<http://observatoriodeviolencia.org.ve>>.
4. OCHA, “Colombia: Situación humanitaria en frontera colombo-venezolana. Informe de situación N° 9”, 25 de septiembre de 2015.

*Doctora en Ciencia Política. Fue profesora en la Universidad Nacional de Colombia y coordinadora del Grupo Académico Colombia-Venezuela y de los programas andino-brasileño y Colombia-Ecuador.





Paz en Colombia, democracia en Venezuela

Destinos que se entrelazan

por Juan Gabriel Tokatlian*

A pesar de que enfrentan dilemas nacionales diferentes, el futuro de la paz en Colombia y el de la democracia en Venezuela están crecientemente entrelazados. Lo que allí ocurra en los próximos meses es de vital importancia para toda América Latina, porque la relación entre ambos países posee un poder de irradiación que excede sus fronteras.

Después de años de tensiones entre Caracas y Bogotá debido a las acusaciones por parte de Colombia de que su vecino albergaba a guerrilleros colombianos, en la última parte de su tercera presidencia Hugo Chávez jugó un papel clave al persuadir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a aceptar una solución negociada al conflicto armado que se prolongó por cinco décadas.

Previo a esto, varias y complejas tensiones diplomáticas caracterizaron los vínculos entre los dos países del arco andino. Por ejemplo, la fricción de 2002 a raíz del fallido golpe de Estado en Venezuela, cuando Colombia respaldó el breve interludio de Pedro Carmona. Otro incidente se produjo en 2005, cuando “desapareció” de Venezuela el llamado “Canciller” de las FARC Rodrigo Granda y “apareció” posteriormente en Colombia (1). Cabe recordar que Granda es hoy uno de los negociadores de las FARC en las conversaciones de paz que se llevan a cabo en Cuba.

Un roce adicional se produjo en 2008 cuando el líder de las FARC, Raúl Reyes, fue muerto en Ecuador mediante una operación militar desplegada por Colombia. En 2009, Colombia selló un acuerdo con Estados Unidos para el uso por parte del Pentágono de siete bases militares, lo cual reavivó las fricciones colombo-venezolanas, pues Caracas interpretó que Colombia estaba dispuesta a convertirse en una plataforma militar pro-estadounidense y anti-venezolana. Finalmente, el acuerdo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional colombiana

en 2010. En ese mismo año, se dio la ruptura de relaciones bilaterales decretada por Hugo Chávez, después de que el gobierno de Álvaro Uribe llevara a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una denuncia sobre el presunto amparo venezolano de guerrilleros de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Todos estos hechos fueron creando una relación bilateral muy tirante y poco saludable que, sin embargo, tuvo un momento de relajación después de que Néstor Kirchner, como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), mediara para que los dos países reanudaran sus lazos diplomáticos.

La relativa distensión entre Colombia y Venezuela se tornó evidente en el período previo a la muerte de Chávez. Así, Venezuela, junto a Chile, se convirtieron en los países que “acompañan” el diálogo entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos que se viene celebrando en La Habana desde noviembre de 2012, mientras que Cuba y Noruega han sido los “garantes” de la negociación. En 2013, Colombia, en el marco de la UNASUR, se sumó a la resolución del organismo que legitimó el triunfo presidencial del candidato Nicolás Maduro frente a las denuncias de fraude del opositor Henrique Capriles. A su vez, en 2014 y en medio del estallido de movilizaciones pro y anti-gubernamentales en el país, Caracas aceptó que Colombia, junto a Ecuador y Brasil y en nombre de la UNASUR, procuraran establecer puentes entre la oposición y el gobierno; algo que ha resultado hasta ahora infructuoso. Asimismo, ➔

POR ISLAS Y MAR TERRITORIAL

Disputa con Nicaragua

por Carlos Alfieri

El conflicto que enfrenta desde hace décadas a Managua con Bogotá por la posesión del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hoy colombiano, y por la delimitación de la soberanía sobre una amplia zona del Mar Caribe suroccidental tomó una nueva dimensión en marzo de 2016, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) se declaró competente para tratar la demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia. De inmediato, el presidente Juan Manuel Santos decidió retirarse de la jurisdicción de la CIJ y rechazar un fallo de sus jueces sobre lo que estimó “cosa juzgada”; afirmó que los temas bilaterales deben abordarse mediante negociaciones directas entre las partes y recordó que los límites del país sólo pueden modificarse, como dispone la Constitución Nacional, “en virtud de tratados aprobados por el Congreso”.

El diferendo entre ambos países se remonta a 1928, cuando suscribieron el Tratado Esguerra-Bárceñas, según el cual la Costa de Mosquitos y las islas de sus cercanías pertenecerían a Nicaragua, y el archipiélago de San Andrés y Providencia a Colombia. Pero en 1980, el gobierno sandinista de Managua declaró nulo el acuerdo y exigió la soberanía sobre el mencionado archipiélago por considerarlo incluido en su plataforma continental, alegando que cuando se firmó el pacto su país estaba ocupado por Estados Unidos y que entonces no estaba reconocido el Derecho del Mar. En 2001, Nicaragua presentó formalmente ante la Corte de La Haya una demanda contra Colombia por la soberanía de un sector del mar y el archipiélago; el presidente Álvaro Uribe rechazó la declaración de nulidad del tratado de 1928 por unilateral y violatoria del derecho internacional, y en 2007, ante las primeras audiencias en la CIJ, no admitió la competencia de ésta para considerar este asunto. La Corte reafirmó que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son de soberanía colombiana, pero en la sentencia de noviembre de 2012 sobre el fondo del conflicto adjudicó a Nicaragua los derechos económicos sobre 75.000 km² del Mar Caribe actualmente en posesión de Colombia (lo que representa alrededor de un 43% del sector soberano de este país en ese mar); este fallo fue desconocido por el presidente Santos, que lo calificó de “inaplicable y contradictorio”. Managua presentó entonces nuevas demandas a la CIJ en 2013, que son aquellas para cuyo tratamiento la Corte se declaró competente en marzo de 2016.

Cabe señalar que el archipiélago de San Andrés está situado a unos 220 km al este de la costa nicaragüense y a 775 km al noroeste de la colombiana.

→ en mayo de 2015, el enviado especial de Estados Unidos para el proceso de paz en Colombia, Bernard Aronson, se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el propósito, entre otros, de apoyar “una solución mutuamente aceptable” al dilatado conflicto armado colombiano. Finalmente, también en 2015, Venezuela fue sede ocasional de acercamientos exploratorios para que el ELN también abriera un proceso de paz con el gobierno colombiano.

Estabilidad y prosperidad

En ese contexto de menor pugnacidad y cierta convivencia entre ambos países se produjo, sin embargo, un nuevo incidente en agosto de 2015. El gobierno de Maduro decidió el cierre de la frontera, deportó a varios cientos de colombianos y acusó a Colombia de casi todos los males que padecen los venezolanos: aumento de la violencia, contrabando floreciente, escasez de alimentos y maniobras financieras especulativas. Ni la OEA ni la UNASUR lograron resolver la rispidez bilateral. En medio de una situación grave de los derechos humanos en la frontera y después de días de un intenso altercado diplomático, ambos gobiernos bajaron el tono de la disputa. Sin embargo, la tensión persiste y puede resurgir en cualquier momento, mientras los colombianos aumentan sus percepciones negativas del presidente Maduro y de Venezuela, y los venezolanos están cansados, con una crisis interna que no parece ceder.

En esta coyuntura hay dos hechos que deben evaluarse con detenimiento. Por un lado, el presidente Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, (alias) *Timochenko*, firmaron en septiembre de 2015 un compromiso de avance en materia de justicia transicional y para alcanzar un acuerdo de paz en los siguientes seis meses. Aunque ésta fue una gran noticia, el acuerdo definitivo aún no se había escrito pese a lo avanzado del proceso: la mayoría de los colombianos quieren una solución pacífica, pero dudan sobre cuán genuina es la guerrilla. Las FARC adoptaron una decisión histórica pero no aceptarán ser el único actor que comparezca ante la justicia y menos aun mientras persista intocado el paramilitarismo. Vale la pena recordar que el acuerdo final se someterá a un referéndum.

Por su parte, Venezuela vivía una exacerbación de las disputas políticas, las dificultades económicas y el deterioro social en el marco de la reciente elección legislativa decisiva, que terminó con el triunfo de la oposición al chavismo. Esa combinación de problemas puede derivar en una crisis mayor: una intentona golpista por parte de unas fuerzas armadas divididas, una radicalización de la oposición dirigida a forzar la salida de Maduro, un “golpe político” desde el seno del chavismo, un conflicto civil abierto entre fuerzas pro y anti-gubernamentales son alternativas potenciales que no se pueden descartar. En el fondo, la supervivencia de Maduro y la probabilidad de una gradual transición política están en juego.



Conflicto. Reunión sobre el diferendo fronterizo entre Colombia y Venezuela. Los presidentes *pro tempore* de la UNASUR, Tabaré Vázquez, y del CELAC, Rafael Correa, junto a Juan Manuel Santos.

El peligro de las frustraciones nacionales

Por lo tanto, en los próximos meses dos cuestiones importantes serán cruciales: el logro de la paz en Colombia y la preservación de la democracia en Venezuela. Una profundización de la crisis venezolana puede estimular un nuevo incidente entre Caracas y Bogotá. Una pugna diplomática incontrolada puede tener consecuencias imprevisibles para ambos Estados y sus respectivas sociedades y afectar incluso las conversaciones de paz en Cuba. Un hipotético estancamiento de la negociación entre el gobierno colombiano y las FARC puede, a su vez, alimentar una opinión pública desfavorable contra la guerrilla entre los colombianos y reforzar el sentimiento anti-Maduro en el país. La frustración en los dos países, debido a las difíciles realidades nacionales, puede fomentar dos tipos de reacción: las fuerzas anti-paz en Colombia y actores recalcitrantes en Venezuela podrían ganar impulso en ambos países o tentar a los gobiernos a buscar chivos expiatorios en el exterior.

Así, entonces, la pregunta esencial es: ¿pueden Colombia y Venezuela, individual e independientemente, resolver sus dilemas prioritarios? Es evidente que el proceso de paz en Colombia ha estado, y seguirá estando, internacionalizado. La inestabilidad doméstica en Venezuela, así como las repetidas tensiones entre Caracas y Bogotá, son datos ya usuales de la política interamericana. A esta altura, ni la OEA ni la UNASUR ni la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) son capaces de tratar satisfactoriamente con ambos fenómenos.

Probablemente, en los dos casos sea preferible una diplomacia concertada más informal, acotada y

prudente: en clave anglosajona, una suerte de “concert diplomacy” entre pocos para el manejo de asuntos puntuales. Países como Cuba, México, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos podrían mancomunar esfuerzos e intereses y diseñar una combinación de incentivos (positivos y negativos) y propuestas (no maximalistas ni unilaterales) para afrontar los retos de estabilidad sostenible en Venezuela y de distensión efectiva entre Caracas y Bogotá. Consultas genuinas, pragmatismo y bajo perfil entre los siete países mencionados serían deseables. La preocupación central para todos los actores externos involucrados debiera ser clara: la paz en Colombia y la democracia en Venezuela y cómo contribuir mejor a esos fines. La estabilidad es crucial para la paz y la democracia. La paz y la democracia son fundamentales para la prosperidad.

El factor tiempo es primordial: lo que ocurra en la esquina norte del arco andino será de vital importancia para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. No sólo existe la posibilidad de dejar atrás la vieja Guerra Fría, sino también la necesidad de evitar una nueva en el comienzo del siglo XXI. ■

1. Véase Omar Rodríguez, “Una entrevista que no concluyó...”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2005.

*Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

© *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

PRESENTE COMPLEJO

1948-1957

“La Violencia”

Así se bautizó este período de dictadura conservadora y matanza de liberales, que organizan guerrillas para resistir.

1958

Coalición

Alberto Lleras Camargo es elegido Presidente por el Frente Nacional, pacto entre conservadores y liberales por el cual se alternarán en el poder.

1964

Guerrillas

Nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos de orientación marxista.

2016

Paz

Tras varios intentos fallidos de negociaciones de sus antecesores, el presidente Santos se encuentra próximo a firmar un acuerdo de paz con las FARC.



Obregón. Detalle de *Se va el caimán*, de Alejandro Obregón, uno de los mayores pintores colombianos.

4

Lo vivido, lo pensado,
lo imaginado

EL ESPLENDOR DE LA CREACIÓN

Cuando se piensa en la literatura colombiana, la memoria convoca de inmediato un nombre de indiscutible y merecida resonancia universal: Gabriel García Márquez. Pero el campo de la creatividad excede en mucho el territorio del genio de Aracataca y ofrece ejemplos de nuevos escritores de valor creciente. También en el cine, el teatro y las artes visuales se registra un renacimiento de enormes proyecciones.



Gran interpretación. Fotograma de la telenovela *Escobar, el patrón del mal*. El actor Andrés Parra encarna de manera magistral al célebre narcotraficante.

Repercusiones inesperadas de una telenovela exitosa

Pablo Escobar deviene héroe

por Omar Rincón*

La telenovela *Escobar, el patrón del mal* fue un rotundo éxito en Colombia, pero también un redituable producto de exportación cuyo *rating* se replicó en todos los países de la región donde fue emitido. Se dice que la serie se hizo para que los colombianos que no conocían al mítico narcotraficante lo detestaran para siempre. Pero ocurrió lo contrario. ¿Por qué?

Escobar, *el patrón del mal* fue un éxito en todo el mundo. Lo cual demuestra que el crimen sí paga. Y es que, en nuestra sociedad, nos interesa más saber de qué están hechos los malos que los buenos. La serie fue promovida como una versión desde “los buenos”: Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara (los políticos asesinados por Pablo Escobar), Guillermo Cano (el periodista heroico de *El Espectador* que luchó contra Escobar) y César Gaviria (el presidente que lo persiguió). Los productores (Canal Caracol y dos víctimas de Escobar: Juana Uribe y Camilo Cano) afirmaron que esta serie era la verdad de las víctimas y el testimonio de la valentía del Estado colombiano que luchó contra el Mal encarnado por el narcotraficante más famoso del mundo. Pero el resultado fue, paradójicamente, el contrario: Escobar salió reivindicado como el héroe de Colombia, y los periodistas, políticos y gobernantes se vieron como unos aburridos desangelados que se dedicaban a perseguir al “pobre Pablo”. ¿Apología del crimen? No. ¿Entonces? Simplemente, reflejo de los modos de pensar de Colombia, donde se encuentra más dignidad y verdad en los narcos que en los políticos.

El fenómeno de las narcotelenovelas

Las narcotelenovelas encantan porque generan identificación y reconocimiento en los sujetos populares (y no tanto). Por eso, se ven con goce y placer en todos los países. Que el narco sea la referencia moral y social de Colombia se debe a que es una nación marcada por este fenómeno desde los años 1970. El primer

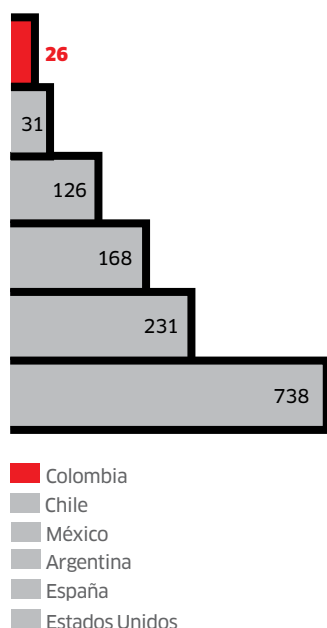
gobierno acusado de tener “negocios” con los narcos fue el de Alfonso López Michelsen (1974-1978); en ese tiempo los narcos ofrecieron pagar la deuda externa del país para que los dejaran en paz con sus actividades. Esto significa que, como nación, llevamos casi medio siglo conviviendo con y celebrando al narco. El narco es nuestro gran tema nacional.

El fenómeno televisivo de las narcotelenovelas es, sin embargo, de este siglo XXI. Y se produjo porque Colombia, de algún modo más simbólico que real, siente que el problema narco ya no es nuestro presente, que es cosa del pasado y que ahora ese fenómeno es más de los mexicanos y del resto de América Latina. Este sentimiento aparece en los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), quien poco hablaba del narco mientras, vía la desmovilización de los paramilitares, se blanqueaban muchas narcofortunas y el foco de la tragedia de la nación se concentraba en el terrorismo llamado “guerrilla” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entonces, como ya era un problema (simbólicamente) superado, resultaba posible contarlos en televisión.

El diferencial de la narcotelenovela frente a las telenovelas y series clásicas está en que: a) tienen verdad documental y tono casi neorrealista sobre este fascinante pero cotidiano mundo prohibido del narco, y así se olvida el amor como eje; b) la vitalidad del lenguaje y de la estética lleva a que no haya moral salvadora o dignificante, como existe en las telenovelas convencionales; por el contrario, aparece esa moral posmoderna del todo vale para tener billetes y ser→

Producción de largometrajes

(número de títulos, 2013)



→ exitoso; c) el tono no es de melodrama sino de tragedia anunciada, pero con modulación de comedia; d) los personajes responden a la estética del grotesco del nuevo rico, del sujeto aspiracional de la sociedad de mercado, ese que desde sus modos de vestir y actuar ya produce escalofrío o risa; e) su ritmo es frenético, su exceso es alucinante y sus lenguajes, realistas, con lo que se derrota la lentitud y solemnidad de la telenovela.

El éxito y sus resonancias

Pablo Escobar (1949-1993) es el narcotraficante más grande de la historia, era colombiano y puso en jaque al mundo. Para unos (los sectores populares de Medellín y gran parte de Colombia) es un héroe, una mezcla de Robin Hood que repartía riquezas y El Zorro, un justiciero vengativo que luchaba por los pobres; para otros (Estados Unidos y el Estado colombiano) es un criminal: el más grande de la historia.

Su personaje es tan atractivo que ya es una marca (administrada por su hijo desde Buenos Aires); tiene música (narcocorridos se llaman); se cuenta en muchos libros (*La parábola de Pablo*, de Alonso Salazar, es el más importante)(1), y tiene películas y una telenovela de éxito (*Escobar, el patrón del mal*).

La marca Escobar

El hijo de Pablo, Juan Pablo Escobar Henao, primero se dignificó con nuevos apellidos ilustres (Marroquín Santos), luego se convirtió en argentino, más tarde produjo un documental para lavar la imagen (*Los pecados de mi padre*, 2009) y, finalmente, creó la marca “Pablo Escobar” para vender ropa y documentos personales del capo, como cédula de ciudadanía, pasado judicial, carné universitario (2). Incluso acaba de publicar su autobiografía: *Pablo Escobar: mi padre* (3). Pero todo esto no es lo que parece: una apología... ya que según dice en su página web, al “compartir el legado violento de nuestra historia familiar [...] nuestras prendas se [convierten en] banderas de paz que flamean por todo el planeta, hasta hacernos conscientes de la importancia vital de la convivencia pacífica” (4). El hijo lucra con la marca “Escobar Henao” y, además, quiere hacernos creer que Pablo es sinónimo de valores y paz: su eslogan es *In peace we trust*. Su interés es lavar la imagen y hacer billetes.

Las músicas de Pablo

Los cantores populares le cantan a su heroísmo por poner en jaque a Estados Unidos y por haber sido un grande para delinquir. Y en tono de narcocorrido, lo dicen así:

Quién iba a pensar que de aquel río negro / naciera el patrón, el dueño del mundo entero, / un hombre importante, de palabra inquebrantable / para unos fue un demonio y para otros era un ángel. / Potencia mundial, un personaje incomparable / rebelde ante el gobierno, de oficio era traficante.

Vivió entre pobreza por bastante tiempo / y miraba a su madre sufriendo por eso / era su destino el ser alguien en la vida / y le prometió a su madre que algún día la ayudaría. / Cuál sería la fortuna que a la edad de treinta años / aquel niño en Colombia sería el hombre más buscado. [...]

Era respetado, un hombre de gran prestigio, / también puso las reglas de un juego muy a su estilo. / Apoyo extranjero a Pablo no le faltaba / contaba con apoyo de un águila mexicana.

(Pablo Escobar, Jorge Santa Cruz)

Hombre de mucho dinero, era el más rico del mundo. / Famoso en todas partes, en la droga número uno. / La Ley se le vino encima por los problemas que tuvo. Hizo un pacto con el gobierno de llegarse a entregar, / para que así lo internaran en la cárcel La Catedral. / Por cosas que no le gustaron, ahí mismo llegó a escapar.

Se formó un Bloque de Búsqueda para que lo capturarán, / mientras que Pablo Escobar a su Cartel preparaba / para darle al gobierno una guerra inesperada. La mala suerte llegó, ya lo estaban rastreando. / Era todo un ejército por tierra y aire buscando / para encontrar a aquel hombre que guerra estaba dando.

(Se llamó Pablo Escobar, Hermanos Ariza)

Y se le canta tan bien que, en estos corridos y en muchos más, está el relato de la vida, obra, milagros y muerte de Escobar: un héroe de oralidades y narraciones populares.

Su narcotelenovela

Escobar, el patrón del mal es una serie-telenovela exitosa en todo el mundo: gusta y encanta. Es una buena obra televisiva: bien producida, mejor casting, actuación alabada de Andrés Parra (quien interpreta a Escobar), versatilidad visual y potencia narrativa. Y es más, encantó al mundo: éxito en todos los canales en los que se presentó. ¿Pero por qué gusta? En primer lugar, tiene un personaje absolutamente fascinante: un ser anónimo que se convirtió en el más grande villano, un excluido de la sociedad que a partir de sí mismo y por sí mismo se hace el más bandido del mundo y pone en jaque al poder gringo, un hombre que sin educación y a fuerza de astucia derrota su destino de pobreza. Y los personajes que lo acompañan encantaron, sobre todo los sicarios.

La historia es alucinante y los libretos nos presentan a un héroe popular con una vitalidad de lenguaje que hace ilusionar de que hay una narcofilosofía. Tanto, que sus frases se volvieron parte de la sabiduría popular. Recordemos algunas: “Piensa como pobre y vivirás como pobre”; “Todo lo peligroso se convierte en plata”; “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”; “La vida hay que vivirla irresponsablemente, pero con responsabilidad”; “Hay tres maneras de hacer las cosas: bien, mal y co-

mo las hago yo”; “Al perro que tiene dinero, se le dice ‘Señor Perro’”; “No tiene sentido seguir haciendo más ricos a los ricos”; “El día que vaya a hacer algo malo, hágalo bien hecho”; “La mente es como un paracaídas, no sirve de nada si no se abre”; “No es más sabio quien más lee, sino quien mejor entiende”. Y los televidentes se aprendieron sus frases de narcofilosofía. Y le dan valor de verdad de pueblo, esa que se comprueba en el día a día del salir adelante.

Se dice que *Escobar, el patrón del mal* se hizo para que los colombianos que no lo conocían recordaran a este nefasto personaje y lo detestaran para siempre; todo muy educativo: que todo un país odie a Pablo y ame a Galán (el político) y a Cano (el periodista). Sólo que en la serie se representó a un gran Pablo que tenía buenos motivos para matar y traficar y chantajear, que además amaba a su familia y amigos y ayudaba a su pueblo; mientras que Cano era un histérico periodista que odia porque sí a Pablo, y Galán, un político como todos los demás. La historia era de Pablo (de él todo lo sabíamos), Cano y Galán no tenían historia en el relato (no nos dijeron nada de sus biografías). El resultado fue que amamos a Pablo, odiamos a los políticos. Se quería el *rating* y una historia internacional, y se logró. Lo de dignificar a las víctimas y crear a Pablo como el maligno era sólo intención de mercadeo.

Un personaje encantador

Escobar, el patrón del mal es, entonces, una gran obra televisiva pero con problemas éticos sobre la sociedad. Si la intención era “documentar” vía “la ficción” a Escobar como el peor de todos los criminales que ha tenido la historia, se debería haber diseñado una mejor estructura narrativa. El desarrollo de la historia y la construcción de los personajes no fueron consecuentes con la idea de “desmitificar” a Escobar, porque en las tres primeras semanas de la serie este reinó solo y se justificó su “maldad”: un pobre y sin oportunidades aprovecha la delincuencia para salir adelante; no quiso hacerlo, la realidad sociopolítica lo obligó.

Si querían una versión desde las víctimas y los buenos, deberían haber presentado desde el inicio a los superhéroes Cano, Galán y Lara en paralelo con Escobar: las cuatro historias en simultáneo para amar a los héroes y odiar al criminal. Pero no, dramáticamente decidieron darle el reino a Escobar y poner a los buenos a caer sin historia cuando el televidente ya ama a Escobar y no logra entender por qué llegan estos políticos y periodistas envidiosos y aburridos a dañarle el destino a Pablito. Los buenos (Cano, Lara, Galán) aparecen como unos burgueses que quieren arruinarle la vida a Escobar.

El personaje Escobar es además encantador porque ayuda a todos los de su barrio, celebra fiestas para su gente, ofrenda regalos y defiende a los suyos; castiga a los falsos y desleales, premia a los incondicionales, defiende a la familia; un hombre del pueblo, de pocas palabras, sin groserías, con ideas y fiel a su gente. Escobar es brillante, ya que sin estudios y a pura



© Mauricio Valenzuela/Xinhua Press/Corbis/Latinstock

Hijo escritor. Juan Pablo Escobar escribió el libro *Pablo Escobar, mi padre*, en el que despliega sus recuerdos y sus reflexiones sobre su temido progenitor.

intuición *paisa* [N. de la R.: habitante de la región del departamento de Antioquia y otros vecinos] alcanza el éxito: un trabajador informal al que no le gustan los jefes se convierte en un emprendedor de un negocio ilícito, pero con un código ético claro: la lealtad. Para completar, es todo un galán, ya que conquista a la chica más linda del barrio, la que todos quieren, es el *man* de la chica perdida del burdel y conquista a la más bella de la farándula: Virginia Vallejo. El personaje Escobar, interpretado por Andrés Parra, fue brillante para los televidentes pero falló al hacernoslo admirable; debería habernos llevado a odiarlo.

Frente a las narcotelenovelas como *Escobar, el patrón del mal*, se han hecho tres tipos de reflexiones: 1) el porqué de su éxito; 2) el escándalo moral; 3) la pregunta por los héroes y la memoria colectiva.

El éxito televisivo

Si las narcotelenovelas están siempre en primer lugar en sintonía, eso ocurre cuando no son críticas frente al fenómeno, sino que de alguna manera son historias indulgentes y celebratorias con los narcos. Cuando ha habido telenovelas muy críticas y que no endiosan, sino que envilecen a los narcos, el *rating* fue bajo; ese fue el caso de *Los protegidos*, *Las muñecas de la mafia* y *El mexicano*. Y es que el narcotraficante es un héroe popular, se dice en la calle que “se le cree más a narco que a político”.

Escobar y todas las narcotelenovelas están muy bien realizadas desde el punto de vista actoral, las historias, sus lenguajes y estéticas; como producto televisivo, son una innovación colombiana que deja atrás el melodrama y se adentra en la tragicomedia o bionovela: personajes muy malos pero contados en clave de comedia trágica. Todas son producciones →

Renacimiento

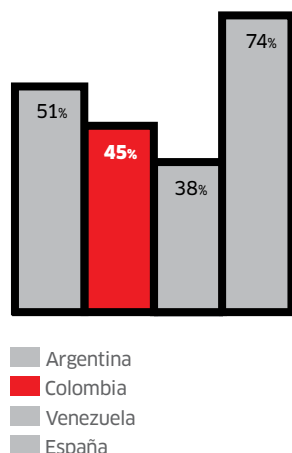
A finales del siglo XX se inició un cierto renacimiento del cine colombiano con la película *La estrategia del caracol* (1993), de Sergio Cabrera. En 2016, *El abrazo de la serpiente*, de Ciro Guerra, fue nominada como mejor película de habla no inglesa en los premios Oscar de Hollywood.



El Rancho. Miembros de la policía apostados en la entrada de la Hacienda Nápoles, en Medellín, que fue una de las propiedades del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Hogares con computadora

(porcentaje sobre el total de hogares, 2014)



→ bien logradas en fotografía, actuaciones, ritmo y fuerza brutal del lenguaje guerrero. Contundencia en las escenas. Alucinante capacidad actuarial de los colombianos para representar a los bandidos de cualquier bando.

El hecho de que sean producciones televisivas impactantes en su verdad neorrealista nos lleva a disfrutarlas como documentos de ese mundo popular mágico de *Narcolombia*. Pero además del hecho televisivo, se miran porque, para el televidente de cualquier país, es una posibilidad catártica el echarle una miradita a ese mundo extraño pero atractivo del narco: sacamos al voyeurista y lo ponemos a gozar conociendo ese mundo prohibido y excesivo del narco; se mira para escandalizarse pero también para reconocerse. Y lo mejor es que es un asunto de los colombianos, entonces, uno, como argentino o chileno, no se siente identificado, sino alucinado y fascinado viendo esos mundos extraños. Es una gozada mirar ese mundo de los narcos y es divertido escandalizarse con su ética del todo vale, sus mujeres silicona, sus hombres abusadores, sus estéticas, lenguajes y músicas populares.

Los narcos generan identificación y reconocimiento porque representan una realidad conocida: los modos “paralegales” pero legítimos de ascender social y económicamente en Colombia y América Latina. ¿Por qué generan identificación? Porque somos sociedades de la exclusión y la inequidad, donde “el ascender” legítimo vía educación y trabajo no es posible, ya que sólo una pequeña parte logra ir a la universidad y habitar la sociedad del trabajo bien remunerado; y en estas sociedades donde “hay que salir adelante a las que sea” (es decir, conseguir di-

nero para participar de la sociedad del mercado), las opciones están reducidas al deporte, la prostitución, la corrupción, el crimen y el narco: todas vías “legitimadas” desde la moral y la razón populares. Por eso habitamos, todos, como sociedad, la mente narco y la cultura narco, esa del todo vale para triunfar.

El escándalo moral

Las extremas izquierda y derecha se parecen mucho al ver enemigos en todas partes y echarles la culpa de los males sociales a los otros: la más culpable suele ser la televisión. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la derecha colombiana piensan igual sobre ese punto: las narcotelenovelas venden antivalores en la sociedad y fomentan la violencia.

El Colombiano, el periódico más conservador de Medellín, se quejó de que la televisión “está de espaldas a la realidad”, que la gente decente tiene un sentimiento de rechazo contra estas apologías de la cultura mafiosa y que eso es cosa del pasado. Un correo electrónico colectivo reclamaba: “No más narconovelas, no más narcotelevidentes, porque hay millones de personas ignorantes, carentes de personalidad y desafortunadas, que ven en esos personajes de televisión modelos a seguir”.

Por su parte, el ex presidente derechista de Panamá Ricardo Martinelli exigió que cambiaran el horario de las narcotelenovelas colombianas porque “están haciendo un gran daño a nuestro país, ya que exaltan el narcotráfico, robo y atraco” y corrompen los “valores morales” (5). Maduro, presidente bolivariano de Venezuela, acusó a los contenidos de las narcotelenovelas de fomentar la “cultura de la violencia”, que estaría sembrando la muerte en las calles venezolanas, pues “transmiten antivalores de la muerte, culto a las drogas, a las armas, culto a la violencia. Incitan al odio en la sociedad y se lucran con el dolor ajeno” (6).

Desde juicios morales, derechas e izquierdas están de acuerdo en ver el mal en las narcotelenovelas; sobre todo porque estas afectan a las “personas ignorantes” que miran televisión, mientras ellos (la “gente decente” que no es afectada) se salvan por su probidad ideológica o moral.

Representación idealizada

El debate se presenta sobre el tipo de héroes que se representan y la memoria que se produce sobre nuestras violencias. En esta discusión se comprueba que la televisión colombiana sufre del síndrome de “incoherencia moral”: productores, autores y directores dicen que quieren hacer “a” (criticar y demostrar la maldad de los narcos como los villanos que han acabado con Colombia), pero en las historias aparece “x” (historias y actuaciones que justifican el destino de los narcos: no es que quisieron ser malos, sino que la realidad social los obligó, y por eso hombres sin atributos como ellos pudieron llegar a ser importantes en la sociedad). Se los justifica como personajes con

códigos de moral popular que defienden la lealtad, la amistad, la religión y la familia (que a su vez son los valores de la cultura popular).

Si se hubiese querido presentar a Pablo Escobar como a un villano, se debería haber escogido otro modo de contar la historia: uno que representara a los narcos como un mal nacional desde la conciencia de no hacer apología sino crítica. Esto implicaba contar en su faceta diabólica, camorrista, malévola, retorcida sin ninguna justificación. Un relato con conciencia de que en este señor del narco no había nada justificable, ya que mataba por placer, era un criminal sin compasión y sólo pensaba en la venganza. Se debía contar como un criminal que era una máquina del mal: personaje sin razones, un desalmado delincuente que no tiene ni motivos ni ética.

Pero en las narcotelenovelas se justifica que los narcos son otro producto más de la exclusión de este país, y su maldad es de los pocos caminos que nos han dejado para ser exitosos. Y es que este producto es exitoso precisamente porque representa la entrada en escena de la nueva cultura popular, esa del billete/consumo; esa que cuenta que el narco es el nuevo privilegio, la nueva forma de “superación” y revanchismo social. Tal vez, Escobar es un héroe porque los colombianos sabemos más de narcos y parapoliciales que de democracia y derechos humanos; y es que a los narcos los reconocemos como parte de nuestras referencias culturales, pues los conocemos desde hace 50 años por las noticias de los medios, que los convirtieron en *celebrities* y héroes.

La historia desvirtuada

El asunto de la memoria es más complicado, porque se está construyendo una historia del país desde los narcos y los victimarios, y no aparecen las versiones de las víctimas, de los periodistas, de los empresarios, de los luchadores por los derechos humanos. Y vemos que mientras en el proyecto de Memoria Histórica hay una memoria diversa y conflictiva desde las víctimas, en la narcotelenovela se produce una memoria desde los victimarios y la barbarie.

¿Por qué? Porque de alguna forma Uribe, en sus ocho años de gobierno, instaló que los malos sólo son los guerrilleros, que los paramilitares son pasado y el narco es un asunto de los mexicanos. Luego, *paracos* y narcos son los nuevos héroes de ficción.

En lo estético y cultural, las narcotelenovelas celebran lo narco como modo de habitar la vida, que es muy similar a la de los nuevos ricos en todo el mundo. Los narcos son una especie de *Lobo de Wall Street*, sólo que, al ser de los que vienen de abajo, ese kitsch se “juzga” como grotesco y como un síntoma del mal gusto popular. En este contexto se explica que Escobar y todas las narcotelenovelas sean historias que celebran los métodos paralegales para ascender socialmente, la compra de privilegios y placeres, la moral de “billete mata cabeza”, la ética de que toda ley se puede torcer a favor de uno. Se celebra el triunfo

express, esa cultura de billetes, armas, trago, mujeres y sexo. Y todo adobado con un poco de moral católica.

¿Se deben censurar o eliminar estas narcotelenovelas? No. Hay que seguir haciéndolas porque la historia es un duelo de relatos y la ficción es la mejor manera de contarla, sólo que habría que diversificar los puntos de vista, no sólo quedarse en la verdad de los narcos y violentos, sino buscar los otros relatos. Se deben escribir y actuar con más conciencia, de manera que no se justifique por ningún motivo este tipo de héroes. Hay que mostrar a los narcos como criminales sin justificación ni reivindicación o vidas que admirar.

Deberíamos aceptar que mirarnos en el espejo de las narcotelenovelas nos devuelve un reflejo deforme de nosotros mismos, pero nos plantea preguntas sobre cómo venimos siendo como sociedad. Hay narcotelenovelas porque nuestras realidades son narcosociedades; gustan estas novelas porque en sociedades de la pobreza y la exclusión, lo narco es una vía paralegal para ser exitosos. Habrá que reflexionar: ¿Por qué “el narco es la marca Colombia”? ¿Por qué todos tenemos “un narquito en el corazón”? ¿Por qué llevamos más de 50 años viviendo en estos entornos de lo narco? ¿Por qué los colombianos hemos adoptado para la vida diaria el modo de pensar, actuar, soñar y expresar narco?

Por ahora, hay que argumentar que Escobar es un héroe, más allá de la serie, porque el colombiano siente que los narcos son los buenos y los políticos los malos: a los narcos se los justifica, al político no. Escobar es un héroe porque realiza nuestro sueño nacional: dinero, familia, bellas mujeres a disposición y moral de lealtad. No se lo puede odiar, sólo respetar, porque Colombia es donde el crimen sí paga.

Happy end

¡Ayyy, Pablito! Quién iba a decir que tanta cocaína regada con sangre por estos suelos devendría finalmente una narcocultura y buen negocio para todos: la televisión, las morales, los libros, Hollywood, las músicas, los políticos, sus hijos. Escobar fue tan buen narcotraficante que aun muerto es una máquina de producir dinero “mágico”. Escobar, como en su vida, todo lo que toca lo convierte en billetes y rating. Pablo es la voz de Colombia: nuestro ídolo, nuestro rating moral, una celebración de Narcolombia. ■

1. Editorial Aguilar, Bogotá, 2012.
2. Véase Elizabeth Reyes, “La polémica marca de Pablo Escobar”, *El País*, 6/1/2014.
3. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2014.
4. Fuente: Escobar Henao (www.escobarhenao.com/es/content/8-sobre-escobar-henao).
5. “Narconovelas, en el ojo del huracán”, *El Tiempo*, 10/12/2014.
6. “Maduro ordena revisar telenovelas por violentas”, *El Universal*, 15/1/2014.

*Profesor asociado en la Universidad de los Andes, Bogotá, y director de FesComunicación.

Festivales

Los festivales de cine, nacionales e internacionales, se han multiplicado en Colombia a partir del de Cartagena de Indias, que tuvo su primera edición en 1960. Aparte del que tiene lugar en Bogotá, que comenzó en 1984, existen muchos otros de diferente alcance y temática en ciudades como Medellín, Cali, Santa Marta o Bucaramanga.

23 películas

colombianas fueron estrenadas en el país en 2012, lo que representó el 12,2% del total de estrenos, un récord absoluto hasta ese momento.



Vallejo. Fragmento de una obra de Aníbal Vallejo Rendón, uno de los más interesantes pintores colombianos, nacido en Medellín en 1945. Es hermano del escritor Fernando Vallejo.



Los escritores colombianos del siglo XXI

Después de García Márquez

por Luis Miguel Rivas*

Figura gigantesca de la literatura, Gabriel García Márquez ejerce un efecto ambivalente sobre sus herederos: referente basal, por un lado; posible influencia inhibidora, por otro. Los nuevos escritores colombianos han sabido liberarse del peso excesivo del maestro y muestran una vigorosa y variada amplitud de registros.

Muchos años después de aquel después, el coronel Aureliano Buendía no hubiese reconocido ese país en donde lo iban a fusilar. Para el siglo XXI el pueblo exótico ya no existía, o no se reducía a eso: los discípulos de Melquíades habían encontrado la fórmula de una riqueza mágica e inmediata hecha de hojas pulverizadas que daba más poder que el oro y que acabó de desquiciar la poca cordura que quedaba en Macondo; la guerra dejó de ser el enfrentamiento entre dos bandos para convertirse en una borrasca de fuerzas disímiles que atacaban en todas las direcciones; y el peregrinar que había llevado a Úrsula y José Arcadio hasta el lugar donde asentaron su estirpe se convirtió en una trashumancia incesante y desesperanzada para millones de personas que ahora andaban de un lado para el otro con sus bártulos al hombro y sus hijos de la mano.

Tal vez una cosa, menos amarga, se le haría conocida al coronel Buendía en el nuevo país: la persistencia de los descendientes espirituales del último Aureliano: hombres y mujeres entregados al desciframiento de los oscuros jeroglíficos con los que estaba escrita la realidad, y a la búsqueda de los nexos imbricados en los que se hallaría la clave de lo que estaba ocurriendo y de las razones por las que ocurría. Los escritores.

El conflicto de siempre

“La novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos que debieron sudar hielos en su escondite, sabiendo que a cada latido del corazón corrían el riesgo de que les sacaran las tripas”, decía Gabriel García Márquez en 1959 (1), haciendo una crítica a la llamada “Novela de violencia” que dio cuenta de

la guerra bipartidista detonada con el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Parece que los escritores colombianos del conflicto en el siglo XXI han tenido en cuenta esa reconvención; y otra más del mismo García Márquez: “Por lo menos una vez, frente al cadáver destrozado del pobre campesino, debió coincidir el pobre policía de a ochenta pesos, sintiendo miedo de matar, pero matando para evitar que lo mataran. Porque no hay drama humano que pueda ser definitivamente unilateral” (2).

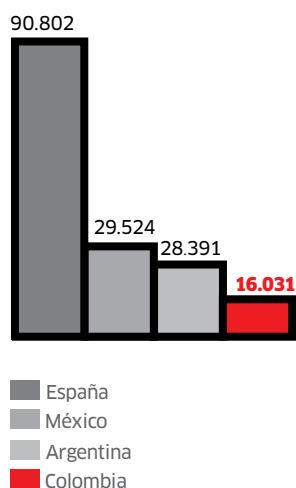
Aunque no es precisamente el miedo de matar lo que define a los personajes de dos novelas de finales del siglo XX, incrustadas en el corazón del caos moral generado por el narcotráfico: *Rosario Tijeras* (1999), de Jorge Franco, y *La Virgen de los sicarios* (1994), de Fernando Vallejo (Premio Rómulo Gallegos 2003 por *El desbarrancadero*, y Premio de Literatura en Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2011). Ambas narran la trayectoria violenta de chicos marginales de las laderas de Medellín. Pero no son los muertos la esencia de ambas novelas sino el trastoque de valores, la naturalización de la muerte cruenta y el acercamiento al mundo de estos muchachos, presas de un contexto y unas condiciones sociales que no ofrecen otra salida. La de Vallejo, como toda su obra (que alcanza los 22 libros entre novelas, biografías y textos científicos), es una diatriba provocadora que enrostra nuestra parte de responsabilidad en la hecatombe.

El olvido que seremos

En *El olvido que seremos* (2006), Héctor Abad Faciolince narra con desgarradora sinceridad las cir- →

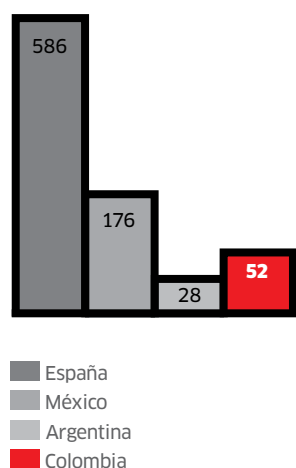
Producción de libros

(cantidad de títulos publicados, 2014)



Exportación de libros

(millones de dólares, 2014)



→ cunstancias sociales y políticas que rodearon el asesinato de su padre, Héctor Abad Gómez, un prestigioso médico cuyo único delito había sido el compromiso con los sectores más oprimidos. Esta obra, que Mario Vargas Llosa calificó como “uno de los más elocuentes alegatos que se hayan escrito en nuestro tiempo y en todos los tiempos contra el terror como instrumento de la acción política” (3), se ha convertido en un texto de lectura masiva y constituyó una manera de abordar la realidad de la violencia por la vía del testimonio íntimo convertido en registro de lo público. Diez años después de su publicación, Abad Faciolince se refiere al cambio que ha sufrido Colombia durante el último decenio y al papel de la literatura frente a esas realidades: “Tanto la violencia paramilitar, como la guerrillera, como la del Estado y la de los narcos, han bajado. No digo el tráfico, ni el abuso, ni la existencia, pero hay un poco de pudor: ya nadie defiende abiertamente que los paramilitares maten, que los guerrilleros secuestren, que los militares desaparezcan o que los narcos regalen campos de fútbol. Ya no es la ciudad (Medellín) del horror de 1987 o de 1991.... En esos años había un magnicidio cada tres meses y cincuenta homicidios cada fin de semana. Ahora hay cinco. No debería haber ni uno. Pero es distinto. Obviamente que esto no lo ha conseguido mi libro, ni todos los libros juntos de Colombia que han denunciado con pasión las distintas violencias. Pero esa sopa literaria, unida a otros actos de los ciudadanos y, a veces, de los gobernantes, han servido” (4).

Otra voz íntima, aunque ya no biográfica, cruza la novela de Evelio Rosero *Los ejércitos* (Premio Tusquets Editores de Novela 2006): un perfecto mecanismo narrativo y un universo poético a la vez sublime y desportillado que testimonia la problemática del desplazamiento forzado y la realidad inverosímil de las víctimas civiles de la violencia (según el reporte de la Red Nacional de Información, el año 2014 terminó con 7.624.299 personas que se declararon víctimas del conflicto durante el período 1985-2014, lo cual representa cerca del 16% de la población colombiana) (5). En *Los ejércitos*, la voz de Ismael, un viejo profesor jubilado, narra la expropiación y el asesinato con la neutralidad de quien se ha resignado a lo peor. Pero más allá del escarnio, vibra terca la pulsión de vida en medio de las situaciones más atroces, a manera de dolorido deseo sexual, como un símbolo de ese espíritu vital que ha hecho que los colombianos sean considerados, por algunas encuestas paradójicas, el país más feliz del mundo: “Todavía me demoré en comprender que se trataba del cadáver de Geraldina, era su cadáver expuesto ante los hombres que aguardaban, ¿por qué no los acompañas, Ismael?, me escuché humillarme, ¿por qué no les explicas cómo se viola un cadáver?, ¿o cómo se ama?” (6).

Los dolores primordiales

Del escritor Tomás González dijo la premio Nobel Elfriede Jelinek: “Leyéndolo tuve la sensación de que

era muy puro” (7), tal vez refiriéndose a una prosa libre de ambages y en permanente búsqueda de la expresión natural y directa. La preocupación de González en novelas como *Primero estaba el mar* (1983), *Historia de Horacio* (2000), *Los caballitos del diablo* (2003), *Abraham entre bandidos* (2010), *La luz difícil* (2011) y *Niebla al mediodía* (2015), apunta al conflicto esencial humano más allá de la coyuntura social. La suya es una reflexión sobre el dolor, las relaciones familiares, la lucha entre la vida y la muerte, la naturaleza y la civilización. En *Abraham entre bandidos* el secuestro es el contexto sobre el que se destacan temas universales: la avaricia y los confusos límites entre víctima y victimario: “Colombia ha sido un país violento, pero no más violento que los demás países... En muchos casos, tal vez en la mayoría, hay implicado un botín, y los actos de violencia que se producen como respuesta al despojo o al empobrecimiento. No somos los colombianos los violentos, ni los alemanes, ni los japoneses, ni los estadounidenses con sus bombas atómicas y sus cobijas que regalaban a los indios infectadas de viruela. Es la codicia, que implica una profunda falta de sentido de la justicia, la que ha hecho que tantos seres humanos, y desde el comienzo de la humanidad, hayan muerto de forma horrorosa, hayan muerto estando todavía demasiado vivos”, dice el autor.

Los escritores nacidos en los años 1970 y 1980 asumen nuevas maneras de entender su compromiso frente a la realidad y su manera de contarla. Daniel Ferreira (Premio Clarín de Novela 2014 con *Rebelión de los oficios inútiles*) narra la historia de un grupo de trabajadores en condiciones marginales que, liderados por una líder popular, toman un campo baldío con la subsecuente intervención de la fuerza pública. Una exploración actualizada en el tema de la propiedad de la tierra. Ésta es la tercera de un proyecto de cinco novelas: “*Pentalogía de Colombia* es solo el intento de hacer una metáfora de mi país... La novela de la violencia no es tan interesante para mí como la huella de las violencias interiorizadas en la gente, en la conciencia, en el sectarismo de este país. Me gustan las obras literarias que se escribieron desde la sutileza más que las que se hicieron desde la evidencia de los crímenes que nos han ensombrecido”, afirma Ferreira.

El pasado de hoy en día

Por su parte, Juan Gabriel Vásquez aborda hechos históricos (los magnicidios de Jorge Eliécer Gaitán y Rafael Uribe Uribe en la primera mitad del siglo XX, la guerra de Pablo Escobar contra el Estado en los años ochenta), desde la perspectiva de personajes que urgen explicarse a sí mismos y sólo pueden hacerlo a través de una reconfiguración de la memoria que les permita comprender cómo esos grandes hechos han intervenido en sus vidas cotidianas. En *El ruido de las cosas al caer* (Premio de Novela Alfaguara 2011), un hecho accidental lleva al narrador a indagar por un personaje anónimo que termina siendo elemento fundamental en la dinámica del narcotráfico en la época

más violenta de la guerra de Pablo Escobar. Para Vásquez los temas, más que un proyecto intelectual, constituyen un prurito vivencial: “Mis novelas no parten nunca de una decisión consciente o meditada, sino de encuentros azarosos que se convierten, por razones que nunca son claras, en obsesiones o demonios, hasta que ya no me queda más remedio que escribir. Es decir: no escribí *El ruido de las cosas al caer* porque me interesara el tema del narcotráfico, sino porque viví ciertas experiencias que me interpelaban, me hacían preguntas complejas y me pesaban en la memoria... Mis novelas parten de nuestro presente, y tratan el pasado como misterio o como lugar de secretos. Y por ahí se va a eso que llamamos historia”.

La trilogía de Willian Ospina sobre la conquista del Amazonas, formada por las novelas *Ursúa* (2005), *El país de la canela* (2008, Premio Rómulo Gallegos 2009) y *La serpiente sin ojos* (2012), narra los dos primeros viajes de los conquistadores españoles Francisco de Orellana y Pedro de Ursúa al llamado “pulmón del planeta”. Esta saga trasciende el inventario de atrocidades y resalta la complejidad humana previa a la barbarie. La verdad ficcionada como denuncia de la ficción de una sola verdad. La anécdota histórica como vehículo de asuntos intemporales: la torpeza de la avidez, el engegucimiento de la codicia, que se pueden sintetizar en una frase de *El país de la canela*: “Lo que destruimos era más bello que lo buscábamos”.

Los nuevos escritores también apuestan al registro de voces históricas alternativas. En *La ruidosa marca de los mudos* (2015), Juan Álvarez describe los momentos iniciales de la independencia nacional a través de los cuadernos de un hombre mudo que oficia como mensajero de los próceres; la novela es también un experimento lingüístico que construye un idioma a medio cabalgar entre el castellano del siglo XIX y el lenguaje moderno. Sobre el nexo entre presente e historia dice Álvarez: “Lo que me interesa es la dimensión cultural o estética de esa herencia, porque creo que quedaron sembradas unas premisas narrativas, o sónicas, o plásticas, o visuales que, dañinas o heroicas, son imprints políticas de mucho mayor peso que cualquier decisión proselitista o electoral que uno pueda tomar o creer que toma respecto a su nacionalidad”

El modo de pensar de la violencia

Otras obras abordan la realidad por la vía de la descripción de la mentalidad social, entendida como una manera compartida de concebir el mundo, producto de una realidad agresiva, y que a la vez promueve y reproduce esa realidad. *Lo que no tiene nombre* (2013) de Piedad Bonnett, es además de un duro testimonio sobre el suicidio de su hijo, acosado por la esquizofrenia, un alegato contra la indolencia y el prejuicio frente a la enfermedad mental por parte de una sociedad enferma. Así, en *El prestigio de la belleza* (2010), Bonnett discute con un mundo que impone modelos opresivos de lo bello y lo femenino. Un tema que también trata Melba Escobar en *La casa de la belleza* (2015), utili-

zando elementos de la novela policiaca para presentar un entramado de violencias más sutiles y no menos cruentas: la estratificación social, el machismo, la supremacía del dinero, la imposición de apremiantes paradigmas estéticos: “Siempre me ha llamado la atención la fijación con la belleza que tenemos las colombianas –dice Melba Escobar–. Es un rasgo cultural. Probablemente Colombia tiene más salones de belleza por metro cuadrado que ningún otro lugar en el mundo. Cuando uno va a un barrio pobre, pobrísimo, se encuentra con que las calles no están pavimentadas, a veces no hay servicios, pero hay una peluquería... Recorría la ciudad visitándolas y buscando descifrar códigos... La relación con las violencias sutiles en un comienzo surgió de la percepción de la diferencia de trato al servicio o a las clientes. También entre clientes se hacen distinciones según su ropa, su forma de hablar y sus apellidos. Todo este entramado de relaciones de poder, casi un sistema de castas, es el telón de fondo sobre el que se desarrolla la historia”.

Desde distintas perspectivas los descendientes de Aureliano Babilonia exploran en este aciago comienzo de siglo los entresijos de la coyuntura y los sedimentos universales de nuestro espíritu. Habría que tener en cuenta a autores como Pablo Montoya (Premio Rómulo Gallegos 2015, por *Tríptico de la infamia*), Gustavo Arango (International Latino Book Award, 2015, por *Santa María del Diablo*); Laura Restrepo (Premio Alfaguara 2004, por *Delirio*); Oscar Collazos (*Tierra quemada*, 2013); y dentro de las nuevas generaciones a Juan Cárdenas (Premio Otras Voces, Otros Ámbitos, 2013 por *Los estratos*); y Andrés Burgos (*Manual de pelea*, 2004), entre otros. Lo cierto es que mientras la literatura colombiana continúe multiplicándose como la exuberante naturaleza de Macondo, las estirpes condenadas a cien años de soledad tal vez tengan la esperanza de una segunda oportunidad sobre la Tierra. ■

1. “Dos o tres cosas sobre la ‘Novela de violencia’”, Gabriel García Márquez, *De Europa y América (1955–1960)*, *Obra Periodística 3*, Barcelona, Mondadori, 1992, pp. 646–650.

2. *Ibid.*

3. “La amistad y los libros”, Mario Vargas Llosa, columna de opinión, *El País*, España, 07-02-2010.

4. Este y los demás testimonios que aparecen entrecomillados, correspondientes a los escritores Juan Gabriel Vásquez, Tomás González, Daniel Ferreira, Melba Escobar y Juan Álvarez, corresponden a entrevistas realizadas por el autor del artículo, vía mail, entre el 10 y el 22 de febrero de 2016.

5. “Los hechos victimizantes a nivel departamental (1985–2014)”, Jorge Espitia, semanario virtual *Caja de herramientas*, Corporación Viva la Ciudadanía, 17 al 23 de abril de 2015.

6. *Los ejércitos*, Evelio José Rosero, Tusquets Editores, 2007, pág. 202.

7. Citada en el artículo “Las dos violencias de Tomás González”, Jerónimo Duarte, revista *Arcadia*, 21-09-2010.

*Escritor y periodista colombiano residente en Argentina. Es autor de los libros *Los amigos míos se viven muriendo* (2007), *Tareas no hechas* (2014) y *¿Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno?* (2015).

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



© (e)Jhonpaz/Xinhua Press/Corbis/Latinstock

Homenaje. *Cien años de soledad*, obra maestra de García Márquez.

Estrella

Gabriel García Márquez es de los pocos escritores de habla castellana cuya fama es equiparable a la de una estrella de cine. Su novela *Cien años de soledad*, traducida a 36 lenguas, es una de las 40 más vendidas de la historia, con más de 30 millones de ejemplares.



5

Lo que vendrá

FUTUROS PODERES

Según las estimaciones demográficas, en 2019 Colombia superará los 50 millones de habitantes, con lo que se convertirá en la segunda nación de habla castellana más poblada del mundo, por delante de España y Argentina. Sus perspectivas económicas son prometedoras, y si se consiguiera asegurar la paz y establecer una equidad social que corrija la vergonzosa desigualdad existente, podría transitar por una etapa de progreso que la sitúe entre los países más relevantes de América Latina.

LAS PROMESAS QUE ABRE LA PAZ

Demasiadas piedras en el camino

por Socorro Ramírez*

Si Colombia logra convertir las esperanzas que despierta el probable fin de la confrontación armada que durante los últimos cincuenta años ha desgarrado a su sociedad en reales oportunidades para su población más pobre, podrá aspirar a un futuro promisorio. Sin embargo, la construcción de una paz estable tendrá que superar grandes retos, tanto inmediatos como de mediano y largo plazo, agravados por una fuerte polarización política y por la incertidumbre económica.

A principios de marzo de 2016 parecía que por fin se acercaba la firma del acuerdo final entre el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Durante los últimos cincuenta años, esa confrontación ha sido el ojo de un torbellino de muerte y pobreza que ha venido asolando al país, sobre todo en el campo. La disolución de las FARC como organización armada abre un gran abanico de oportunidades para el país. Con todo, las cosas no son sencillas. Los posibles acuerdos suscitan temores, reparos o cerrada oposición de una importante franja de la opinión pública. Y la construcción de una paz estable enfrenta unos retos inmediatos y otros de mediano y largo plazo que exigirán enormes esfuerzos.

Un vistazo al pasado

Para comprender los pasos de gigante que Colombia viene dando hacia la paz conviene dar una breve mirada al pasado cercano.

Los últimos cuarenta años del país se ordenan por sus tragedias. Si al azar escogemos una fecha, mediados de los años ochenta, viene enseguida a la memoria el Palacio de Justicia en llamas, asaltado en noviembre de 1985 por el grupo guerrillero M-19, recuperado y destruido con tanquetas y cañonazos por el Ejército colombiano. Murieron casi todos los magistrados de la Corte Suprema, numerosos civiles y los guerrilleros. Entre fines de esa década y comienzos de los noventa, Pablo Escobar desató una devastadora oleada de terror: en agosto de 1989, asesinato de Luis Carlos Galán, candidato favorito para las elecciones presidenciales de 1990; bomba en avión comercial, coches bomba destruyen edificios del Departamento Administrativo de Seguridad, del diario *El Espectador* y centros comerciales; se suceden casi a diario asesinatos de jueces, magistrados y policías. El Estado y la sociedad sometidos al imperio del terror sólo pudieron recibir con alivio la muerte de Escobar en diciembre de 1993, acribillado sobre un tejado en la ciudad de Medellín.

Sin embargo, muy pronto seguirían las desdichas. En junio de 1995 estalló el escándalo por el ingreso de dinero del cartel de Cali a la campaña del presidente Ernesto Samper (1994-1998). La revelación sumió al país en el desconcierto y la inestabilidad. Una fuerte oposición de elites pedía la renuncia de Samper; la fiscalía inició el llamado proceso 8.000 por el que magistrados, congresistas, políticos y altos funcionarios terminaron en la cárcel por vínculos con el narcotráfico; Estados Unidos aisló al gobierno y al país, y la economía comenzó a declinar. Las FARC arreciaron la ofensiva militar contra unas fuerzas militares mal equipadas que parecían al borde del colapso, y los grupos paramilitares se dieron una coordinación nacional.

El sucesor de Samper, Andrés Pastrana (1998-2002), se vio casi obligado por el mandato electoral a lanzar unas audaces pero improvisadas negociaciones con las FARC, en parte quizás para ganar tiempo. Simultáneamente, recibió la propuesta de un Plan Marshall que incorporó al Plan de Desarrollo con el nom-

© Enzo & Paolo Ragazzini/CORBIS/Latinstock



Desarrollo urbano. En los últimos tres decenios Bogotá experimentó un crecimiento extraordinario. Sus nuevos edificios se multiplican y acrecientan el papel de la capital como gran motor económico-financiero de Colombia.

bre de Plan Colombia, y pidió apoyo internacional para cinco ejes: paz, economía, reforma judicial, desarrollo social y lucha contra las drogas. La administración Clinton transformó la propuesta dándole primacía al fortalecimiento militar para profundizar en Colombia la guerra contra el narcotráfico. En 1998, otorgó recursos para vincular al ejército colombiano a ese combate con la conformación de un batallón militar antinarcóticos. Ante una nueva ofensiva de las FARC, las negociaciones terminaron rompiéndose en 2002 y el gobierno de Pastrana pidió ampliación de la ayuda militar.

Ofreciendo “mano dura y corazón grande” a un país atemorizado, triunfó en los comicios presidenciales Álvaro Uribe (2002-2006, 2006-2010), quien estrechó vínculos con George W. Bush, unió la guerra contra las guerrillas con la lucha contra las drogas y el terrorismo al declarar “narcoterroristas” a las FARC; emprendió una gran cruzada militar y diplomática contra esa organización; en vano intentó adelantar diálogos con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), y negoció un acuerdo con los grandes jefes paramilitares de la época a los que terminó extraditando. Los recursos de Estados Unidos ayudaron a la capacitación militar y al acceso a insumos estratégicos tanto aéreos como de comunicaciones e inteligencia. Con los fondos obtenidos con un impuesto de guerra, Colombia dobló su ya alto presupuesto militar. Bajo los dos sucesivos gobiernos de Uribe, las Fuerzas Armadas recuperaron la iniciativa y lograron asestarles golpes decisivos a las FARC

a costa, sin embargo, de graves abusos, violación de derechos humanos, persecución de la oposición y una vasta corrupción.

Las negociaciones en curso

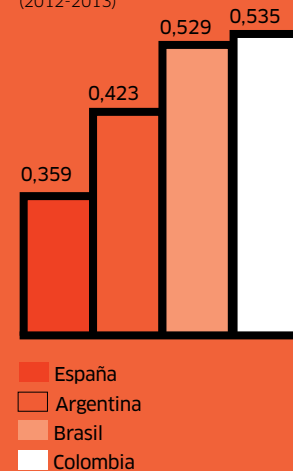
La exitosa ofensiva del Estado le permitió al presidente Juan Manuel Santos (2010-2014, 2014-2018) iniciar formalmente, el 12 de octubre de 2012, nuevas negociaciones con las FARC a través de una Mesa conjunta que sesiona en La Habana. A mediados de 2014, la Mesa había logrado ya tres acuerdos: uno agrario, otro sobre drogas y otro más sobre participación política. Pactó también el comienzo del desminado [desactivación de las minas terrestres] y concertó diez principios sobre reconocimiento de las víctimas. En julio de 2015, las partes convinieron en desescalar los combates en el país y acelerar las negociaciones en La Habana. Las FARC restablecieron entonces la tregua que habían interrumpido, lo que redujo homicidios, secuestros y ataques; a cambio, el Estado cesó los bombardeos en su contra. Ahora, ha indultado a guerrilleros presos por rebelión y comienza a liberarlos con el compromiso de que no vuelvan a las armas.

El 23 de septiembre de 2015, el presidente Santos y el jefe de las FARC hicieron público un difícil acuerdo sobre justicia transicional y fijaron un plazo máximo de seis meses para la firma del fin de la confrontación armada. Y en enero de 2016, dieron un paso del que les será difícil retroceder: pedirle al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas conformar con paí- →

Pujanza

La industria automotriz colombiana muestra un constante progreso, tanto en el ensamblaje de vehículos como en la fabricación de autopartes. Emplea de manera directa a 25.000 trabajadores y dentro de América Latina es el cuarto mayor productor. En motocicletas es el segundo fabricante de la región (después de Brasil), con una producción de más de medio millón de unidades.

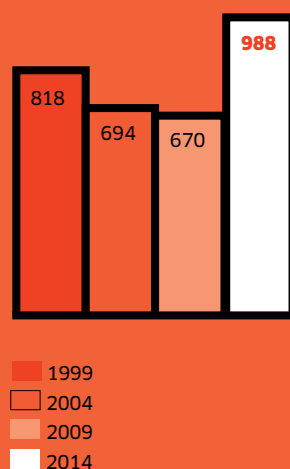
Coefficiente de Gini (2012-2013)





Hidrocarburos. Un obrero en la refinería petrolera de Barrancabermeja. Pese a la grave depresión actual de su precio internacional, el petróleo es una riqueza básica de Colombia.

Producción de crudo
(miles de barriles por día)



→ ses de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), una misión política no armada que entraría en funciones dos meses después de la firma del acuerdo, por un año prorrogable, ayudando al gobierno y a las FARC al monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral, la concentración guerrillera y la deposición de las armas. Tanto el Consejo de Seguridad como los miembros de la CELAC aceptaron la petición y emprendieron el proceso de definición del mandato y de los participantes en la misión.

Mientras se firma el fin de la confrontación, el gobierno de Santos tramita en el Congreso tres instrumentos. El primero es un *plebiscito* que permita refrendar los acuerdos según lo había prometido el presidente. El sector liderado por Uribe se debate entre promover el “no” o la abstención. A cambio del plebiscito, tanto el uribismo como las FARC proponen –con intenciones contrarias– realizar una Asamblea Constituyente: Uribe para redefinir lo convenido entre las partes, y la guerrilla para ratificar, ampliar y blindar los acuerdos. La Corte Constitucional estudia [marzo de 2016] el plebiscito y tiene la posibilidad de rechazarlo o convertirlo en “Consulta Especial” para refrendar los acuerdos. De llevarse a cabo, probablemente gane el “sí”, aunque con amplia abstención y electores en desacuerdo. Por su parte, el gobierno rechaza la idea de una Constituyente y trata de separar la refrendación de los acuerdos del diseño de las leyes y reformas que se desprendan de lo convenido por la Mesa de La Habana. Con ese fin, propone un *acto legislativo* –segundo instrumento– mediante el cual se cree una Comisión Espe-

cial en la que tendrían voz las FARC, y que le otorgue facultades extraordinarias al Presidente por 90 días, prorrogables por otros 90. El tercer instrumento es el de revertir la modificación de la *Ley de Orden Público*, que en 2010 le quitó al Presidente la facultad de despejar parte del territorio para que allí se agrupen las guerrillas durante su desmovilización.

Con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) el proceso ha sido más complicado. La relativa autonomía de los comandantes de frente les dificulta adoptar una visión compartida, pretenden fortalecer su posición con ataques armados que generan mayor rechazo, hacen exigencias inviables como la de comenzar con un cese bilateral del fuego, que las negociaciones las adelante la sociedad civil y dejar las armas sólo cuando las reformas se hayan realizado.

El momento tan deseado

Tras cuatro años de diálogos, Colombia está cerca de firmar el acuerdo con las FARC, aunque no sea el 23 de marzo como estaba previsto. Aún hay cruciales asuntos pendientes y surgen tensiones, como la que acaban de generar las FARC al convertir un acto permitido de explicación de los acuerdos a los guerrilleros en proselitismo armado ante la población.

Y no será fácil construir la paz. Uribe y sus seguidores adelantan una ácida oposición, hablan de concesiones indebidas e impunidad para las FARC y tratan de capitalizar la vacilante opinión pública según los avatares de las negociaciones. La disputa ha llegado incluso a los organismos de control, con un procurador contrario a los acuerdos y un fiscal a favor. Y un problema no menor representa la actividad de los paramilitares y las Bandas Criminales (Bacrim) ligados a todo tipo de tráfico ilegales, así como la resistencia del ELN a entrar en una real negociación.

El proceso de diálogos con las guerrillas cuenta con notable respaldo internacional. Lo han reiterado la Asamblea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Papa y numerosos gobernantes de todo el mundo. Los presidentes de Colombia y Estados Unidos ya han anunciado que el Plan Colombia se transforma en Plan Paz Colombia.

Para Santos, con el acuerdo de paz “Colombia podrá desplegar todas sus potencialidades. Habrá más seguridad, en particular en el campo, asolado por la violencia; la tranquilidad atraerá mayor inversión, crecimiento y empleo; se generarán recursos para la salud y la educación; se podrá seguir luchando contra la desigualdad y la pobreza”. Este sencillo credo alimenta el optimismo. Pero más que de oportunidades, se trata por ahora de esperanzas. La construcción de la paz tendrá que enfrentar numerosos y grandes retos.

Los retos que esperan a Colombia

En lo inmediato, urge concluir los acuerdos con las FARC, concretarlos con el ELN, lograr apoyo nacional para su puesta en marcha y obtener acompañamiento

internacional en complejos procesos de concentración guerrillera que permitan adelantar su desmovilización y dejación de las armas. Otro tanto se requiere para el buen funcionamiento de los mecanismos que deben garantizar verdad, justicia y cumplimiento de penas, atados a la reparación de las víctimas. Además, el Estado tendrá que garantizar la seguridad de los ex guerrilleros.

Otro desafío inmediato es el de establecer los términos de la participación internacional. Con el fin de evitar injerencias indebidas, es necesario precisar el mandato para la misión política no armada que debe poner en marcha el Consejo de Seguridad, y precisar el Plan Paz Colombia. El 12 de febrero de 2016, el presidente Obama pidió al Congreso de Estados Unidos aprobar 450 millones de dólares para apoyar el proceso de paz colombiano en lo referente a víctimas, justicia, desminado, desarrollo rural e incorporación de ex guerrilleros, pero también para la lucha contra las drogas y el crimen organizado, que podrían revivir la receta bélica. A evitarlo puede ayudar el que Colombia viene cambiando su política de drogas y que, como promotor de la convocatoria y preparación de la UNGASS 2016, está impulsando un debate amplio con el fin de evitar que esa asamblea especial de Naciones Unidas se reduzca a ratificar metas y métodos fallidos.

En el mediano y largo plazo, la médula de los pactos para la construcción de la paz radica en unas exigencias mucho más amplias: superar la ausencia o la fragilidad institucional, en especial en zonas apar-



© JHON PAZ/Xinhua Press/Corbis/Latinstock

Esmeraldas. Un minero busca esmeraldas en el lodo del río en Muzo, Boyacá. La economía de Colombia debe superar la fase de la extracción para pasar a una etapa superior.

nómicos escasos y grandes reformas prometidas; el choque (mayor) entre el urgente reordenamiento rural y las fuerzas políticas para llevarlo adelante, y, en

La malformación de la estructura agraria de Colombia tiene profundas raíces históricas y amplias ramificaciones políticas.

tadas donde se concentró la confrontación, sacar de la parálisis a la justicia, enfrentar la mezcla de política con paramilitarismo, narcotráfico, contrabandos, minería ilegal y contratación pública amañada, que fortalece la corrupción, las mafias y la violencia.

Es necesario morigerar los altos niveles de inequidad y solucionar los problemas de tierras. Millones de campesinos fueron desplazados por la violencia o el engaño, muchas de las mejores tierras agrícolas están copadas por latifundios improductivos y ganadería extensiva, la propiedad rural no está toda titulada, los campesinos requieren acceso a los mercados, servicios de seguridad, justicia, crédito y asesoría técnica –decisivos para sustituir eficazmente los cultivos de coca y por ende limitar el poder de los grupos criminales que se financian con las drogas–. Estas reformas no son concesiones a las FARC. Desde siempre, con acuerdos o sin ellos, el país ha estado en mora de adelantarlas. En su secular ausencia arraiga la mayor parte de los graves problemas nacionales.

Esos cambios se enfrentan, a su vez, a tres problemas de fondo: el choque (menor) entre recursos eco-

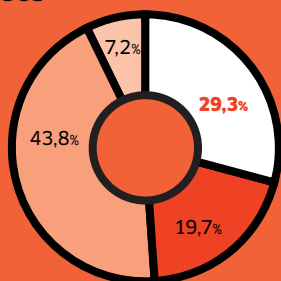
tercer lugar (y mucho más amplio), entre reformas acordadas y modelo de desarrollo en curso.

Situación económica y costos de las reformas

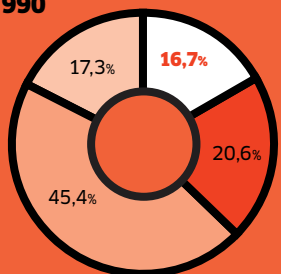
Las actuales dificultades económicas del país, que perdurarán durante un período incierto debido a la baja de los precios de las materias primas (un mal compartido con otros países de la región), aunque no son el mayor obstáculo para el cumplimiento de los acuerdos, sí plantean serios problemas. Según cálculos del Ministerio del Posconflicto, en los próximos diez años se requerirán 90 billones de pesos colombianos (26.900 millones de dólares aproximadamente, con un dólar a 3.350 pesos colombianos). Para iniciar estas reformas se harían entonces necesarios por lo menos nueve billones de pesos. Pero el país no solo carece de esos recursos sino que enfrenta altos déficits en distintos frentes. El déficit fiscal alcanzó en 2015 un 3% del Producto Interno Bruto (PIB), y se estima que en 2016 llegue al 3,6 por ciento, lo que implicaría un faltante de 30,9 billones de pesos. Más grave aún, el déficit de cuenta corriente entre ene-→

Industria, agricultura y servicios (como porcentaje del PIB)

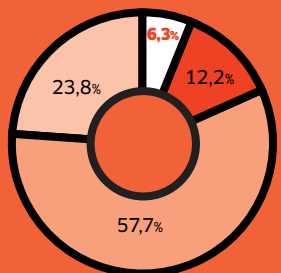
1965



1990



2014



■ Agricultura
■ Industria
■ Servicios
■ Minería, construcción y otros



© Jhon Paz/Xinhua Press/Corbis/Latinstock

Violencia. La superación de la violencia que ha signado la vida colombiana es no sólo la gran esperanza sino una de las condiciones para lograr un desarrollo económico y social equitativo.

→ ro y septiembre de 2015 fue de 14.469 millones de dólares, lo que equivale a un 6,6% del PIB.

En enero de 2016 el Estado vendió su última propiedad valiosa, la empresa generadora de energía Isagén. Obtuvo 6,49 billones de pesos, mientras el costo de un solo año de inversiones en infraestructura para cuyo financiamiento se anunció la venta de la empresa, se ha estimado en 10,4 billones de pesos (1,30% del PIB de 2015).

El talismán de salvación parece ser una anunciada reforma tributaria “estructural”, que le proporcionaría nuevos recursos al Estado. A esta reforma habría que sumarle una mayor reducción del gasto público y un drástico freno a la evasión tributaria y la corrupción. El gobierno trata de postergar la reforma tributaria y el ajuste fiscal hasta después del plebiscito. Pero sin recursos no podrá acometer el cumplimiento de los acuerdos.

Es de esperar que –como es habitual en Colombia– en el camino se arreglen las cargas y que las dificultades financieras se distribuyan en más de un decenio.

Reformas y fuerzas políticas

Un segundo obstáculo para la aplicación de los acuerdos es el previsible choque entre reformas pactadas y fuerzas políticas en juego.

La malformación de la estructura agraria de Colombia tiene profundas raíces históricas y amplias ramificaciones políticas. En América Latina el latifundismo forma parte de las herencias de la Colonia y la Independencia. Para superarlo, la mayor parte de los países latinoamericanos lograron realizar una reforma agraria en el siglo XX. En Colombia fracasaron numerosos intentos, entre ellos los más importantes, en las décadas de 1930 y 1960. Por el contrario, sucesivas contrarreformas afincaron el poder de los terratenientes y los políticos locales sobre los campesinos –que ponen los votos–, y sobre los partidos y el Estado central –que dependen de esos mismos votos–.

Esas contrarreformas definieron la actual estructura clientelista y corrupta del sistema político y han servido de nicho propicio para el desarrollo de guerrillas, paramilitares, narcotráfico, corrupción y parapolítica, que hoy asedian a la sociedad y al Estado colombianos. Superar el latifundismo es el desafío que enfrenta la aplicación de los acuerdos de paz. Pero ninguna de las fuerzas políticas existentes tiene hoy la fibra o la voluntad de hacerlo.

Esas contrarreformas definieron la actual estructura clientelista y corrupta del sistema político y han servido de nicho propicio para el desarrollo de guerrillas, paramilitares, narcotráfico, corrupción y parapolítica, que hoy asedian a la sociedad y al Estado colombianos. Superar el latifundismo es el desafío que enfrenta la aplicación de los acuerdos de paz. Pero ninguna de las fuerzas políticas existentes tiene hoy la fibra o la voluntad de hacerlo.

Las fuerzas que rodean al gobierno son una mezcla de intereses, en su mayoría de rebuscadores de puestos y contratos, que se alinean en el centro-derecha. Están allí un Partido Liberal sin cabeza; Cambio Radical, del actual vicepresidente Vargas Lleras; el Partido Conservador cuando le conviene, y otras fuerzas de menor calado. Desde la derecha pura y dura Uribe y sus huestes adelantan una batalla abierta contra los acuerdos, de amplia resonancia nacional. En el centro-izquierda flotan pequeños movimientos en los que es posible hallar sensatez y voluntad, pero no tienen mucho eco en un país polarizado. Y la izquierda se halla, como siempre, fraccionada en movimientos y organizaciones volátiles, y en distintos movimientos agrarios y sindicales. Hasta el momento nada permite barruntar su confluencia en un gran movimiento nacional que empuje la transformación efectiva del agro. Ojalá la firma de los acuer-

© Jose Gomez / Reuters/Reuters/Latinstock



Tropas. Una columna de combatientes de las FARC. La coronación del anhelado acuerdo de paz puede cambiar por completo el mapa político y social de un país agitado durante medio siglo por conflictos armados.

dos con las guerrillas genere un remezón político y, en un arranque de buen sentido, todos renuncien a sus egos, sus pequeñas historias pasadas y sus puntillosas rivalidades personales.

Choque entre reformas y modelo de desarrollo

Finalmente, podemos prever que, al tratar de aplicar los acuerdos, se generará un choque entre las reformas pactadas y el modelo de desarrollo. Así este no se haya negociado con las FARC, la aplicación de los acuerdos entrará irremediabilmente en conflicto con el modelo neoliberal, aperturista, extractivista y agroexportador en curso.

Se dice que Colombia es el noveno país del mundo en posibilidades agroexportadoras. Pero los numerosos tratados de libre comercio que los últimos gobiernos han firmado, a los que se suman ahora la intensa y prolongada sequía causada por el fenómeno de El Niño y las predecibles anomalías climáticas del futuro, han golpeado y seguirán golpeando duramente al campo y a la industria. Hasta los años noventa, Colombia se autoabastecía de alimentos; hoy importa casi la mitad.

El gobierno se propone asignar la transformación del campo a unas llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), en áreas apartadas de los centros urbanos en las que se requiera de grandes inversiones para empezar a producir. El ejecutor del proyecto puede pedir en concesión o arrendamiento los baldíos de la Nación y añadir –mediante compra o arrendamiento– otras tierras que su plan requiera; a su vez, los campesinos pueden hacerse socios de esos proyectos que les ga-

rantizarían financiación, ayuda técnica, mercados, etc. Por esta vía, el gobierno espera aumentar la productividad agraria e insertar al campo colombiano en los mercados mundiales de alimentos, descargar parte del peso de la transformación agraria en hombros privados y agroindustrias nacionales o extranjeras a las que promete grandes beneficios, y ofrece un atractivo a los campesinos ahorrándose los costos de una verdadera reforma agraria. Las críticas a esta fórmula señalan que podría legalizar la acumulación irregular de tierras. La ley la prohíbe, pero como sólo se aplicaría a partir de 1994, las grandes extensiones acumuladas antes quedarían intactas. También se critica que, al asociarse a esos proyectos, los campesinos quedarían convertidos en jornaleros, reproduciendo el mecanismo clientelista y corrupto mantenido hasta ahora en el campo. Así, pues, las ZIDRES prometen convertirse en un ámbito de agudas controversias.

Colombia tiene ante sí un futuro mucho más promisorio que el pasado, pero cargado aún de interrogantes. Sólo un liderazgo decidido y claro podrá garantizar un posconflicto exitoso, al menos en estos campos. ■

*Socorro Ramirez es doctora en Ciencia Política y fue profesora en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta su jubilación, coordinó el Grupo Académico Colombia-Venezuela y los programas andino-brasileño y Colombia-Ecuador.

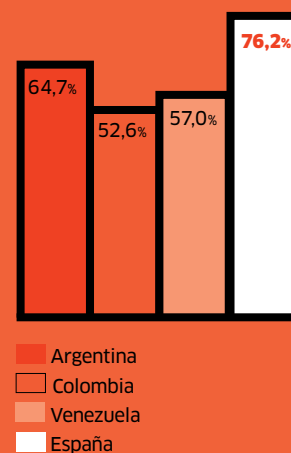
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Inversión extranjera

En 2014, Colombia se mantuvo en el grupo de los 20 principales países receptores de inversión extranjera directa (IED), con un monto de 16.000 millones de dólares. Se registró una fuerte disminución de las industrias extractivas, pero la inversión aumentó en los sectores de finanzas, transporte, comunicaciones y manufacturas.

Usuarios de internet

(porcentaje sobre la población, 2014)



PRIMERA SERIE

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

1 CHINA
2 BRASIL
3 INDIA
4 RUSIA
5 ÁFRICA

SEGUNDA SERIE

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

1 ESTADOS UNIDOS
2 ALEMANIA
3 JAPÓN
4 GRAN BRETAÑA
5 FRANCIA

TERCERA SERIE

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

1 IRÁN
2 MÉXICO
3 COREA DEL SUR
4 TURQUÍA
5 ESPAÑA

CUARTA SERIE

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

1 CUBA
2 COLOMBIA
3 VENEZUELA
4 PERÚ
5 BOLIVIA

EXPLORADOR

Los números anteriores se consiguen en librerías o por suscripción a través de www.eldiplo.org

LE MONDE
diplomatie

PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS

Un retrato del país de hace 50 años, por Elena de La Souchère, página 7. *Le Monde diplomatique*, París, mayo de 1966.

“¿Morir? ¿Y qué?”, por Hubert Prolongeau, página 11. *Le Monde diplomatique*, París, enero de 1993.

El deseo de paz no nació ayer, por Benoît Guillou, página 17. *Le Monde diplomatique*, París, febrero de 1999.

El horror y la esperanza, por Ignacio Ramonet, página 21. *Le Monde diplomatique*, París, julio de 1998.

Comunidades enfrentadas, por Michel Agier y Odile Hoffmann, página 23. *Le Monde diplomatique*, París, febrero de 1999.

El noviembre de la tragedia, por Françoise Barthélémy, página 27. *Le Monde diplomatique*, París, enero de 1986.

¿Quién le teme a la verdad?, por Maurice Lemoine, página 33. *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2015.

Ruinas nada más, por Fernando Vallejo, página 39. *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2012.

Avances, obstáculos, incertidumbres, por Socorro Ramírez, página 45. *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 2015.

Las fronteras de la sociedad, por José Luis Novoa, página 49. *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, mayo-junio de 2012.

Un giro en la política exterior, por Socorro Ramírez, página 61. *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 2015.

Destinos que se entrelazan, por Juan Gabriel Tokatlian, página 65. *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2015.

Pablo Escobar deviene héroe, por Omar Rincón, página 71. *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, enero-febrero de 2015.

FUENTES DE LOS GRÁFICOS

Fabricación de cocaína, página 34
Fuente: UNODC Global Drug Report 2015.

Tasa de homicidios, página 35
Fuente: UNODC 2015.

Participación en el PIB sudamericano, página 36
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2016, Banco Mundial.

Tasa de alfabetismo, página 37
Fuente: UIS Statistics 2016, UNESCO.

Población, página 38
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2016, Banco Mundial.

Evolución del PIB, página 46
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2016, Banco Mundial.

Remesas, página 46
Fuente: The Latin Macro Watch 2015, IADB.

Producción de opio, página 51
Fuente: UNODC Global Drug Report 2015.

Industria y agricultura, página 52
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2016, Banco Mundial.

Principales exportadores de carbón, página 53
Fuente: International Energy Statistics 2013, EIA.

PIB per cápita, página 54
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2016, Banco Mundial.

Colombianos en el extranjero, página 62
Fuente: Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).

Principales destinos de migrantes colombianos, página 62
Fuente: Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).

Gastos militares, página 63
Fuente: SIPRI database 2014.

Producción de largometrajes, página 72
Fuente: UIS-UNESCO, Questionnaire on Feature Films Statistics, 2014.

Hogares con computadoras, página 74
Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database.

Producción de libros, página 78
Fuente: *El libro en cifras 2015*, CERLALC-UNESCO.

Exportación de libros, página 78
Fuente: *El libro en cifras 2015*, CERLALC-UNESCO.

Coefficiente GINI, página 83
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2016, Banco Mundial.

Producción de crudo, página 84
Fuente: Annual Statistical Bulletin 2006, 2010 y 2015, OPEP.

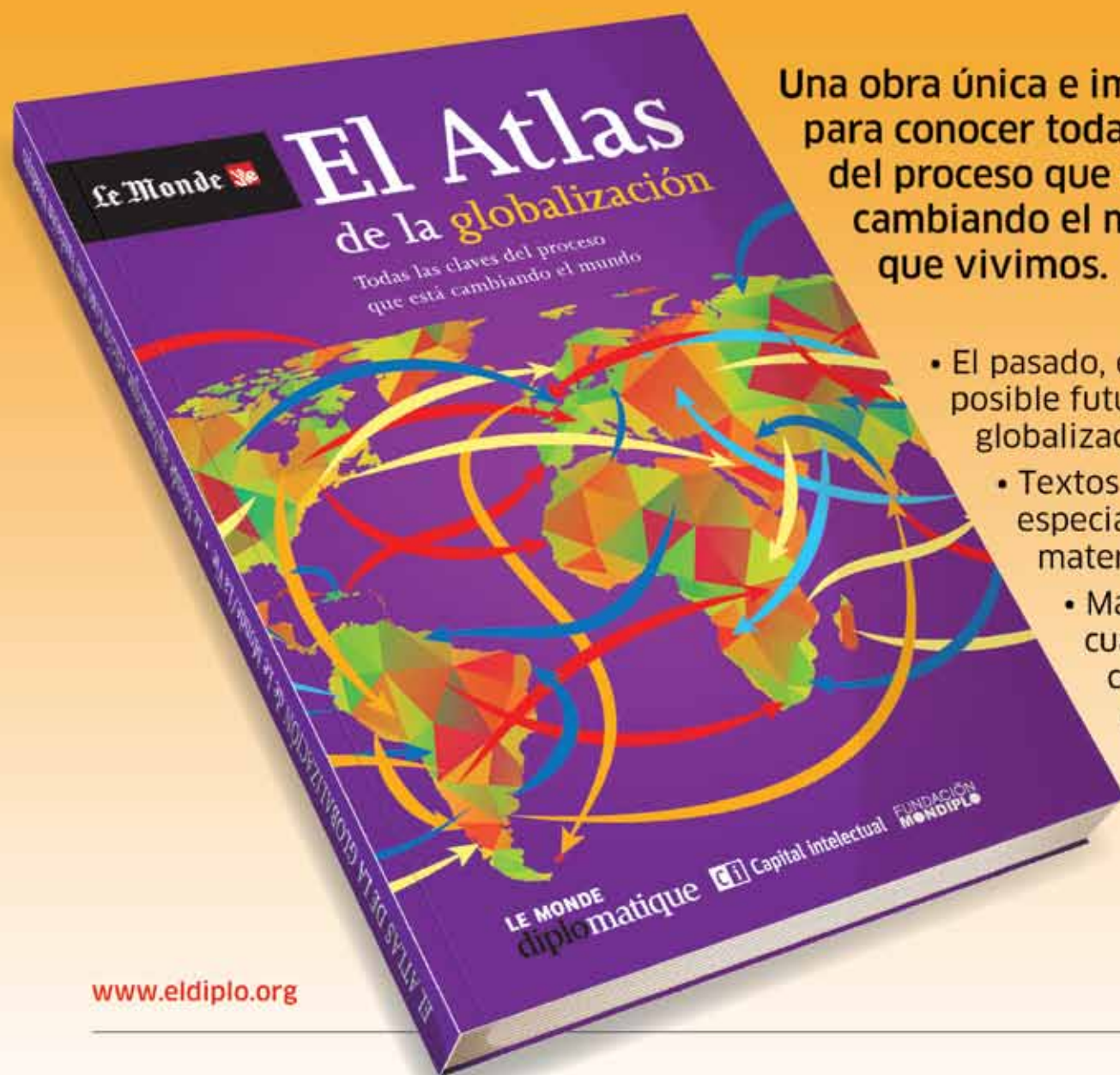
Industria, agricultura y servicios, página 86
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2016, Banco Mundial.

MAPAS

Densidad de población, página 57, DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y **Densidad de población (por cabeceras municipales)**, página 57, DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).

El Atlas de la globalización de Le Monde/La Vie

EN VENTA EN
LAS MEJORES
LIBRERÍAS



Una obra única e imprescindible para conocer todas las claves del proceso que está cambiando el mundo en que vivimos.

- El pasado, el presente y el posible futuro de la globalización.
- Textos de los mayores especialistas en la materia.
- Mapas, gráficos, cuadros comparativos y estadísticas.

www.eldiplo.org

LE MONDE
diplomatique

Ci Capital intelectual

FUNDACIÓN
MONDIPLO

LE MONDE
diplomatique



ISBN 978-987-614-511-4



9 789876 145114

Colombia: De la guerra a la paz Propiedad de la tierra y raíces de la violencia
El Bogotazo El horror y la esperanza **¿Quién le teme a la verdad?**
Desequilibrio externo y desigualdad **Las fronteras de la sociedad** Un giro en
la política exterior **Después de García Márquez** Las promesas que abre la paz

El mundo
cambia

EXPLORADOR

2